

Señores

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL

E. S. D.

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA** contra la **SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL NÚMERO 4 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN**

DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en mi condición de apoderado judicial de **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**, de conformidad con el poder que anexo al igual que la copia de mi tarjeta profesional para acreditar mi calidad de abogado, interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL NÚMERO 4 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN**.

I. HECHOS

- 1.** El señor René Alfonso Monsalve Lopera promovió proceso ordinario laboral en busca de que se declarara como despido sin justa causa la terminación laboral que efectuó mi representada el día doce (12) de septiembre de 2008, y consecuentemente se condenara a cancelar la indemnización por despido injusto y el valor total de salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, derechos convencionales, aportes a seguridad social y otros emolumentos, dejados de percibir durante el período en que ha estado despedido, y la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía.
- 2.** Dentro de los argumentos de la demanda, el demandante indicó que la terminación del contrato de trabajo con justa causa fue irregular e ilegal, pues no cumplió con los requisitos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2010 suscrita con "AGRETRITRENES", lo que torna el despido como injusto.
- 3.** El proceso antes mencionado le correspondió en primera instancia al Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga - Magdalena.
- 4.** El diez (10) de septiembre de 2013, fue proferida sentencia de primera instancia en la que se resolvió condenar a mi representada a lo siguiente:

"PRIMERO: DECLARAR que entre el señor RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA y LA EMPRESA DRUMMOND LTD, existió un contrato de trabajo a término indefinido que inició el día 23 de abril de 2001 hasta el 12 de septiembre de 2008, [...].

SEGUNDO: DECLARAR que LA EMPRESA DRUMMOND LTD, despidió al señor RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA, sin cumplir el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo 2008-2010, en consecuencia reintégrese al demandante al puesto de trabajo que venía ocupando o uno de igual categoría.

TERCERO: Condenar a LA EMPRESA DRUMMOND LTD, a pagar a favor de RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA, las sumas señaladas a continuación:

*SALARIOS..... \$289.684.905.00 M/L
CESANTÍAS.....\$ 24.140.408.83 M/L
INTERESES A LA CESANTÍAS.....\$ 12.070.204.42 M/L
PRIMAS DE SERVICIOS.....\$ 2.645.726.84 M/L
INDEXACIÓN.....\$ 49.643.133.35 M/L SUMA QUE DEBE SER
ACTUALIZADA AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL.*

CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA DRUMMOND LTD, al pago de los derechos convencionales solicitados por el demandante, tales como bonificaciones de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia."

5. El fallo fue apelado por mi representada en la oportunidad legal correspondiente.
6. El diecinueve (19) de diciembre de 2013, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta emitió fallo de segunda instancia, en el cual **revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar absolvió a mi representada de todas las pretensiones de la demanda.**
7. Los argumentos en los cuales la Sala Segunda de Decisión Laboral sustentó su decisión y que fueron de interés en el recurso de casación conocido y decidido por esta Sala Laboral de Descongestión, fueron los relativos a que **la Convención Colectiva de Trabajo de AGRETRITRENES 2008-2010 en la que el demandante sustenta sus peticiones, no cuenta con el soporte de su depósito en tiempo y por ende no fue posible verificar la exigencia del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo**, de la que pende su validez, eficacia y exigibilidad.

8. El demandante René Alfonso Monsalve, a través de apoderado, interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la decisión de segunda instancia proferida, y lo fundamentó mediante tres cargos por la causal primera de casación "*Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea*".
9. Luego de agotadas las etapas procesales correspondientes, la Sala Laboral de Descongestión accionada, mayoritariamente decidió **CASAR** la sentencia dictada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, y en sede de instancia **CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga el 10 de septiembre de 2013.
10. La sentencia proferida por decisión mayoritaria de esta Honorable Sala de Descongestión Laboral accionada, casó la sentencia de segunda instancia basada en que mi representada (i) no planteó ningún ataque en la contestación de la demanda en torno a la validez de la convención colectiva, (ii) ni en el desarrollo del proceso ni de la apelación del fallo de primera instancia se planteó esa discusión, por lo que (consideró) que el Tribunal no podía tocar ese punto en el fallo, así:

"Lo anterior resulta suficiente para casar la sentencia confutada, sin necesidad de abordar el estudio de los cargos que se dirigen por la vía directa, ello en la medida en que esta Sala ha precisado que si el tema relativo a la validez de la convención colectiva no es planteado al contestar la demanda como argumento de ataque ni se vislumbra en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, se entiende que se trató de un punto indiscutido por las partes sobre el que no es posible volver. Así se sostuvo en la sentencia CSJ SL20037-2017..."

11. Acto seguido, el fallo atacado en la presente acción de tutela dijo sustentarse en la sentencia de casación SL 20037-2017, con los que esta Sala de Descongestión mayoritariamente consideró, de forma errada (ya que después de lo transcrito la Corte sienta una regla desconocida por la Sala de Descongestión), estar acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

"Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se

haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 – 2014, SL4427 – 2014 y SL 930 – 2014, presupuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que el tema relativo a la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes.

Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685 «al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia», la fuente normativa de la prestación”.

- 12.** Sin embargo, la Honorable Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, en su fallo, **omitió transcribir los párrafos siguientes de la sentencia que citó como base de su decisión (SL 20037-2017), ya que, de haberlo hecho, hubiera quedado en evidencia lo que en realidad constituye la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y es que, en todo caso, debe estar acreditado el requisito legal de la constancia de depósito en tiempo de una convención colectiva de trabajo, cuando es la fuente del derecho debatido en un proceso.** En efecto, dijo la Corte:

*"De otra parte, con independencia de lo tenue que le pueda resultar a la censura **el sello que se reporta a folio 343 del plenario** en armonía con el que obra a folio 351, se infiere que la convención colectiva con vigencia 2001 – 2002 adosada, se suscribió el 11 de junio de 2001 **y se depositó** el 12 del mismo mes y año, y al día siguiente se allegaron sus anexos como se describe en la respectiva nota de la Dirección Regional Bogotá - Cundinamarca, es decir, dentro del término legal.*

*De tal suerte que no solamente porque en el acontecer litigioso ECOPETROL no puso en duda que al demandante se le aplicara la normativa en que aquel fundaba sus súplicas, al punto que al esgrimir la defensa adujo que la liquidación de las prestaciones se ajustaba a las directrices convencionales, **sino también porque en el plenario obra la prueba que demuestra la satisfacción del***

requisito de solemnidad echado de menos, se concluye que el cargo carece de soporte y por ello se declarará infundado”.

- 13.** Es evidente entonces que el propio precedente citado en el fallo jamás ha dejado de lado la imperiosa necesidad que se acredite el requisito de **solemnidad** del depósito en término de la Convención Colectiva de Trabajo, aun cuando no se haya discutido la validez de la misma en el proceso, contrario a lo concluido por la sentencia proferida y objeto de la presente acción de tutela. Y, como la Sala accionada casó la sentencia, es claro que desconoció la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sin competencia para ello y afectando los derechos fundamentales de mi representada.
- 14.** En realidad, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha exigido que cuando un derecho debatido en un juicio penda de una convención colectiva de trabajo la misma debe aportarse (auténtica o en copia), **y, en todo caso, debe acreditarse que se cumplió con la exigencia del depósito de la convención, realizado en tiempo.**
- 15.** Esto se puede evidenciar en las sentencias con radicación 15120 del 16 de mayo de 2001, radicación 38945 del 9 de agosto de 2011, radicación 45332 del 27 de abril de 2016, radicación 64611 de 24 de enero de 2018, así como en sentencia de casación 13 de mayo de 2007 (Citada en Sentencia 29212 del trece (13) de mayo de 2008), todas ellas proferidas por la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia.
- 16.** No debe pasarse por alto que el fallo de casación objeto de la presente acción de tutela, tuvo un Salvamento de Voto del Honorable Magistrado Omar de Jesús Restrepo Ochoa, en el que indicó que *"ha debido mantenerse incólume la decisión de primer grado, ya que el tribunal no cometió dislate alguno, ni jurídico ni fáctico y, además, decidir lo contrario es incurrir en una contradicción frente a casos similares."*, argumentando lo siguiente:
- "Mi inconformidad radica en que la Sala mayoritaria no tuvo en consideración el criterio reiterado de esa corporación, que se trajo a colación en la sentencia CSJ SL397-2020, en la que se resolvió una acusación similar a la que se planteó en la providencia de la que me aparto, vale decir, se cuestionó la inobservancia del artículo 66A del CPTSS, pues el Tribunal desató la apelación pronunciándose sobre la validez de la convención colectiva de trabajo, aspecto que no fue controvertido en la sustentación del recurso vertical. En aquella decisión, –que fue adoptada por la mayoría de esta misma colegiatura– se recordó que, en observancia del artículo 469*

del CST, cuando la convención colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el ad quem tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia."

17. Como puede observarse, el Salvamento de Voto del fallo proferido, coincide en que la decisión mayoritaria optada por la Sala accionada, desconoce la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, y con ello se han vulnerado los derechos fundamentales de mi representada.
18. La vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al principio de legalidad; el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio, el derecho a la defensa; el derecho de acceso a la administración de justicia (artículos 29 31, 33 y 228 de la CP), de mi representada con el fallo proferido por la Sala de Descongestión accionada, se concreta en el desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia (sin tener competencia para desconocerla), respecto de la exigencia del depósito de la convención colectiva de trabajo, como carga de la prueba del demandante cuando pretende la aplicación de derechos derivados de una convención colectiva de trabajo.
19. El 20 de mayo de 2016 el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1781 de 2016 *"Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia"*, ley que en su ARTÍCULO 1º. Adicionó el Parágrafo 2 al Artículo 15 de la Ley 270 de 1996 y un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, de la siguiente forma:

"PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descongestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar el término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.

(...)

Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida."

Con fundamento en la norma citada en precedencia, la Sala de Descongestión accionada carece de competencia para dictar un fallo a través del cual se modifica la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió en este proceso.

- 20.** Por lo anterior, mi representada interpuso incidente de nulidad en contra del fallo de la accionada, por modificar la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, sin tener competencia para ello, causal contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, los numerales 1 y 2 del artículo 133 del Código General del Proceso, y el artículo 16 de la ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 2 de la ley 1781 de 2016).
- 21.** Al resolver el incidente de nulidad la Sala 4 de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó su fallo, manteniendo así la vulneración de derechos fundamentales de mi representada.
- 22.** En los fundamentos para resolver el incidente de nulidad, la Sala accionada se mantuvo en su errónea y parcializada interpretación de la Sentencia SL20037 de 2017, de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, pero además **NO** analizó ninguno de los precedentes jurisprudenciales citados por mi representada en dicho escrito, que dan cuenta de la exigencia del depósito de la convención colectiva de trabajo, como carga de la prueba del demandante cuando pretende la aplicación de derechos derivados de dicho instrumento colectivo.
- 23.** La Sala 4 de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con la sentencia **S2161** del nueve (9) de junio de 2020, notificada el diez (10) de julio de 2020, vulneró los derechos fundamentales de mi representada al i) incurrir en un defecto orgánico evidente, por modificar en dicha decisión la pacífica jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia sin tener competencia para ello; y ii) al sustentar el equivocado fallo proferido en jurisprudencia que no coincide con las conclusiones alcanzadas y tampoco ostentan la identidad fáctica requerida para su aplicación.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

Fundamento la presente acción en los artículos 13, 29 y 86 de la Constitución Política de Colombia, en el Decreto 2591 de 1991, y en la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre procedencia de acciones de tutela contra sentencias judiciales, específicamente, en las sentencias C-590 de 2005, SU-813 de 2007, T-1341 de 2008, SU-023 de 2018 y SU-115 de 2019.

1. CRITERIOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN.

Ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-328 de 2010, entre otras, que los criterios generales de procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial son:

*"(...) **requisitos de carácter procedimental** encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso.¹ A juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que 'en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.'²"*

En consecuencia, debe precisarse que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial son los siguientes:

"(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto

¹ Corte Constitucional. Sentencia SU-813 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería.

² Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Trujillo.

*decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.*¹⁸

En el presente asunto, se encuentran acreditados la totalidad de los criterios generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia judicial señalados la Corte Constitucional, tal como se demuestra a continuación.

1.1. Relevancia Constitucional:

El presente asunto muestra gran relevancia constitucional, por tratarse, de una vulneración a los derechos fundamentales a (i) la igualdad (Artículo 13 de la CP), (ii) el principio de legalidad; (iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; (iv) el derecho a la defensa; (v) el derecho de acceso a la administración de justicia (artículos 29 31, 33 y 228 de la CP), de mi representada, en virtud de la decisión adoptada por la Sala 4 de descongestión de la Sala Laboral de La Cortes Suprema de Justicia, tal como se expondrá en detalle a lo largo de la presente acción.

1.2. Requisito de inmediatez:

Se debe tener en cuenta que: (i) el fallo de la Sala Laboral de Descongestión 4 de la Corte Suprema de Justicia fue notificada el diez (10) de julio de 2020 (ii) mi representada presentó incidente de nulidad en contra de dicho fallo, el pasado diez (10) de septiembre de 2020; (iii) La resolución del incidente de nulidad fue notificada en el estado del cuatro (4) de mayo de 2021; y (iv) Luego de resuelto el incidente de nulidad, el proceso ingresó nuevamente al despacho para la sustanciación del Salvamento de Voto, por lo que se encuentra plenamente acreditado el principio de inmediatez, pues el fallo objeto de la presente acción de tutela pertenece a un proceso aún en curso, y en todo caso no ha transcurrido el plazo de seis meses que ha fijado la Corte Constitucional como parámetro de inmediatez para este tipo de acciones. (véase lo indicado al respecto en sentencia T-412/18).

1.3. Agotamiento de los medios judiciales ordinarios:

En la presente acción de tutela se cumple de manera evidente con el principio de subsidiariedad, en la medida en que, al haberse agotado el recurso extraordinario de casación, e incluso al haber presentado el incidente de nulidad contra la decisión de la Sala de Descongestión accionada, se encuentran agotados todos los medios de defensa judiciales al alcance de mi representada.

³ Corte Constitucional. Sentencia T-1341 de 2008.

Respecto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad en supuestos análogos al presente asunto, en el trámite de una acción de tutela dirigida contra sentencia de La Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, recientemente la Corte Constitucional mediante sentencia T-248/18 indicó:

*"En el asunto que se examina, **contra la decisión adoptada en sede de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia no procede ningún otro recurso.** Por lo anterior, se puede establecer que la accionante utilizó todos los medios ordinarios a su disposición. En consecuencia, **la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad**". (Negritas y subrayas fuera de texto)*

De lo anterior, se concluye sin dubitación alguna, que la presente acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad.

1.4. Carácter decisivo de la irregularidad:

Al fallar la Sala 4 de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificando el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de esta alta corte, sin tener competencia para ello, en relación con la exigencia del depósito de la convención colectiva de trabajo, la cual debe ser aportada por el demandante cuando pretende la aplicación de derechos derivados de una convención colectiva de trabajo, y que además debe ser verificada por el fallador aun cuando esto no haya sido alegado por la parte demandada, **tal como lo dicta claramente la senda jurisprudencia aplicable al caso.**

La modificación de la jurisprudencia de la Sala Laboral de Descongestión accionada, sin tener competencia para ello, constituye una violación a los derechos fundamentales de mi representada.

2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN.

En cuanto a los criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-328 de 2010, que ellos:

"(...) aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar de (sic) los derechos fundamentales del reclamante."

Así pues, cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la jurisprudencia constitucional señala que hay lugar a declarar la existencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial incurre en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental de tal dimensión que permite constatar a simple vista su contrariedad con el orden constitucional. En ese sentido ha señalado que:

"(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes – para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales."

En el presente caso, como se procede a demostrar, la Corporación accionada incurrió en un defecto orgánico y un defecto material o sustantivo.

2.1. DEL DEFECTO ORGÁNICO.

La sentencia objeto de la acción de tutela, de manera evidente modificó la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, sin tener competencia para ello.

Específicamente, respecto de la ley 1781 de 2016, se llama especialmente la atención por cuanto el Congreso de la República al crear las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, limitó su competencia y prescribió expresamente que en caso de que la mayoría de los integrantes de las salas consideraren necesario modificar la jurisprudencia de la Sala Permanente del alto Tribunal, **deberían remitir el expediente**

a dicha sala para poner a su consideración la modificación estimada. Veamos lo que indicó expresamente la norma precitada:

"Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida."

En el fallo objeto de la presente acción de tutela, la Sala Laboral de Descongestión indicó lo siguiente:

"Lo anterior resulta suficiente para casar la sentencia confutada, sin necesidad de abordar el estudio de los cargos que se dirigen por la vía directa, ello en la medida en que esta Sala ha precisado que si el tema relativo a la validez de la convención colectiva no es planteado al contestar la demanda como argumento de ataque ni se vislumbra en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, se entiende que se trató de un punto indiscutido por las partes sobre el que no es posible volver."

Sin embargo, tal conclusión implica una modificación en la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, como se indicó las salas laborales de descongestión no son competentes para cambiar la jurisprudencia de la sala laboral permanente, pues en los casos donde consideren que es procedente, su deber es devolver el expediente para los fines correspondientes.

Reiterando que en el caso concreto el debate se centra en que i) el señor René Alfonso Monsalve pretende que su despido sea injusto porque no se cumplió el procedimiento establecido en la Convención Colectiva del Trabajo, es decir, la fuente de derecho de sus pretensiones es dicho instrumento colectivo; ii) Con el escrito de demanda, el actor no aportó la constancia de depósito de dicha Convención; y iii) Mi representada no alegó en instancias la inexistencia de la constancia de depósito de la Convención Colectiva del Trabajo.

La Sala Laboral **permanente** de la Corte Suprema de Justicia tiene una posición jurisprudencial clara ante estos supuestos fácticos, que se exponen a continuación.

- **LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO SOLEMNE DEL DEPÓSITO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, CUANDO SE RECLAMEN DERECHOS QUE EMANEN DE ELLA.**

Recordemos que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que *"La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto."*

La jurisprudencia de la Sala Laboral **permanente** de la Corte Suprema de Justicia ha establecido de manera reiterada que cuando se debate un derecho que tiene como fuente la convención colectiva de trabajo debe cumplirse con el requisito solemne de aportar al proceso el depósito efectuado dentro de los quince días siguientes a su suscripción para su exigibilidad, además de indicar que esta validación por el fallador debe efectuarse aún sin haber sido alegada por la parte demandada.

En sentencia con radicación 15120 del 16 de mayo de 2001, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la Convención Colectiva de Trabajo requiere de un acto solemne, pues para que produzca efectos jurídicos se requiere la acreditación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para su constitución, como lo es el acta de depósito:

*"Y como consecuencia de ello ha entendido, reiterada y pacíficamente la jurisprudencia, que al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, **su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo.**"*

En sentencia de casación del 13 de mayo de 2007 (Citada en Sentencia 29212 del trece (13) de mayo de 2008), la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aclaró que el requisito de acreditar el depósito de la convención colectiva, realizado en los quince días siguientes a su suscripción, como elemento de validez del acuerdo colectivo, no desapareció con el artículo 54A del CPT y SS. Dijo la Corte en esa sentencia:

"El problema jurídico a resolver es si el depósito de un ejemplar de la convención colectiva de trabajo ante el Ministerio de la Protección Social, dentro de los 15 días siguientes a su firma, como requisito de validez del convenio colectivo, fue suprimido o modificado por el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

...

*El artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo señala la forma como debe celebrarse la convención colectiva para que produzca efectos, esto es, por escrito, en tantos ejemplares cuantas sean las partes **y uno más que se depositara a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su firma**, ante el Ministerio de la Protección Social, **requisito que se debe acreditar en procesos laborales en los que se pretenda el cumplimiento de obligaciones convencionales.***

*Por su parte, el artículo 54 A del CPTSS tiene por auténtica la reproducción simple de la convención colectiva de trabajo **y de la constancia o certificación que haga parte o deba anexarse a dicho documento**, de suerte que el legislador, al eliminar el requisito de la autenticidad, tanto para el texto del acuerdo como para su constancia, mantuvo las exigencias de validez y eficacia, específicamente la relacionada con el depósito oportuno. (Subrayo).*

Posteriormente en sentencia de casación de 9 de agosto de 2011 radicación 38945, se mantuvo el criterio de la siguiente manera:

*"En este orden de ideas, advierte la Corte que revisada la primera página del anexo que contiene la convención colectiva de trabajo, obra comunicación del 11 de junio de 2001 suscrita tanto por el apoderado general de la demandada como por el presidente de la organización sindical, en la que se lee que en los términos del artículo 469 del C.S.T. se hace el depósito del convenio colectivo con vigencia de dos años, a partir del 1º de enero de 2001, firmada en la misma fecha, es decir, el 11 de junio del 2001. Además, se observa, al mismo folio, **de manera casi imperceptible, el rastro de un sello ilegible, que no permite tener certeza de la fecha de su depósito.***

Y si ello es así, no es posible establecer si el pregonado depósito se hizo a más tardar dentro de los quince días siguientes a la firma del acuerdo

colectivo, por cuanto ello no emana de la documental en comento, que dicho sea de paso, necesariamente debió acreditarse por quien pretendió que se le aplicaran los beneficios de la convención. De modo que sin dubitación alguna, para la Corte es claro, que no existe prueba de la constancia de depósito conforme a lo mandado en el multicitado artículo 469 de la codificación laboral y de la seguridad social".
(Subrayo)

En la sentencia SL 5282 de 2016, radicación 45332 de 27 de abril de 2016, La Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia indicó, en relación con la verificación que debe realizarse del depósito de la Convención Colectiva del Trabajo y la fecha en que se efectuó dicho trámite, aún sin haber sido debatido por las partes, lo siguiente:

"En efecto, al hacer la revisión objetiva de dicho instrumento colectivo, evidencia la Sala que el juez de apelaciones no incurrió en defecto alguno en su valoración, pues tal como acertadamente lo expuso en la sentencia recurrida en casación, de los folletos adosados no es posible establecer la fecha en que se verificó el depósito de dicho instrumento, con miras a constatar si tal exigencia se satisfizo dentro de los 15 días siguientes a su firma, como lo requiere el art. 469 del CST.

Nótese, además, QUE EN LA DEMANDA INICIAL NADA SE DIJO SOBRE EL DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN ALUDIDO, Y NINGUNA MANIFESTACIÓN SOBRE ESE MISMO TÓPICO HIZO LA DEMANDADA EN EL ESCRITO DE RESPUESTA, de suerte que este preciso asunto fue materia de elucidación en las instancias, de ahí que conforme a las reglas sobre distribución de cargas probatorias en los procesos judiciales, sobre el actor recaía la obligación de demostrar el cumplimiento de la exigencia echada de menos.

Aquí y ahora, conviene memorar que esta Sala tiene adoctrinado que aun cuando el art. 54 A del CPT y SS tiene por auténtica la reproducción simple de la convención colectiva de trabajo y de la constancia o certificación que haga parte o deba anexarse a dicho documento, lo cierto es que, si bien el legislador eliminó la necesidad de la autenticidad para esos dos textos, **mantuvo la exigencia del depósito oportuno como requisito de validez y eficacia del instrumento colectivo** (CSJ SL, 13 mar. 2207, rad. 27575; CSJ SL, 9 ago. 2011, rad. 38945 y CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 37106).

*Bajo este entendimiento, la convención colectiva cuya indebida apreciación se censura, **no se puede tener como un acto jurídico válido, fuente de derechos** y, en esa medida no erró el sentenciador de segundo grado".*
(Subrayo)

También fue señalado a través de sentencia SL 378-2018, radicación 64611 del 24 de enero de 2018, donde no solo reitera su posición respecto del requisito solemne de aportar el depósito de la Convención Colectiva del Trabajo cuando se requiere como fuente de los derechos reclamados, también indicó que esta validación por el fallador debe efectuarse aún sin haber sido alegada dentro del recurso de apelación:

*"En cuanto al segundo de los argumentos, **debe advertirse que el Tribunal no ignoró que la empresa demandada no planteó como motivo de inconformidad la circunstancia de la falta de depósito**, pues así lo manifestó en la sentencia, **solo que estimó que por ser la convención colectiva la fuente del derecho que estaba en disputa, sí era necesario estudiar los requisitos de la misma.***

Y sobre el particular, profusamente esta Sala ha analizado el contenido del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y ha considerado que se trata del establecimiento de un límite a la competencia del juzgador de segundo grado para resolver el recurso de apelación, de suerte que este solo puede ocuparse de proveer sobre los puntos materia de inconformidad propuestas por el recurrente, pues de lo contrario, incurriría en un claro desconocimiento del debido proceso y en una directa vulneración de aquél precepto instrumental.

Sin embargo, también ha asentado la Corte que en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas que consagran los derechos sustanciales en disputa, el ad quem no está sometido a restricción alguna, en la medida en que es al juzgador a quien le corresponde encontrar y aplicar el derecho en el caso concreto (CSJ SL2939-2016).

*En la sentencia recurrida, previo a resolver las inconformidades expuestas en el escrito de alzada, el Tribunal procedió a examinar el expediente en busca de la convención colectiva de trabajo invocada como soporte de la pretensión de reconocimiento de la pensión de jubilación. Es decir, **antes que incursionar en el análisis de fondo de los cuestionamientos efectuados por el demandante a la decisión del a quo, el ad quem procedió a indagar sobre la fuente del derecho debatido; en este caso, uno estipulado en un convenio colectivo***

de trabajo, y en vista de que no encontró incorporada al expediente la constancia de depósito de dicho acuerdo, procedió a revocar la sentencia estimatoria proferida por el sentenciador de primer grado.

Si bien esta Corporación ha reiterado que en casación la convención colectiva solo es una prueba, por manera que no procede la inclusión de sus contenidos normativos en la proposición jurídica, también ha destacado su importancia como fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes que quedan cobijadas por sus preceptos. En ese sentido, en la misma forma en que una vez delineado el contexto fáctico del caso, el fallador procede a buscar el precepto legal llamado a producir efectos, cuando de un derecho convencional se trata, ese mismo operador judicial debe buscar la fuente generadora de ese derecho en aras de examinar si se dan los supuestos fácticos que impongan la aplicación del texto convencional, que es ley para las partes.

Así las cosas, ante la ausencia de prueba de la nota de depósito del acuerdo convencional, es claro que el colegiado de segunda instancia no podía partir de la existencia de la norma sustancial -por su contenido-, sino que, contrario a lo planteado por la censura, hizo bien en indagar por la existencia del derecho a cuyo reconocimiento aspiró el promotor del litigio, entre otras razones, porque requería conocer los supuestos fácticos en perspectiva de definir si reconocía o negaba el derecho deprecado, en tanto, frente a la oposición de la demandada a las pretensiones de la demanda, se alegó la inaplicabilidad para el actor de la cláusula convencional sobre la cual soportó su pretensión pensional. Bien puede decirse, entonces, que el juzgador tiene el deber de verificar si se cumplen o no los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual: «La convención colectiva de trabajo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto».

De antaño, la jurisprudencia de la Sala ha entendido la exigencia consagrada en la norma legal no solo como una formalidad, sino además, como un requisito asociado estrechamente a la existencia misma del convenio colectivo de trabajo, no tanto por blindar con mayores garantías los derechos de los trabajadores beneficiarios de la convención, como sí por la necesidad de revestir de certeza ante las partes y frente a terceros la existencia del acto y la correlativa generación de efectos del mismo.”

Existen decenas de sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido, que han delineado la jurisprudencia respecto de la exigencia del depósito de la convención colectiva de trabajo, la cual debe ser aportada por el demandante cuando pretende la aplicación de derechos derivados de una convención colectiva de trabajo, y que además debe ser verificada por el fallador aun cuando esto no haya sido alegado por la parte demandada.

En este orden de ideas, es palmario que la Sala Laboral No. 4 de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, **DESCONOCIÓ Y POR ELLO MODIFICÓ LA JURISPRUDENCIA de la Sala Permanente de esta colegiatura, EXTRALIMITANDO SU COMPETENCIA e incumpliendo el procedimiento establecido en la ley 1781 de 2016, en cuanto a modificaciones del precedente judicial de la corporación.**

De allí resulta evidente el defecto orgánico en el que incurrió el fallador, generando así la vulneración de los derechos fundamentales a mi representada.

2.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

LA CONCLUSIÓN ALCANZADA POR LA SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN No. 4 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO CONCUERDA CON LO ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA SL 20037 DE 2017 DE LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dentro de la mencionada sentencia objeto de la presente acción de tutela, la Sala de Descongestión No. 4, sustentó su decisión en la Sentencia SL20037 de 2017 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La transcripción efectuada en la sentencia objeto de la presente tutela, es la siguiente:

"Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 – 2014, SL4427 – 2014 y SL 930 – 2014, presupuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que el tema relativo a

la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes.

Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685 «al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia», la fuente normativa de la prestación”.

Sin embargo, lo citado por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 no corresponde con la posición de la Sala Laboral permanente, quien siempre ha resaltado el ineludible requisito legal de acreditar la constancia de depósito judicial en tiempo de una convención colectiva de trabajo, cuando es la fuente del derecho debatido en un proceso. En los párrafos siguientes a los citados por la accionada, se dijo lo siguiente:

*"De otra parte, con independencia de lo tenue que le pueda resultar a la censura **el sello que se reporta a folio 343 del plenario** en armonía con el que obra a folio 351, se infiere que la convención colectiva con vigencia 2001 – 2002 adosada, se suscribió el 11 de junio de 2001 **y se depositó** el 12 del mismo mes y año, y al día siguiente se allegaron sus anexos como se describe en la respectiva nota de la Dirección Regional Bogotá - Cundinamarca, es decir, dentro del término legal.*

*De tal suerte que no solamente porque en el acontecer litigioso ECOPETROL no puso en duda que al demandante se le aplicara la normativa en que aquel fundaba sus súplicas, al punto que al esgrimir la defensa adujo que la liquidación de las prestaciones se ajustaba a las directrices convencionales, **sino también porque en el plenario obra la prueba que demuestra la satisfacción del requisito de solemnidad echado de menos, se concluye que el cargo carece de soporte y por ello se declarará infundado”.***

Llama poderosamente la atención **que la accionada Sala de Descongestión, mayoritariamente, pretenda desconocer la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, citando un fallo en el que SI EXISTE DENTRO DEL EXPEDIENTE LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE LA CONVENCION COLECTIVA.**

Es apenas evidente que en dicha Sentencia la Sala Laboral permanente validó que existiera el requisito de solemnidad exigido (el depósito de la convención), y a esto le sumó la omisión de la demandada de poner en duda su aplicación a lo largo del proceso.

Salta a la vista el defecto sustantivo, pues no existe base normativa o jurisprudencial que sustente la decisión de la Sala Laboral de Descongestión No. 4, relacionada con obviar el requisito solemne de aportar copia auténtica de depósito de la Convención Colectiva del Trabajo (dentro de los 15 días siguientes a su celebración), cuando se pretende que de ella emanen consecuencias jurídicas para las partes. La Sentencia citada por dicha Sala en el fallo objeto de la presente tutela, resaltó la necesidad de satisfacer ese requisito, e incluso en el caso concreto observó que la demandante cumplió con el requisito de solemnidad que le era exigido, pero que brilla por su ausencia en el proceso instaurado por el señor René Alfonso Monsalve Lopera en contra de mi representada.

Como quiera que, por las razones expuestas, la Sentencia SL 20037 de 2017 por la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia no sustenta el fallo objeto de la presente acción de tutela, es clara la falta de motivación en la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia.

Si la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia hubiese proferido un fallo debidamente motivado y acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, no hubiera violado los derechos fundamentales de mi representada, pues su conclusión no sería otra más que concluir que en el caso concreto debía ser confirmado el fallo de segunda instancia por ser acorde a derecho, y por ello **NO CASAR** la sentencia recurrida por el señor René Alfonso Monsalve Lopera.

III. PETICIÓN.

Comendidamente solicito a su Despacho que:

1. Se **TUTELEN** los derechos a (a (i) la igualdad (Artículo 13 de la CP), (ii) el principio de legalidad; (iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; (iv) el derecho a la defensa; (v) el derecho de acceso a la administración de justicia (artículos 29 31, 33 y 228 de la CP), y al debido proceso de mi representada **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**
2. En consecuencia, de los anterior se **ORDENE** dejar sin valor y efectos la sentencia emitida por la Sala 4 de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, **SL2161 del nueve (9) de junio de 2020**, y se ordene emitir una nueva decisión acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, sin incurrir en los defectos orgánicos y materiales o sustantivos enunciados en el presente escrito.

IV. JURAMENTO

Conforme lo ordena el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, declaro bajo la gravedad del juramento, que no se ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos.

V. PRUEBAS

Respetuosamente solicitamos al señor Juez, se sirva ordenar la práctica de las pruebas que a continuación señalo, como lo autoriza el Artículo 21° del decreto 2591 de 1991:

1. Sentencia SL2161 del nueve (9) de junio de 2020, notificada el diez (10) de julio de 2020, proferida por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia.
2. Sentencias Rad. No. 15120 del dieciséis (16) de mayo de 2001 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3. Sentencias Rad. No. 38945 del nueve (9) de agosto de 2011 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
4. Sentencias Rad. No. 45332 del veintisiete (27) de abril de 2016 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
5. Sentencias Rad. No. 64611 del veinticuatro (24) de enero de 2018 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
6. Sentencias Rad. No. 29212 del trece (13) de mayo de 2008 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
7. Sentencia SL 20037 de 2017 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
8. Decisión incidente de nulidad de la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia.
9. Si la honorable Sala lo considera del caso: oficiar a la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia para la remisión del expediente Rad. No. 47189310500120110026601, proceso iniciado por el señor René Alfonso Monsalve Lopera.

VI. ANEXOS

- Poder debidamente conferido.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Copia de mi tarjeta profesional de abogado
- Lo relacionado en el acápite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES

- La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 4 las recibirá en notificacioneslaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co a quien copio el radicado de esta acción, acorde con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 806 de 2020.
- Por mi parte las recibiré en la Secretaría del Corte o en la Avenida Calle 82 No. 10-33 Piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico: dguerrero@godoycordoba.com

Atentamente,



DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE

C.C. 1.018.426.052 de Bogotá

T.P. 222.814 del C.S. de la J.

Diego Alexander Guerrero Orbe

De: Correo Drummond Ltd <correo@drummondLtd.com>
Enviado el: jueves, 27 de mayo de 2021 07:45 p. m.
Para: Notificaciones GCA; Diego Alexander Guerrero Orbe
Asunto: Poder Mensaje de Datos
Datos adjuntos: CAMARA DE COMERCIO DRUMMOND LTD..pdf; Poder Mensajes de datos - Acción de Tutela.pdf

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (REPARTO)

- SALA PENAL -

E. S. D.

REF. Acción de tutela y solicitud de urgentes medidas provisionales promovida por **DRUMMOND LTD.**, en contra de la **SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL NÚMERO CUATRO (4) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN.**

MARCO TULIO CASTRO CASTILLO, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre de la empresa **DRUMMOND LTD.**, por el presente escrito manifiesto a este despacho que confiero poder especial, amplio y suficiente a la firma de abogados **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, identificada bajo el NIT. 830.515.294-0, para que, a través de **DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.426.052 y Tarjeta Profesional número 222.814 del C. S. de la J o cualquiera de los abogados inscritos en su certificado de existencia y representación legal, represente a **DRUMMOND LTD.**, para que interponga acción de tutela en contra del **SALA DE DESCONGESTIÓN NÚMERO CUATRO (4) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN** por violación al derecho a la igualdad, principio de legalidad, el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio, el derecho a la defensa, el derecho al acceso a la administración de justicia y al derecho al debido proceso de **DRUMMOND LTD.**

Los apoderados quedan facultados especialmente para notificarse y presentar la acción de tutela tachar documentos de falsos, conciliar, transigir, recibir, desistir, interponer recursos, nulidades, reasumir y sustituir este poder, además de las facultades consagradas en el artículo 77 del C.G.P.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, se informa que la firma de apoderada **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.** tiene para efectos de notificaciones judiciales el correo electrónico notificaciones@godoycordoba.com, y el abogado **DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE**, quien se encuentra inscrito en la misma, tiene el correo electrónico dguerrero@godoycordoba.com, el cual se encuentra inscrito en el Registro Nacional del abogados.

Atentamente,

Marco Tulio Castro Castillo
Representante Legal
C.C. 12'646.575 de Valledupar, Cesar



#YoPrevengoElContagio

Marco Tulio Castro Castillo

Director Jurídico

Phone: (+575) 571 9300 Ext. 8543

Cell: (+57) 315 623 9957

Email: mcastro@drummondltd.com

www.drummondltd.com

Twitter @DrummondLtdCo

Instagram @drummondltdco

Facebook Drummond Ltd. Colombia

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (REPARTO)

- SALA PENAL -

E. S. D.

REF. Acción de tutela y solicitud de urgentes medidas provisionales promovida por **DRUMMOND LTD.**, en contra de la **SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL NÚMERO CUATRO (4) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN.**

MARCO TULIO CASTRO CASTILLO, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre de la empresa **DRUMMOND LTD.**, por el presente escrito manifiesto a este despacho que confiero poder especial, amplio y suficiente a amplio y suficiente a la firma de abogados **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, identificada bajo el NIT. 830.515.294-0, para que, a través de **DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.426.052 y Tarjeta Profesional número 222.814 del C. S. de la J o cualquiera de los abogados inscritos en su certificado de existencia y representación legal, represente a **DRUMMOND LTD.**, para que interponga acción de tutela en contra del **SALA DE DESCONGESTIÓN NÚMERO CUATRO (4) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN** por violación al derecho a la igualdad, principio de legalidad, el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio, el derecho a la defensa, el derecho al acceso a la administración de justicia y al derecho al debido proceso de **DRUMMOND LTD.**

Los apoderados quedan facultados especialmente para notificarse y presentar la acción de tutela tachar documentos de falsos, conciliar, transigir, recibir, desistir, interponer recursos, nulidades, reasumir y sustituir este poder, además de las facultades consagradas en el artículo 77 del C.G.P.

Bogotá, D.C.

Calle 72 No.10-07, Of.1302

PBX: (+57-1) 587-1000

Fax: (+57-1) 210-2054

Puerto Drummond

KM 10 Vía Ciénaga – Santa Marta

PBX: (+57-5) 432-8000

Fax: (+57-5) 432-8000 Ext.8013

Valledupar, Cesar

Calle 12 No. 8-42, Of. 303 y 304

Tels.: (+57-5) 5719300

La Loma, Cesar

KM 31 Vía San Roque

PBX: (+57-5) 571-9300

Fax: (+57-5) 571-9490

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, se informa que la firma de apoderada **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.** tiene para efectos de notificaciones judiciales el correo electrónico notificaciones@godoycordoba.com, y el abogado **DIEGO ALEXANDER GUERRERO ORBE**, quien se encuentra inscrito en la misma, tiene el correo electrónico dguerrero@godoycordoba.com, el cual se encuentra inscrito en el Registro Nacional del abogados.

Atentamente,



Marco Tulio Castro Castillo

Representante Legal

C.C. 12'646.575 de Valledupar, Cesar

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: DRUMMOND LTD
Nit: 800.021.308-5
Domicilio: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00307083
Fecha de matrícula: 9 de octubre de 1987
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl1 72 No.10-07 Ofc 1302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: correo@drummondltltd.com
Teléfono comercial 1: 5871000
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl1 72 No.10-07 Ofc 1302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: correo@drummondltltd.com
Teléfono para notificación 1: 5871000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Establecimiento de la Sucursal: E.P. No. 4159 Notaría 21 de Bogotá del 24 de septiembre de 1.987, inscrita el 9 de octubre de 1.987 bajo el No. 7654 del libro VI, se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad DRUMMOND LTD, domiciliada en Alabama (USA) de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que por Resolución No. EX-08349 del 7 de junio de 1988 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 16 de junio de 1988 bajo el No. 8997 del libro VI, se concedió permiso definitivo de funcionamiento a la compañía.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 31 de diciembre de 2100.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: DRUMMOND establecerá una sucursal (la sucursal) en Colombia, con el fin de vincularse a la exploración, instalación, explotación y comercialización de las minas de carbón y de hidrocarburos líquidos y gaseosos en general, incluyendo gas metano asociado al carbón en Colombia y a todas aquellas actividades relacionadas que sean necesarias, aconsejables o convenientes para la conducción de dicho negocio, incluyendo, pero sin limitación, la instalación y operación de instalaciones de transporte y otras infraestructuras.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

Capital asignado a la sucursal: Us\$33,000,000.00

Equivalentes a \$14.897'578.000,00 (catorce mil ochocientos noventa y siete millones quinientos setenta y ocho mil pesos m/cte.).

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O
MANDATARIO**

Facultades de Representación Legal: A. Celebrar contratos, incluyendo el otorgamiento de garantías y la aceptación de ofertas a nombre de la sucursal hasta por los siguientes valores (o su equivalente en pesos colombianos): 1. James Michael Tracy, hasta por una cuantía de USD \$500.000. 2. Kenneth Pierce Dortch, hasta por una cuantía de USD \$10.000.000. 3. Bruce Charles Webster, hasta por una cuantía de USD \$10.000.000. 4. Richard Lynn Mullen, hasta por una cuantía de USD \$100.000. 5. Jose Miguel Linares Martínez, hasta por una cuantía de USD \$100.000. 6. Juan Carlos López González, hasta por una cuantía de USD 10.000. 7. Juan Carlos Córdoba Vélez, hasta por una cuantía de USD \$10.000. B. Independientemente de la cuantía, actuar como representantes legales de la sucursal en cualquier asunto judicial o administrativo, ya sea como demandante o demandado, peticionario, tercero interviniente o parte, ante cualquier autoridad del país incluyendo pero sin limitarse, a cualquier autoridad de la rama ejecutiva, entes de control o cualquier autoridad judicial inclusive ante árbitros y conciliadores. Estos representantes legales tendrán poder total para asegurar la cabal defensa de los intereses de la sucursal y tendrán autoridad para responder bajo juramento o sin él, todos los interrogatorios o cuestionarios hechos a la sucursal en Colombia de DRUMMOND LTD., también podrán conciliar, transigir, recibir o desistir en dichos procedimientos judiciales o administrativos. II. Designar a las siguientes personas para actuar en asuntos tributarios, aduaneros o cambiarios: 1. Kenneth Pierce Dortch, ciudadano de los Estados Unidos de América portador del pasaporte número 503.702.033. 2. Allan Joseph Lang, ciudadano de los Estados Unidos de América, portador del pasaporte número 421601863. 3. Jose Miguel Linares Martínez, ciudadano colombiano, portador de la cédula de ciudadanía 79.267.044. 4. Richard Medina Sanabria ciudadano

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de Colombia, portador de la cédula de ciudadanía 79.659.168. 5. Juan Carlos López González, ciudadano colombiano, portador de la cédula de ciudadanía 80.41.36.92. 6. Santander Alfredo Araujo Castro, ciudadano de Colombia, portador de la cédula de ciudadanía 5.088.026. Los representantes aquí designados están facultados para: a) Firmar y presentar declaraciones tributarias aduaneras y cambiarias, lo que incluye las de: Retenciones en la Fuente, Autorretenciones en la Fuente, Impuestos sobre las Ventas -IVA-, Impuestos de Industria y Comercio, Retenciones en la Fuente de Industria y Comercio, Declaraciones de Importación en cualquier modalidad, declaraciones de exportación en cualquier modalidad, declaraciones de cambio y, en general, cualquier otra declaración tributaria, aduanera o cambiaria, incluyendo declaraciones que puedan ser establecidas después de la fecha en que esta resolución es adoptada; b) Firmar y presentar correcciones a cualquiera de las declaraciones referidas en el literal a) precedente, incluyendo aquellas declaraciones que hayan sido presentadas antes de la fecha de esta resolución; c) Firmar, presentar y corregir de requerirse, declaraciones informativas de precios de transferencia, documentación comprobatoria de precios de transferencia y cualquier otra documentación relacionada con precios de transferencia, que pueda ser requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por cualquier otra entidad que pueda estar encargada de auditar el cumplimiento de precios de transferencia en Colombia; d) Firmar, presentar y corregir de requerirse, solicitudes de devolución, relacionadas con saldos a favor o pagos en exceso de impuestos, y para representar a la sucursal en Colombia de DRUMMOND LTD., a lo largo de los procesos de devolución, incluyendo facultades para firmar y presentar respuestas a requerimientos ordinarios de información o documentación, recibir y negociar los títulos de devolución de impuestos, conocidos como TIDIS, entre cualquier otra que pueda ser necesaria para atender los procesos de devolución; e) Reportar información en medios magnéticos y de relevancia tributaria, responder requerimientos ordinarios de información o documentación que haga cualquier administración tributaria, aduanera o cambiaria en Colombia, firmar y presentar respuestas a requerimientos especiales, ampliaciones a requerimientos especiales, pliegos de cargos, formular excepciones contra mandamientos de pago, firmar y presentar recursos (y. Gr. Reposición, reconsideración y apelación, entre otros), desistir, transigir, recibir, reasumir, terminar por mutuo acuerdo, conciliar procesos judiciales de impuestos, y cualquier otra que pueda ser requerida para defender adecuadamente los intereses de la sucursal, en

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier controversia relacionada con impuestos, aduanas o cambios internacionales; f) Actualizar el Registro Único Tributario de la sucursal, si se requiere, solicitar resoluciones de facturación cuando se requiera, y en general, cualquier otra acción ordinaria con las administraciones tributarias en Colombia, tendientes a asegurar el pronto y adecuado cumplimiento tributario, aduanero y cambiario; y, g) Designar ya sea apoderados especiales o generales para ejercer cualquiera de las capacidades arriba mencionadas y para representar a la sucursal ante las autoridades judiciales en Colombia. III. Designar a las siguientes personas como únicos representantes legales autorizados para presentar declaraciones de Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre la Renta para La Equidad -CREE-, Impuestos a la Seguridad Democrática, impuestos al Patrimonio, Impuestos a la Riqueza así como para firmar y presentar correcciones a cualquiera de las declaraciones mencionadas en este punto. III: 1. Kenneth Pierce Dortch, ciudadano de los Estados Unidos de América portador del pasaporte número 503.702.033. 2. Allan Joseph Lang, ciudadano de los Estados Unidos de América, portador del pasaporte número 421601863. 3. Jose Miguel Linares Martínez, ciudadano colombiano, portador de la cédula de ciudadanía 79.267.044. 4. Richard Medina Sanabria ciudadano de Colombia, portador de la cédula de ciudadanía 79.659.168. IV. Además de los representantes legales ya señalados, podrán actuar como podrán actuar como representantes para estos efectos judiciales y administrativos, las siguientes personas: 1. Santander Alfredo Araujo Castro, ciudadano de Colombia, portador de la cédula de ciudadanía 5.088.026; 2. Marco Tulio Castro Castillo, ciudadano de Colombia, portador de la cédula de ciudadanía 12.646.575; 3. Allan Joseph Lang, ciudadano de los Estados Unidos de América, portador del pasaporte número 421601863.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre de 2016, inscrita el 11 de octubre de 2016 bajo el número 00262437 del libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL	
LINARES MARTINEZ JOSE MIGUEL	C.C. 000000079267044

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL

CORDOBA VELEZ JUAN CARLOS C.C. 000000019385160
REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O
CAMBIARIOS

MEDINA SANABRIA RICHARD C.C. 000000079659168
Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre
de 2016, inscrita el 26 de octubre de 2016 bajo el número 00262959 del
libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL	
TRACY JAMES MICHAEL	P.P. 000000545474160

REPRESENTANTE LEGAL	
DORTCH KENNETH PEARCE	P.P. 000000503702033

REPRESENTANTE LEGAL	
WEBSTER BRUCE CHARLES	P.P. 000000435530869

REPRESENTANTE LEGAL	
MULLEN RICHARD LYNN	P.P. 000000422056572

REPRESENTANTE LEGAL	
LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	C.C. 000000080413692

Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre
de 2016, inscrita el 11 de octubre de 2016 bajo el número 00262437 del
libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CREE, SEGURIDAD DEMOCRATICA, PATRIMONIO, RIQUEZA	
---	--

LINARES MARTINEZ JOSE MIGUEL	C.C. 000000079267044
------------------------------	----------------------

REPRESENTANTE LEGAL PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CREE, SEGURIDAD DEMOCRATICA, PATRIMONIO, RIQUEZA	
---	--

MEDINA SANABRIA RICHARD	C.C. 000000079659168
-------------------------	----------------------

Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre
de 2016, inscrita el 26 de octubre de 2016 bajo el número 00262959 del
libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CREE, SEGURIDAD DEMOCRATICA, PATRIMONIO, RIQUEZA	
---	--

DORTCH KENNETH PEARCE	P.P. 000000503702033
-----------------------	----------------------

REPRESENTANTE LEGAL PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CREE, SEGURIDAD DEMOCRATICA, PATRIMONIO, RIQUEZA	
---	--

LANG ALLAN JOSEPH	P.P. 000000421601863
-------------------	----------------------

Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre
de 2016, inscrita el 11 de octubre de 2016 bajo el número 00262437 del
libro VI, fue (ron) nombrado (s):

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre	Identificación
REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O CAMBIARIOS	

LINARES MARTINEZ JOSE MIGUEL	C.C. 000000079267044
------------------------------	----------------------

Que por Resolución no. sin num de Junta de Socios del 23 de septiembre de 2016, inscrita el 26 de octubre de 2016 bajo el número 00262959 del libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O CAMBIARIOS	
DORTCH KENNETH PEARCE	P.P. 000000503702033
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O CAMBIARIOS	
LANG ALLAN JOSEPH	P.P. 000000421601863
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O CAMBIARIOS	
LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	C.C. 000000080413692
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS O CAMBIARIOS	
ARAUJO CASTRO SANTANDER ALFREDO	C.C. 000000005088026
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	
ARAUJO CASTRO SANTANDER ALFREDO	C.C. 000000005088026
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	
CASTRO CASTILLO MARCO TULIO	C.C. 000000012646575
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	
LANG ALLAN JOSEPH	P.P. 000000421601863

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Escritura Pública no. 0000906 de Notaría 29 De Bogotá D.C. del 3 de febrero de 2003, inscrita el 3 de marzo de 2003 bajo el número 00108690 del libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
ERNST & YOUNG AUDIT S A S	N.I.T. 000008600088905

Que por Documento Privado no. 5496 de Revisor Fiscal del 29 de mayo de 2019, inscrita el 30 de mayo de 2019 bajo el número 00295329 del libro VI, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
ALARCON PARRA RAUL VIRGILIO	C.C. 000000079314784
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
ZAMBRANO MATEUS RUTH STELLA	C.C. 000000052165987

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE LA SUCURSAL**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1693	22-IV-1.988	21 BTA.	3-V-1.988-NO.8693
2232	19- V-1.988	21 BTA.	23-V-1.988-NO.8810
547	17-II-1.989	18 BTA.	17-II-1.989-NO.10539
1429	12-IV-1.989	21 BTA.	2- V-1.989-NO.11072
1494	5-IV-1.990	21 BTA.	10-IV-1.990-NO.13548
0033	8- I-1.992	21 BTA.	15- I-1.992-NO.25667
2946	23-XI-1.992	45 STAFE BTA	2-XII-1992-NO.34772

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0005749	1997/06/17	Notaría 29	1997/06/17	00076851
0016416	2003/12/01	Notaría 29	2003/12/03	00113305
0014479	2005/12/14	Notaría 29	2005/12/20	00127857
2011/04/20	Representante Legal	2011/06/17		00199748
10954	2013/11/28	Notaría 72	2013/12/02	00228911
0086	2015/01/20	Notaría 72	2015/01/23	00241591
7090	2016/09/29	Notaría 72	2016/10/03	00262157
07229	2016/10/04	Notaría 72	2016/10/06	00262302
7229	2016/10/04	Notaría 72	2016/10/11	00262431
7229	2016/10/04	Notaría 72	2016/10/11	00262433
7229	2016/10/04	Notaría 72	2016/10/11	00262435

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 0510

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 5.132.718.058

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0510

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de noviembre de 2016.

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 30 de marzo de 2021.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 1 de mayo de 2021 Hora: 09:13:48**

Recibo No. 8321006235

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32100623500001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.018.426.052**

GUERRERO ORBE

APELLIDOS

DIEGO ALEXANDER

NOMBRES



Diego Guerrero Orbe

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

10-JUN-1989

**PASTO
(NARIÑO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

19-JUN-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500102-47161613-M-1018426052-20070803

0127007215A 02 238878382



REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
DIEGO ALEXANDER

APELLIDOS:
GUERRERO ORBE

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RICARDO H. MONROY CHURCH

Diego Alexander Guerrero Orbe

Ricardo H. Monroy Church

UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA

FECHA DE GRADO
16 nov 2012

CONSEJO SECCIONAL
CUNDINAMARCA

CEDULA
1.018.426.052

FECHA DE EXPEDICION
10 dic 2012

TARJETA N°
222814

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO,
PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA
S.A.S."
Nit: 830.515.294-0 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: agodoy@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S."

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. En todo caso, la sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$10.000.000.000,00
No. de acciones	: 10.000.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$152.683.000,00
No. de acciones	: 152.683,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	: \$152.683.000,00
-------	--------------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 152.683,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	C.C. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	C.C. 1.151.946.356	253.718
Gabriela Restrepo Caicedo	C.C. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Maria Alejandra Serrano Ceballos	C.C. 1.144.084.440	325.295
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Paula Andrea Arboleda Villa	C.C. 1.152.201.387	270.475
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amarante Andrea	C.E. 527.443	283576
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	C.C. 1.143.869.669	338180

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Visbal Restrepo Juliana	C.C. 1.020.760.990	290190
Infante Muñoz Juan José	C.C. 1.019.074.242	333069
Puentes Céspedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105
González Rodríguez Jorge Enrique	C.C. 1.072.704.741	331215

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Palacio Varona Daniela	C.C. 1.019.132.452	353.307
Bejarano Rengifo Diana Marcela	C.C. 1.144.087.101	315.617
Ochoa Gonzalez Esteban	C.C. 1.026.152.321	331.096

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número 02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodríguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Efrain Fernández Uribe	C.C. 73.213.659	287.996
Juanita Alexandra Silva Tellez	C.C. 1.023.967.067	334.300
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	280.688
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 000000080086521

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 000000019251626

Por Acta No. 22 del 11 de agosto de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2016 con el No. 02132210 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Veronica Diaz Del Castillo Roman	C.C. No. 000000052698501

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA****PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 000000081717493
Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco Mendoza	C.C. No. 000000019431641
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 000000080086521
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 000000080873703

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 000000019251626

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 000000080086521

Por Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018 con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco Mendoza	C.C. No. 000000019431641

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 000000081717493
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 000000080873703

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 000000019251626

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 14 del 27 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2014 con el No. 01825090 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Socorro Perez Echeverry	C.C. No. 000000031150288

PODERES

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ana Cristina Medina González	C.C. 52.991.736

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Carlos Hernán Godoy Fajardo	C.C. 19.251.626

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Francisco Erney Buriticá Ruiz	C.C. 10.529.620

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Andrés Fernando Da Costa Herrera	C.C. 80.505.099

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Gustavo Gnecco Mendoza	C.C. 19.431.641

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Santiago Andrés Martínez Méndez	C.C. 81.717.493

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
María Isabel Vinasco Lozano	C.C. 53.006.455

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
---------	-----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Jhon Sebastián Molina Gómez

C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:

Sergio Andrés Campos Guzmán

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:

José David Ochoa Sanabria

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.010.214.095

NOMBRE:

Johana Alexandra Duarte Herrera

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 53.077.146

NOMBRE:

Yat Sing Chía Muñoz

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.445.390

NOMBRE:

Jennifer Lorena Molina Mesa

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.129.511.816

NOMBRE:

Daniel Mauricio Contreras Jaimes

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.090.424.399

NOMBRE:

Fabio Andrés Salazar Reslen

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.032.358.377

NOMBRE:

Ricardo José Aguirre Bejarano

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.442.942

NOMBRE:

Ernesto Rosales Jaramillo

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.090.420.262

NOMBRE:

Juan Sebastián Velandia Párraga

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.456.181

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E. P. No. 0002230 del 26 de junio
de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá
D.C.

INSCRIPCIÓN

01147130 del 26 de julio de
2007 del Libro IX

Acta No. 013 del 28 de diciembre

01356856 del 27 de enero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2009 de la Junta de Socios	2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 37.515.210.906

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005.

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 4 de abril de 2021.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de abril de 2021 Hora: 09:13:29**

Recibo No. AA21615159

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21615159642E9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral
Sala de Descongestión N.º 4

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

SL2161-2020

Radicación n.º 68285

Acta 020

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Bogotá DC, nueve (9) de junio dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por **RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA**, contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario que le sigue a **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**.

I. ANTECEDENTES

René Alfonso Monsalve Lopera demandó a la compañía Drummond LTD de Colombia, para que se declare que la terminación de su contrato de trabajo el 12 de septiembre de 2008, fue sin justa causa, por consiguiente que se ordene su reintegro.

Consecuentemente, que se condene a pagarle el valor total correspondiente a la liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, derechos convencionales dejados de percibir durante el tiempo en que se prolongue su despido; la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa; los aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales; y, la sanción moratoria por no consignarle el auxilio de cesantía.

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que con la accionada existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 23 abril 2001 hasta el 12 de septiembre 2008, tiempo durante el cual, hizo parte hasta el 1º de mayo del 2007 de la Junta Directiva Sindical de la Agremiación de Tripulantes de Trenes "AGRETRITRENES"; que el cargo que desempeñaba era el de maquinista de locomotora.

Expuso que el día 15 de agosto del 2008, siendo aproximadamente las 5:30 p.m., en ejercicio de sus funciones llegó con un tren cargado de Carbón al cambiavía n.º 2 ubicado dentro de las instalaciones de la empresa, después de parquearlo en el área establecida para ello, estuvo durante un tiempo dentro de la locomotora esperando la respectiva orden del supervisor, la que debía consistir en esperar que llegara algún tren vacío para luego llevarlo hasta la zona de carga en la mina de carbón, o en su defecto, ir a descansar, porque se acercaba la hora de las 6:00 p.m., que correspondía al cambio de turno y al ingreso de un maquinista que lo relevara, pero en vista que no se le impartió ninguna orden ni venía tren alguno para llevarlo

hasta la zona de carga en la mina, como funcionalmente le correspondía, decidió llamar por radio al supervisor, quien nunca le contestó, por lo que optó por bajarse de la locomotora y al pasar un carro de la compañía le pidió que lo llevara hasta el campamento donde se encontraba el supervisor con el fin de averiguar porque no le contestaba su llamado y a la vez para recibir la orden pertinente o en su defecto agilizar el cambio de turno, sin que con tal decisión se causara ningún traumatismo en la operación.

Explicó que el supervisor lo increpó de forma airada por haberse desplazado hasta el campamento, y sin escuchar sus explicaciones le impidió volver a la locomotora, a pesar de que siempre estuvo a su disposición sin salir de los predios de la empresa, decisión que produjo un retardo en la operación por cerca de 19 minutos mientras otro operador o maquinista lo relevó para continuar con la marcha del tren.

Dijo que fue citado por la oficina de Recursos Humanos el día 2 de septiembre de 2008, para que, en diligencia de descargos rindiera explicaciones por los hechos narrados, y en un tiempo record de diez días calendario, dentro de un maratónico proceso disciplinario desarrollado con violación de sus derechos fundamentales de defensa y al debido proceso, la empleadora procedió unilateralmente el día viernes 12 de septiembre de 2008 a despedirlo, justificándose en un abandono del cargo.

Afirmó que la pasiva procedió de manera irregular e ilegal, debido a que la CCT 2008-2010, exige que la organización sindical escoja y envíe a dos de sus

representantes para que asistan a las diligencias de descargos de sus afiliados y puedan garantizarles el derecho a la defensa, lo cual no se cumplió, como se puede probar con el acta de descargo del 2 de septiembre de 2008, donde consta que solo un representante de la agremiación sindical se hizo presente. Aduce que el despido fue el resultado de una serie de actos sistemáticos de acoso laboral y persecución de la demandada, por haber sido parte durante 4 años de la junta directiva del sindicato.

Aseveró que el artículo 6 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008 -2010 y el Reglamento Interno de Trabajo, establecieron los procedimientos y escalas para la imposición de sanciones disciplinarias y terminaciones de contrato con justa causa legal, lo cual Drummond *dolosamente* vulneró excediéndose al adecuar la sanción con despido por justa causa, graduación que fue supremamente exagerada, desproporcionada e incongruente con los hechos expuestos, porque aún si la conducta se llegare demostrar como una falta, por ser la primera vez no daría más que para una suspensión del contrato de trabajo hasta por 8 días, y de ser la segunda vez hasta por 30 días, más no una arbitraria terminación del mismo.

Al responder la demanda la convocada a juicio, se opuso a las pretensiones, y, en cuanto a los hechos aceptó lo relativo a la existencia de la relación laboral y a la labor desempeñada por el demandante, pero aclaró que el señor René Alfonso Monsalve Lopera, fue llamado a descargos y sancionado varias veces así: el 28 de junio de 2005, por faltar al Reglamento de Movilización de trenes se le aplicó una

sanción de ocho días; el 19 de julio de 2007, por incumplir a las instrucciones impartidas, se le impuso una suspensión del contrato de trabajo por tres días; el 26 de julio de 2007 volvió a incurrir en una falta al reglamento, como resultado se le sancionó con una suspensión del contrato de trabajo por ocho días; y el 22 de agosto de 2008, por violar el Reglamento Interno de Trabajo en sus artículo 73 numeral 23 y los numerales 2, 3, 13, 18 y 41 del parágrafo 12 del artículo 75 y los numerales 11 y 16 del artículo 79 la empresa decidió dar por terminado el contrato de trabajo.

Explicó que el accionante no podía bajo ninguna circunstancia abandonar las máquinas con sus góndolas o vagones enganchados, mucho menos cuando había tres locomotoras unidas con 125 vagones, por el peligro que ello implica y porque así está ordenado en el Reglamento de Movilización de Trenes, que prohíbe abandonar la cabina de las locomotoras, sin que fuera necesario impartir orden alguna al maquinista al respecto, simplemente tenía que esperar dentro del equipo el relevo, ya que dejar solas las locomotoras se considera una falta grave.

Al dar respuesta a los hechos 10º y 11º informó que la obligación de la empresa era,

*[...] llamarlo a descargos tal como lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el momento en que se produjo su retiro de la empresa en su artículo 6º **Y NO** son ciertas las otras afirmaciones que hace el demandante, ya lo hemos dicho: en la CCT está establecido el procedimiento y los términos que tiene la administración para tomar decisiones sobre las sanciones que ha de imponer a un trabajador por violación al Reglamento Interno de Trabajo. La terminación de un contrato no es una sanción.*

Al décimo primer hecho.- No es cierto, es una interpretación errónea: la empresa en el momento de llamar a descargos envía una copia del llamamiento al sindicato, y el sindicato escoge dos miembros para que acompañen al disciplinado a la diligencia de descargo, es el sindicato quien no envió el otro miembro, el hecho de que el sindicato envíe o no envíe a sus representante no invalida el proceso pues la responsabilidad recae sobre la directivas de Sintramienergética, mas nunca sobre la empresa, ella cumple con enviarle la copia al Sindicato. El proceso disciplinario fue estrictamente ceñido a las normas convencionales.

Manifestó que el Reglamento Interno de trabajo, así «[...] como la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época de los hechos establecieron escalas de sanciones y el procedimiento para aplicarlas».

En su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó prescripción, justa causa del despido y manifestación del motivo de la terminación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de septiembre de 2013, decidió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA y LA EMPRESA DRUMMOND LTD, existió un contrato de trabajo a término indefinido que inició el día 23 de abril de 2001 hasta el 12 de septiembre de 2008, [...].

SEGUNDO: DECLARAR que LA EMPRESA DRUMMOND LTD, despidió al señor RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA, sin cumplir el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo 2008-2010, en consecuencia reintégrese al demandante al puesto de trabajo que venía ocupando o uno de igual categoría.

TERCERO: Condenar a LA EMPRESA DRUMMOND LTD, a pagar a favor de RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA, las sumas señaladas a continuación:

SALARIOS.....	\$289.684.905.00 M/L
CESANTÍAS.....	\$ 24.140.408.83 M/L
INTERESES A LA CESANTÍAS.....	\$ 12.070.204.42 M/L

PRIMAS DE SERVICIOS.....\$ 2.645.726.84 M/L
INDEXACIÓN.....\$ 49.643.133.35 M/L SUMA
QUE DEBE SER ACTUALIZADA AL MOMENTO DE LA
LIQUIDACIÓN FINAL.

CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA DRUMMOND LTD, al pago de los derechos convencionales solicitados por el demandante, tales como bonificaciones de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia.

[...]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante fallo del 19 de diciembre de 2013, revocó la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa estrictamente al recurso extraordinario, el Tribunal dijo:

Respecto a la acreditación de la convención colectiva, la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de diciembre de 2003, expuso:

"No puede pues acreditarse en Juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor si no aduciendo su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención.

Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en Juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aún, reconocer derechos derivados de ella en favor de cualquiera de los contendientes. Y si llega reconocer la existencia de aquella sin que aparezca en autos la única prueba legalmente eficaz para acreditarla, comete error de derecho y, por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta..."

Así mismo, si bien es cierto la ley 712 de 2001 mantuvo lo referente a que todos los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines

probatorios, se reputaban auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación y sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros, no es menos cierto que para acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derecho para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico debe acreditar el acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «[...] se servirá confirmar en su integridad el fallo de primer grado, proveyendo en costas lo que corresponda».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los que serán analizados conjuntamente, por cuanto, a pesar de estar orientados por vías distintas, comparten la misma finalidad y proposición jurídica.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía directa por la infracción directa del artículo 66A del CPTSS, quebranto normativo que fue el medio para la aplicación indebida de los artículos 19, 127, 249, 306, 467 y 476 del CST, 8 de la Ley 153 de 1887, 1 de la Ley 52 de 1975, 230 de la CN y 16 de la Ley 446 de 1998.

Cuestiona que el colegiado aun teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 66A del CPTSS decidió analizar una situación que, como la constancia de depósito de la CCT no formaba parte de la impugnación, razón por la cual no le hizo producir efectos al precepto en mención, puesto que se analizó en la alzada una cuestión que no formaba parte de las materias apeladas.

Hizo una sinopsis que se hace del recurso de apelación, e indicó que su valoración como pieza procesal no se cuestiona, donde se aprecia que el impugnante nunca aludió en forma explícita o implícita a la validez de la convención colectiva de trabajo, y por el contrario, se amparó en lo dispuesto en el artículo 6 de ese convenio, como lo tuvo por acreditado el *ad quem* al decir:

"Arguye que el A quo en sus consideraciones para tomar la decisión de condenar a la accionada en tres aspectos, todos los relacionados con el artículo 6º de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2008-2010, como son asistencia de los representantes del sindicato a la audiencia de descargos, las sanciones disciplinarias impuestas al trabajador demandante y con respecto a los términos de envío (sic) de la comunicación al actor asunto que no es parte de la controversia". (Folios 6 y 7 del cuaderno del Tribunal).

[...]

Al obrar de esa manera, aunque afirmó cumplirlo, el Tribunal infringió directamente el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al no tener en cuenta que, por razón del principio de consonancia allí establecido, los jueces de segunda instancia no pueden conocer íntegramente del litigio, pues su competencia se circunscribe al estudio de los específicos puntos que sean motivo de inconformidad de las partes y que conformen un argumento concreto y particular.

En respaldo de sus argumentos el censor transcribió apartes de la sentencia CSJ SL32124, 23 ene. 2008.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa las mismas normas del primer cargo, pero bajo el concepto de interpretación errónea del artículo 66A del CPTSS.

Expone argumentos similares a los del primer cargo para explicar el quebranto normativo, y se apoya en la sentencia CSJ SL27790, 15 may. 2007.

VIII. CARGO TERCERO

Por la vía indirecta acusa como violación medio la aplicación indebida de los artículos 66A del CPTSS y 305 del CPC, quebranto normativo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 19, 127, 249, 306, 467 y 476 del CST, 8 de la Ley 153 de 1887, 1 de la Ley 52 de 1975, 230 de la CN y 16 de la Ley 446 de 1998.

Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hechos:

1.-Dar por probado, sin estarlo que la validez de la convención colectiva de trabajo aportada al proceso formó parte de las materias del recurso de apelación que sustentó la parte demandada contra el fallo de primer grado.

2.-No dar por establecido, a pesar de estarlo, que al sustentar el recurso de apelación la parte enjuiciada no se refirió a la ausencia de la nota de depósito ante la autoridad laboral de la convención colectiva de trabajo aportada al proceso.

3.-No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la parte demandada, al contestar la demanda y al sustentar el recurso de apelación, no puso en duda la validez de la convención colectiva de trabajo.

4.-No tener por probado, pese a estarlo, que la demandada confesó la existencia de la cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2010.

5.-No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la validez y vigencia de la convención colectiva de trabajo no fue un tema debatido en el proceso.

Acusa de mal apreciadas las siguientes pruebas y piezas procesales:

- *Escrito de demanda (folios 1 a 5).*
- *Escrito de contestación de la demanda (Folios 79 a 84).*
- *Auto de fijación del litigio, proferido al 28 de marzo de 2012 (Folio 163).*
- *Escrito por medio del cual el apoderado de la parte demandada sustentó el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (Folios 210 a 213).*

Y como prueba no apreciada:

- *Confesión judicial contenida en el escrito de contestación de la demanda (Folios 79 a 84)*

Para demostrar el cargo se refiere al escrito por medio del cual se sustentó por la demandada el recurso de alzada, para resaltar que en ninguno de sus apartes se hizo referencia directa ni indirecta, a la validez de la CCT y mucho menos, a la falta de prueba de su depósito oportuno, expresa que de su texto, se aprecia que las inconformidades que allí se expresaron fueron las siguientes:

[...]: (i) que el A quo se fundamentó en que la citación que se le envió al actor para asistir a rendir descargos se hizo por fuera de los términos establecidos en la convención colectiva, pero la litis no versó sobre ese asunto; (ii) que según el artículo 6º de la convención colectiva de trabajo se requiere que la empresa conozca la falta para que comience a contarse el término; (iii) que a la accionada se le viola el derecho al debido proceso porque en la demanda no hay ningún hecho relacionado con el tiempo que debe transcurrir entre el conocimiento que tenga la empresa del hecho merecedor de la sanción o del despido y el llamamiento a descargos; (iv) que el demandante no asistió a la audiencia de conciliación y no presentó excusa, luego se debieron presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión de la contestación de la demanda; y, (v) que en la fijación del litigio la discusión no se fundamentó en si el demandante fue llamado a

descargos dentro de los tres días siguientes a que la empresa tuvo conocimiento del hecho de indisciplina.

De igual manera resalta que la validez de la CCT y la prueba de su depósito tampoco formaron parte del debate, pues no fueron controvertidas por la demandada en la contestación de la demanda, ni señaladas en la fijación del litigio; que el juez plural pasó por alto que la convocada a juicio admitió como parcialmente cierto el hecho 13 de la demanda y en la contestación de la demanda de manera general nunca puso en duda la existencia de la CCT ni su validez, por el contrario, admitió su aplicación en el trámite disciplinario.

Finaliza aduciendo que los desaciertos de valoración probatoria condujeron al colegiado a decidir el caso en forma incongruente, al no ajustarse a los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, lo que condujo a la violación del artículo 305 del CPC y, a través de este, a la de las normas sustanciales indicadas en la proposición jurídica del cargo.

IX. RÉPLICA

Para la réplica el artículo 66A del CPTSS no fue vulnerado bajo ninguna de las modalidades que se señalan en los cargos, ya que la consonancia entre la materia contemplada en el fallo de segunda instancia y la prevista en el recurso de apelación sí existió, porque lo que se pretendió en la demanda inicial se resolvió con que la prueba idónea sobre las que se soportaban los derechos reclamados expuestos en el recurso de apelación no era la adecuada.

Indica que en su impugnación al fallo de primer grado solicitó ser eximido de las condenas impuestas, así haya basado su petición en la equivocada apreciación de una prueba que a la postre resultó inadecuada, pero cuya alusión abría las puertas para ser estudiada en la alzada, pues, su sola mención no le confiere la validez y la eficacia que la ley le impone, más cuando la convención colectiva era el único medio probatorio de donde podían emanar las condenas solicitadas en la demanda, a lo que se suma que se trata de una prueba de aquellas denominadas “*ad substantiam actus*” como se desprende de lo normado en el artículo 469 del CST, lo que llevaría a que en el evento que triunfara el argumento basado en la violación al principio de consonancia, los efectos serían inanes porque al constituirse la corporación en sede de instancia, necesariamente tendría que ir a la CCT encontrándose con una prueba que carece de valor.

X. CONSIDERACIONES

Pasa la Sala al estudio de los cargos formulados, ocupándose en primer lugar por razones de método del tercero dirigido por la vía indirecta, el que al igual que los dos restantes, tienen como finalidad demostrar que el colegiado se equivocó al negar las pretensiones del actor, con el único argumento de que la CCT 2008-2010, si bien se reputa auténtica, para acreditarse en juicio su existencia como fuente de derecho, debía probarse que el acta de su depósito se hizo de manera oportuna ante la autoridad laboral.

La posición del recurrente es que la alzada no tenía por qué basar su decisión en ese aspecto, por dos razones

medulares a saber: 1) dicho tópico no fue objeto de debate en las instancias, y; 2) tampoco fue materia del recurso de apelación interpuesto por la pasiva, razón por la cual en virtud de lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS (principio de consonancia) estaba limitada su competencia para pronunciarse al respecto.

Para demostrar el dislate que le endilga a la colegiatura el censor relaciona como mal apreciadas la demanda inicial, la contestación a la misma y el escrito que contiene la apelación interpuesta por la demandada contra la sentencia del *a quo*, piezas procesales que pasan a ser revisadas.

En el líbello introductorio del proceso, las referencias que se hacen a la CCT 2008-2010, se encuentran contenidas en la segunda pretensión en la que se deprecian como condenas consecuenciales a la declaratoria de despido injusto el pago de los derechos convencionales dejados de percibir durante el tiempo que perdure el despido, pedimento frente al cual hubo oposición por parte de la empresa alegando la justeza del finiquito laboral, y expresando lo siguiente:

2. *Se llamó al Sr. René Alfonso Monsalve a rendir sus descargos y se le comunicó al sindicato Sintramienergética, para que dos de sus miembros asistieran a esa diligencia, **tal como lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo**. Aclaro Sr. Juez que el Sindicato no tiene obligación de enviarlos y la empresa no tiene obligación de esperarlos a que lleguen a la diligencia. A la hora programada se inicia la diligencia estén o no estén lo importante es que este el disciplinado y se le haya informado al sindicato para que los envíe, tal como lo hizo Drummond Ltd.*
3. *En la diligencia de descargos el Sr. Rene Alfonso Monsalve aceptó y reconoció su falta.*

En la demanda se formularon los siguientes hechos.

[...]

10. Seguidamente, mi poderdante es citado por la oficina de Recursos Humanos de la Empresa Drummond LTD de Colombia el día 2 de septiembre de 2008 para que en diligencia de descargos, explicara lo consignado anteriormente; no obstante posteriormente la demandada en un tiempo record de diez (10) días calendario dentro de un maratónico Proceso Disciplinario, desprovisto de Derechos Fundamentales Constitucionales como del Derecho a la Defensa, Debido Proceso y demás Garantías, procedió unilateralmente el día viernes 12 de septiembre de 2008 a desvincular o despedir al Sr. René Alfonso Monsalve Lopera, justificándose que existía en un abandono del cargo, procediendo de manera irregular e ilegal.

11. Es de anotar, que la Convención Colectiva de Trabajo 2008 - 2010, exige que la organización sindical escoja y envíe a dos de sus representantes para que asistan a las diligencias de descargos de sus afiliados y puedan garantizar el derecho a la defensa, en este caso del Sr. René Monsalve, lo cual no se cumplió en debida forma, como se puede probar con el acta de descargo del 2/09/2008, que solo un representante de la Agremiación Sindical se hizo presente, y no dos como lo exige la Convención aludida, generándose una falta al Debido Proceso y Derecho a la Defensa.

[...]

13. El art. 6 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008 - 2010 vigente para la época de los hechos y el Reglamento Interno de Trabajo, establecieron los procedimientos y escalas para imposición de sanciones disciplinarias y terminaciones de contrato con justa causa legal, a lo cual Drummond LTD de Colombia dolosamente vulneró y se excedió al adecuar la sanción con despido por justa causa.

Frente a los anteriores hechos se pronunció la empresa demandada, al contestar la demanda, así:

Al décimo hecho: Es cierto parcialmente, dejar solas las locomotoras, lo cual se considera una falta grave, **la obligación de la empresa es llamarlo a descargos tal como lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el momento en que se produjo su retiro de la empresa en su artículo 6º** Y NO son ciertas las otras afirmaciones que hace el demandante, ya lo hemos dicho: **en la CCT está establecido el procedimiento y los términos que tiene la administración para tomar decisiones sobre las sanciones que ha de**

imponer a un trabajador por violación al Reglamento Interno de Trabajo. La terminación de un contrato no es una sanción.

Al décimo primer hecho.- No es cierto, es una interpretación errónea: la empresa en el momento de llamar a descargos envía una copia del llamamiento al sindicato, y el sindicato escoge dos miembros para que acompañen al disciplinado a la diligencia de descargo, es el sindicato quien no envió el otro miembro, el hecho de que el sindicato envíe o no envíe a sus representante no invalida el proceso pues la responsabilidad recae sobre la directivas de Sintramienergética, mas nunca sobre la empresa, ella cumple con enviarle la copia al Sindicato. **El proceso disciplinario fue estrictamente ceñido a las normas convencionales.**

[...]

Al décimo tercer hecho; Es cierto parcialmente, tanto el Reglamento Interno de Trabajo como la **Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época de los hechos establecieron escalas de sanciones y el procedimiento para aplicarlas.** A pesar de que la terminación del contrato por justa causa no es una sanción y así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia en muchas jurisprudencias, **la empresa Drummond Ltd. fue celosa en el cumplimiento del procedimiento establecido convencionalmente.**

De los apartes transcritos de la demanda y su contestación, salta a la vista, que ninguna inconformidad se presentó desde los albores del proceso sobre la existencia y validez de la CCT vigente para la época de los hechos, ese fue un aspecto sacado de controversia, tanto es así que la demandada edificó su defensa en el hecho de que fue celosa en el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 6 convencional, antes de proceder al despido.

Tampoco lo relativo a la validez de la convención colectiva fue un debate que se le hubiera propuesto al Tribunal por parte de la accionada en la alzada, es más toda su inconformidad radicó en torno a la aplicación que hizo el *a quo* del artículo 6 de la CCT 2008-2010, es así como al formular la apelación arguyó lo siguiente:

El a-quo al expresar sus consideraciones para tomar la decisión de condenar a mi cliente, se fundamenta en tres aspectos, todos ellos relacionados con el artículo 6º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 2008-2010.

Son tres aspectos que analiza el a-quo:

a).- Asistencia de los representantes del sindicato a la audiencia de descargos.

b).- En lo que toca a las sanciones disciplinarias impuestas al trabajador demandante y

c).- Con respecto a los términos de envío de la comunicación al demandante, asunto que no es parte de la controversia.

De los tres aspectos anteriores, los dos primeros, no son motivos de condena [...].

[...]

Fundamenta, el a-quo única y exclusivamente la condena multimillonaria a mi cliente argumentando que la comunicación que se le envió, al demandante para que concurriera a rendir descargos, no se realizó dentro de los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. [...].

Lo anterior resulta suficiente para casar la sentencia confutada, sin necesidad de abordar el estudio de los cargos que se dirigen por la vía directa, ello en la medida en que esta Sala ha precisado que si el tema relativo a la validez de la convención colectiva no es planteado al contestar la demanda como argumento de ataque ni se vislumbra en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, se entiende que se trató de un punto indiscutido por las partes sobre el que no es posible volver. Así se sostuvo en la sentencia CSJ SL20037-2017, de la cual se transcribe lo pertinente:

Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como

*se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 – 2014, SL4427 – 2014 y SL 930 – 2014, presupuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que **el tema relativo a la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes.***

*Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685 «**al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia», la fuente normativa de la prestación.** (Resalta la Sala).*

Por las razones expuestas los cargos prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario.

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA

Dentro del marco de competencia que el artículo 66A del CPTSS le atribuye a la Sala, pasara a resolverse el recurso de apelación interpuesto por la pasiva contra la sentencia de primera instancia, esto porque, si bien la parte demandante también impugnó la decisión pretendiendo que se condene a Drummond Ltd. al pago de las primas extralegales o convencionales y a cancelarle la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus prestaciones, no puede pasarse por alto que en sede casacional el recurrente demandante al formular el alcance de la impugnación, lo que pidió de la corte en sede de instancia fue la confirmación *en su integridad del fallo de primer grado.*

Dicho lo anterior, la inconformidad de la pasiva radica en que el juez de conocimiento si bien consideró que la

empleadora cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 6 de la CCT 2008-2010, para la imposición de sanciones disciplinarias y la terminación del contrato de trabajo con justa causa, en cuanto el trabajador fue citado a descargos, estuvo asistido en la diligencia por un representante del sindicato y dio por descontado que la medida del despido no fue desproporcionada toda vez que ya había sido sancionado en dos oportunidades anteriores, determinó que el trabajador incumplió con los términos para enviar la comunicación llamándolo a rendir descargos, previstos en la norma convencional. En efecto, dijo el juez singular:

*En el acta de diligencia de descargos, realizada el dos de septiembre de 2008, se indica que los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2008, pero en la misma acta en el párrafo tercero se hace la corrección: **“el mencionado evento ocurrió el 15 de agosto de 2008 a las 17:20.”** –Fol. 8-*

[...]

El comunicado para rendir descargos fue enviado al demandante y al sindicato el 23 de agosto de 2008, folios 89 y 90.

La norma convencional establece en su artículo 6º que se comunicará por escrito al trabajador la presunta falta imputada dentro de los tres (3) días siguientes hábiles de oficina, así mismo dicho artículo en su parágrafo indica que se entiende por días hábiles de lunes a viernes, exceptuando los días festivos nacionales.

Es decir, que la demandada tenía para enviar la comunicación tres días hábiles de oficina, pero como el lunes 18 de agosto de 2008 fue festivo –celebración nacional de la asunción de la virgen María-, se entiende que debía enviar la comunicación a más tardar el jueves 21 de agosto de 2008 y solo lo hizo el 23 de ese mismo año, por tanto la demandada incumplió con el numeral 1º del artículo 6º del procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias.

Ahora bien, la convención colectiva 2008-2010 instituye también que si el trabajador al cumplir dicho término no se encuentra laborando, este límite de días se correrá al primer día hábil de

oficina siguiente a su reintegro, pero como vemos en el caso que nos ocupa, dentro del proceso no existe prueba que nos demuestre que el demandante RENE ALFONSO MONSALVO LOPERA, no estuviera laborando entre el 19 y 21 de agosto de 2008 y que esta fuera la razón por la cual la demandada enviara la comunicación el día 23 de agosto del mencionado año.

Por lo tanto es evidente que la demandada desconoció el punto 1º del artículo 6º de la convención colectiva 2008-2010, que enmarca el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias y terminación de contrato con justa causa legal.

[...].

[...] el meollo jurídico no es otro que el demandado estaba obligado a cumplir con los términos para el envío de la comunicación, tal como lo establece el punto 1º de la convención colectiva 2008-2010.

*La entidad demandada debe comunicar la presunta falta imputada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para que de esta forma el trabajador se presente a rendir descargos personalmente, **so pena de no producir efecto alguno la sanción o despido que se aplique si se omite dicho procedimiento.** (Resalta el juzgado).*

Frente a lo anterior el reparo de la accionada radica en que la comunicación de llamado a descargos si se envió a tiempo, dado que los días 19, 20 y 21, el actor se encontraba en descanso, y si no se aportó prueba al proceso de ello fue «*porque sobre ese asunto no versó la litis, no fue un hecho de la demanda y no está en las peticiones del demandante*», argumento que no es de recibo y se cae de su peso, con tan solo observar la respuesta que la compañía dio a la segunda pretensión de la demanda, dijo: «***Se llamó*** al Sr. Rene Alfonso Monsalve a rendir sus descargos y ***se le comunicó*** al sindicato [...] **tal como lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo**», sin embargo lo que resultó probado fue lo contrario que si se llamó a ambos, pero no en la forma como lo ordena la CCT.

Más peregrina resulta la razón que se expone en el sentido que «*El artículo 6 inciso 1º no fue tenido en cuenta por el a-quo*» debido a que era necesario que la empresa conociera la existencia de la falta para que el término empezara a correr desde el día siguiente a esa fecha, y de ello solo se enteró el 19 de agosto de 2008, basta con remitirnos a la comunicación del despido (f.º 93) para evidenciar que allí se establece con claridad que los hechos tuvieron lugar el 15 de agosto de la misma anualidad en las instalaciones de la compañía y en presencia del supervisor de la sociedad señor Jimmy Peralta, quién para todos los efectos representaba a la demandada, luego esta tuvo conocimiento de la falta en el mismo instante en que se produjo.

De lo que viene dicho, teniendo en cuenta que la controversia que plantea el impugnante en la alzada se circunscribe únicamente a lo que tiene que ver con la oportunidad en que se hizo la comunicación al accionante para convocarlo a la diligencia de descargos, sin que se lograra demostrar error alguno en la valoración fáctica que hiciera el juzgador cuando coligió que la misma se produjo por fuera del término consagrado en el artículo 6 de la CCT 2008-2010, no queda otro camino que confirmar la decisión del juez singular.

Sin costas en esta instancia.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CASA** la sentencia dictada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por **RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA** contra la empresa **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**.

En sede de instancia se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga el 10 de septiembre de 2013.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

7/11/2013
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Omar R-O.
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Salva voto

G. Rodríguez
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral
Sala de Descongestión N.º 4

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

SL2161-2020

Radicación n.º 68285

Acta 020

Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala al resolver el recurso extraordinario de casación propuesto por **RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA** frente a la sentencia emitida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con Sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 19 de diciembre de 2013, en el proceso que le promovió a **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**.

Mi inconformidad radica en que la Sala mayoritaria no tuvo en consideración el criterio reiterado de esa corporación, que se trajo a colación en la sentencia CSJ SL397-2020, en la que se resolvió una acusación similar a la que se planteó en la providencia de la que me aparto, vale decir, se cuestionó la inobservancia del artículo 66A del CPTSS, pues el Tribunal desató la apelación pronunciándose sobre la validez de la

convención colectiva de trabajo, aspecto que no fue controvertido en la sustentación del recurso vertical. En aquella decisión, –que fue adoptada por la mayoría de esta misma colegiatura– se recordó que, en observancia del artículo 469 del CST, cuando la convención colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el *ad quem* tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia. Esa manifestación encontró arraigo en lo decidido en el fallo CSJ SL378-2018, reiterado en las sentencias CSJ SL5025-2019 y SL3587-2019. Sobre el punto en concreto la Corte dijo:

En cuanto al segundo de los argumentos, debe advertirse que el Tribunal no ignoró que la empresa demandada no planteó como motivo de inconformidad la circunstancia de la falta de depósito, pues así lo manifestó en la sentencia, solo que estimó que por ser la convención colectiva la fuente del derecho que estaba en disputa, sí era necesario estudiar los requisitos de la misma.

Y sobre el particular, profusamente esta Sala ha analizado el contenido del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y ha considerado que se trata del establecimiento de un límite a la competencia del juzgador de segundo grado para resolver el recurso de apelación, de suerte que este solo puede ocuparse de proveer sobre los puntos materia de inconformidad propuestas por el recurrente, pues de lo contrario, incurriría en un claro desconocimiento del debido proceso y en una directa vulneración de aquél precepto instrumental.

Sin embargo, también ha asentado la Corte que en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas que consagran los derechos sustanciales en disputa, el *ad quem* no está sometido a restricción alguna, en la medida en que es al juzgador a quien le corresponde encontrar y aplicar el derecho en el caso concreto (CSJ SL2939-2016).

En la sentencia recurrida, previo a resolver las inconformidades expuestas en el escrito de alzada, el Tribunal procedió a examinar el expediente en busca de la convención colectiva de trabajo invocada como soporte de la pretensión de reconocimiento de la pensión de jubilación. Es decir, antes que incursionar en el

análisis de fondo de los cuestionamientos efectuados por el demandante a la decisión del a quo, el ad quem procedió a indagar sobre la fuente del derecho debatido; en este caso, uno estipulado en un convenio colectivo de trabajo, y en vista de que no encontró incorporada al expediente la constancia de depósito de dicho acuerdo, procedió a revocar la sentencia estimatoria proferida por el sentenciador de primer grado.

Si bien esta Corporación ha reiterado que en casación la convención colectiva solo es una prueba, por manera que no procede la inclusión de sus contenidos normativos en la proposición jurídica, también ha destacado su importancia como fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes que quedan cobijadas por sus preceptos. En ese sentido, en la misma forma en que una vez delineado el contexto fáctico del caso, el fallador procede a buscar el precepto legal llamado a producir efectos, cuando de un derecho convencional se trata, ese mismo operador judicial debe buscar la fuente generadora de ese derecho en aras de examinar si se dan los supuestos fácticos que impongan la aplicación del texto convencional, que es ley para las partes.

Así las cosas, ante la ausencia de prueba de la nota de depósito del acuerdo convencional, es claro que el colegiado de segunda instancia no podía partir de la existencia de la norma sustancial -por su contenido-, sino que, contrario a lo planteado por la censura, hizo bien en indagar por la existencia del derecho a cuyo reconocimiento aspiró el promotor del litigio, entre otras razones, porque requería conocer los supuestos fácticos en perspectiva de definir si reconocía o negaba el derecho deprecado, en tanto, frente a la oposición de la demandada a las pretensiones de la demanda, se alegó la inaplicabilidad para el actor de la cláusula convencional sobre la cual soportó su pretensión pensional. Bien puede decirse, entonces, que el juzgador tiene el deber de verificar si se cumplen o no los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual: «La convención colectiva de trabajo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto».

De antaño, la jurisprudencia de la Sala ha entendido la exigencia consagrada en la norma legal no solo como una formalidad, sino además, como un requisito asociado estrechamente a la existencia misma del convenio colectivo de trabajo, no tanto por blindar con mayores garantías los derechos de los trabajadores beneficiarios de la convención, como sí por la necesidad de revestir de certeza ante las partes y frente a terceros la existencia del acto y la correlativa generación de efectos del mismo.

Al respecto, vale la pena rememorar lo dicho por esta Sala, en sentencia CSJ SL8718-2014:

En cuanto a la aplicación que reclama la acusación, en este caso de los postulados constitucionales de prevalencia del derecho sustantivo y de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, debe decirse que no es válido invocar estos principios para suplir la falta de una exigencia prevista por la ley como condición imprescindible del acto solemne para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, pues la razón de ser de este medio de prueba es precisamente dar certeza a las partes y a terceros sobre la existencia del acto, y su consecuente generación de efectos, precisamente con el propósito de garantizar sus derechos, de manera que la ausencia de una exigencia requerida para la validez de un acto no puede identificarse como un problema de conflicto de normas, de interpretación de las mismas o simplemente de una formalidad superflua, pues se trata de un asunto de derecho probatorio.

Y mediante providencia del 16 de mayo de 2001, radicación 15120, fue enfática la Corte al señalar:

[...] al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando [...], así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo”.

En conclusión, el que no aparezca la nota de depósito oportuno del acuerdo colectivo ante el Ministerio del Trabajo, pues el demandante se limitó a allegar un folleto del texto convencional (folios 16 a 17), circunstancia que no discute el recurso, impide verificar si el depósito fue hecho o si lo fue de manera oportuna, esto es, “a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma”, para acreditar así la existencia y validez del mismo, aspectos jurídicos que debían ser analizados por el Tribunal, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia.

Surge entonces que ese criterio ha sido honrado por la Corte, incluso con posterioridad a la sentencia CSJ SL20037-2017 en la que dice basarse la providencia de la que disiento, advirtiendo que en la que se acaba de mencionar sí había depósito de la convención, mientras que, en el caso que nos

ocupa, ni siquiera el casacionista se atrevió a tener como prueba mal valorada la consistente en la convención colectiva de trabajo, dando por surgidos los supuestos errores de hecho que enunció en el cargo tercero, a partir de pruebas que sólo de manera indirecta y eventual podrían dar pie a establecer la existencia de la nota de depósito que el juez de apelaciones no halló en el expediente.

Así pues, ha debido mantenerse incólume la decisión de primer grado, ya que el tribunal no cometió dislate alguno, ni jurídico ni fáctico y, además, decidir lo contrario es incurrir en una contradicción frente a casos similares.

Por los anteriores motivos me aparto de la decisión.

Fecha *ut supra*.


OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero

Radicación Nro. 15120

Acta Nro. 26

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil uno (2001)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JOSÉ ALFONSO ARÉVALO ROJAS contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2000, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D. C., en el juicio que le sigue a la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.

ANTECEDENTES

José Alfonso Arévalo Rojas presentó demanda ordinaria laboral contra la Empresa de Licores de Cundinamarca en la que solicita: el reconocimiento y pago de la pensión convencional por despido sin justa causa con más de 15 años a que se refiere el artículo 61 de la convención colectiva vigente a la fecha de su despido, a partir

del 20 de marzo de 1996, con el pago retroactivo de las mesadas causadas desde esa fecha, previas las deducciones de ley; la actualización de la cuantía pensional según el índice de precios al consumidor; el pago de los intereses consagrados en el art. 143 de la ley 100 de 1993 sobre la cuantía de la pensión, a partir de la causación del derecho; la condena extra y ultra petita; las costas del proceso.

Los hechos que sirven de apoyo a las pretensiones formuladas por el procurador judicial del demandante, se sintetizan así: que José Alfonso Arévalo Rojas prestó sus servicios a la Gobernación de Cundinamarca desde el 16 de mayo hasta el 29 de septiembre de 1980, fecha en que se le aceptó la renuncia mediante decreto 4118; que a partir del 30 de septiembre del mismo año se produjo su retiro de la Gobernación de Cundinamarca; que posteriormente se vinculó a la Empresa de Licores de Cundinamarca desde el 28 de julio de 1981 hasta el 19 de marzo de 1996, es decir, durante 14 años, 7 meses y 22 días; que dicho contrato de trabajo se terminó por la empresa demandada en forma unilateral y sin justa causa, razón por la cual procedió a indemnizarlo según resolución 00192 de 11 de abril de 1996; que a la fecha de su despido había laborado más de 10 años al servicio de la demandada; que su mandante es beneficiario de la convención colectiva de trabajo que se cita como

fundamento de la pretensión principal; que el tiempo total de servicios del actor es de 15 años y 6 días; que la cuantía de la pensión no debe ser inferior al 92% del salario mensual promedio del último año de servicios; que las mesadas deben actualizarse de conformidad con el IPC certificado por el DANE.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones; se aceptó algunos de los hechos, se negaron o se pidió que se probaran otros, y se propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y/o inexistencia del derecho pretendido, cobro de lo no debido, pago, buena fe y la genérica. Subsidiariamente, en el evento de no prosperar ninguna de las anteriores, se formuló la de prescripción.

Como razón de defensa se expuso que el accionante no cumple con uno de los tres requisitos establecidos en el art. 61 de la convención colectiva para acceder a la pensión convencional, cual es el de haber laborado durante 15 años, porque solicitó y disfrutó de una licencia no remunerada por 60 días, a partir del 1º de 1994, licencia que de acuerdo con el art. 44 del Decreto 2127 de 1945 suspendió el contrato de trabajo; que deducido el tiempo de la licencia, solo alcanzó a laborar, sumado el tiempo servido a la Gobernación de Cundinamarca: 14 años, 5 meses y 22 días.

La primera instancia la desató el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia de abril 4 de 2000, en la que se declaró probadas las excepciones perentorias de inexistencia del derecho pretendido y cobro de lo no debido, y absolvió a la empresa demandada de todas las pretensiones.

Apelada la anterior decisión, se confirmó por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de 31 de mayo de 2000, y para se expresó que la pensión reclamada por el demandante tiene como fundamento legal la convención colectiva de trabajo suscrita en 1995 por la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Sindicato de Trabajadores, y que dicha convención visible a folios 74 a 105, carece de eficacia probatoria, toda vez que fue allegada al proceso en fotocopia simple y no tiene constancia de que uno de los ejemplares haya sido depositado ante la División respectiva del Ministerio de Trabajo, por lo que no se cumple con los requisitos exigidos por los artículos 253 y 254 del C. de P. Civil y 469 del Código Sustantivo del Trabajo. En sustento de ello transcribe apartes de la sentencia de 20 de mayo de 1976 de esta Sala de la Corte.

EL RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal

y tramitado en debida forma, por lo que se procede a decidirlo, previo el estudio de la demanda de casación y su réplica.

A la impugnación el recurrente le imprimió el siguiente alcance:

“Se pretende con el presente recurso de casación que se CASE TOTALMENTE la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión del juzgado a quo de absolver a la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA de todas las pretensiones de la demanda; y EN SEDE DE INSTANCIA se servirá revocar la sentencia del juzgado a quo, condenando a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión convencional por despido sin justa causa con más de quince (15) años de servicio, a la actualización del valor de la pensión según el IPC y al pago de los intereses moratorios del artículo 143 de la ley 100 de 1993; resolviendo sobre costas de conformidad” (fl. 12).

Apoyado en la causal primera de casación, la censura le formula tres cargos a la sentencia de segunda instancia. Por razones de método la Sala empezará a estudiar el distinguido en la demanda como segundo.

SEGUNDO CARGO:

“Acuso la sentencia impugnada por la causal primera de casación, contenida en el artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, por ser violatoria de la ley sustancial, directamente a causa de falta de aplicación de los artículos 467, 469, 476, C.S.T.; artículos 10 y 11 de la ley 443 de 1998; artículo 1 del decreto 2150 de 1995, modificado por el 26 del decreto 266 de 2000; artículo

153 de la ley 100 de 1993. artículos 51, 60, 61 y 145 C.P.T., 174, 175, 176, 180, 187, 251 a 293 especialmente los artículos 253, 254, 255, 256, 262, 264, 275, 276, 289 del C.P.C. y, en general, del artículo 228 de la C.P.” (fl. 15).

DEMOSTRACION DEL CARGO

Sustenta la acusación destacando que si bien el cargo primero se refiere a la falta de apreciación por el tribunal del texto de la convención colectiva obrante en el expediente con las solemnidades de ley, en éste se ataca la sentencia por desconocimiento de lo expresamente dispuesto por la ley sobre la validez de las pruebas aportadas en fotocopia, en especial, por el decreto 2150 de 1995, art. 1º, modificado por el decreto 206 de 2000, art. 26 y por la ley 446 de 1998, artículos 10 y 11 y demás normas citadas en el alcance de la impugnación. En efecto, señala, las normas sobre descongestión judicial vigentes para la época en que fue decidido el presente litigio, suprimieron la autenticación de documentos, más, tratándose de aquellos que como el que se cuestiona son copias aportadas por la parte demandada, provenientes de archivos de autoridad administrativa; que adicionalmente, la presunción de autenticidad del documento presentado en fotocopia simple no fue siquiera puesta en duda durante el proceso; que en el sub judice lo que discuten las partes es el alcance de una norma convencional

cuyo texto comparten, y no la existencia o el contenido del acuerdo colectivo, lo que aparece claro cuando la demandada al contestar la demanda transcribe el texto exacto del art. 61 cuya aplicación se solicita, texto que coincide con el de la fotocopia simple que obra en los autos (fls 40 y 96); que la solemnidad a que se refiere el art. 469 del C.S.T. exige constancia de depósito más no que dicha prueba obre en original o certificada con tal o cual formalismo; que en general se trata de dar relevancia a la norma constitucional que prefiere los aspectos sustanciales sobre los puramente formales (art. 228); que sobre la validez de las pruebas aportadas en fotocopia simple, esta Corporación se pronunció recientemente en la sentencia proferida en el expediente 11010; que si el sentenciador hubiera dado aplicación a las normas reseñadas en este cargo, dando valor probatorio a la convención aportada en fotocopia, habría condenado a la demandada a suministrar al accionante, una pensión equivalente al 92% del salario promedio mensual devengado durante el último año, a partir del 20 de marzo de 1996 y a las demás súplicas (fls 15 a 18).

LA RÉPLICA

Dice el replicante: que la sustentación de este cargo es similar a la anterior pero a él se agrega que el Tribunal desconoció el contenido

de la convención colectiva al no dar aplicación a las normas a que hace alusión la acusación; que no obstante, la prueba solemne de la convención no obra en el plenario y por ello la prueba de su existencia se confunde con la demostración de que se cumplieron cabalmente las solemnidades legales; que conforme con el art. 469 del C.S.T., la ley exige determinada solemnidad, ad substantiam actus, a la convención para ser admitida como prueba, por lo que el Tribunal no admitió las fotocopias aportadas al proceso por no cumplir esos requisitos, sin que pudiera sustituir esa prueba por otra.

SE CONSIDERA

Empieza la Corte por estudiar este cargo, que el censor denomina como el segundo, por cuanto en él se ataca la decisión del Tribunal de negarle valor probatorio a la convención colectiva por haberse aportado en fotocopia sin autenticar, y de llegarse a la conclusión que al juzgador le asiste la razón, consiguientemente, por este aspecto, tampoco estaría acreditado el depósito en debida forma de ese mismo acuerdo colectivo, que también echó de menos el ad quem, y es lo que se objeta en el primer cargo porque está orientado a sostener que con la comunicación que consta a folio 74, que hace parte de la convención colectiva que se allegó en copia simple, se demuestra su depósito.

Para el Tribunal la pretensión del actor de que la demandada le reconozca y pague la pensión de jubilación de que trata la convención colectiva de trabajo, no está llamada a prosperar por dos razones fundamentales: 1) la falta de autenticidad del documento que contiene dicho acuerdo, pues el incorporado al proceso de folios 74 a 105 es una fotocopia simple, por lo que no se ciñe a los artículos 252 y 254 del código de procedimiento civil para ser apreciado como prueba 2) la inexistencia de constancia de que uno de los ejemplares del convenio colectivo haya sido depositado ante el Ministerio de Trabajo, toda vez que la prueba de un acto solemne, como el mencionado, no puede ser sustituida por otra, según la jurisprudencia. (fls 384 a 387).

En el cargo se cuestiona el fallo recurrido por no otorgarle validez probatoria a la mencionada convención colectiva de trabajo por el motivo antes anotado, y para ello se expresa que se *“ataca la sentencia por el desconocimiento de lo expresamente dispuesto por la ley sobre la validez de las pruebas aportadas en fotocopia, en especial por el decreto 2150 de 1995 (artículo 1), modificado por el decreto 266 de 2000 (artículo 26) y por la ley 446 de 1998 (artículos 10 y 11), y demás normas citadas en el alcance de la impugnación”*.

En sustento de lo anterior sostiene que *“la norma sobre descongestión judicial vigentes para la época de decisión del*

presente litigio, han suprimido la autenticación de documentos y más tratándose de aquéllos que como en el caso que nos ocupa, son copias aportadas por la parte demandada y provenientes de archivos de autoridad administrativa”. Así mismo, agrega: “Adicionalmente, debe reputarse auténtico un documento mientras no haya sido tachado ni desconocido por la parte contra que se presenta. En este evento ninguna de las partes se opone a la veracidad del documento ni a la validez de la prueba dentro de las oportunidades procesales que existieron para tal efecto, y siendo que la prueba es de la parte demandada y que se aporta en respuesta a oficio que ella solicita se decrete, no puede, suprimírsele el valor probatorio”.

De otra parte, la impugnante, también, manifiesta: *“Sobre la validez de las pruebas aportadas en fotocopias simples, se ha pronunciado recientemente esa Corporación en sentencia que compartimos, proferida en el expediente 11010, con ponencia del H. Magistrado doctor José Roberto Herrera Vergara”.*

Delimitado así el punto materia de debate, observa la Corte que el ejercicio de apreciación del ad quem no se realizó sobre una prueba documental cualquiera, sino en relación con una a la que el legislador, atendidas sus profundas implicaciones en la seguridad

jurídica de la ejecución de los contratos de trabajo, le otorgó un rango especial, a través de la solemnidad de que trata el artículo 469 del C.S. del T: la convención colectiva de trabajo.

Y como consecuencia de ello ha entendido, reiterada y pacíficamente la jurisprudencia, que al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo.

A juicio de la Corporación, en lo que atañe con la aducción de la convención colectiva de trabajo al proceso y la demostración de su depósito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comprendida la trascendencia de tal tipo contractual en las relaciones entre trabajadores y empleadores, - que es lo que explica la solemnidad que trae el artículo 469 del CST -, la vigencia de la formalidad de la autenticación del documento respectivo que informe sobre esos actos está plenamente ameritada, visto el

impacto que sobre la seguridad jurídica de los contratos en los que incide, tiene la certeza de que el instrumento convencional, no solo existe en la realidad material, sino que tiene efectos en derecho, como lo ha reconocido la jurisprudencia.

Y precisamente el trascendente atributo de certeza al que se acaba de aludir no se configura en el caso bajo examen, como lo dedujo el ad quem en relación con las documentales que se examina, pues tanto el texto de la convención colectiva de trabajo (fls 75 – 105), como la nota de depósito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad social (fl 74), son fotocopias simples, que no acreditan, por tanto, ni la existencia del acuerdo colectivo en el que se cimientan las pretensiones del demandante, ni que las partes a las que se le atribuye dicho acto cumplieron con la solemnidad incorporada al artículo 469 del código sustantivo del trabajo.

Planteada la situación así, el punto a determinar es si el criterio que fijó la Corte en la sentencia de marzo 8 de 1999, radicación 11010, traído a colación por la recurrente, en el sentido que por lo dispuesto en los artículos 25 del decreto 2651 de 1991 y 11 de la ley 446 de 1998, las copias de documentos aportados como pruebas no requieren autenticación para ser apreciados como tales, también cobija a las convenciones colectivas de trabajo.

Y al precitado cuestionamiento hay que responder negativamente, ya que en tratándose de un documento como el que contiene la convención colectiva de trabajo, encuentra la Sala que el anterior criterio no se puede aplicar a él mecánicamente, pues, sin desconocer su contenido material como prueba, que a simple vista pudiera colocarla a la par con otras documentales, no puede ignorarse que la misma tiene una condición especial, que la sustrae del tratamiento corriente que puede dársele a otros documentos en el contencioso laboral, y que radica en la solemnidad que le acompaña, según lo dispuesto en el artículo 469 del código sustantivo del trabajo.

De modo, pues, que el carácter de solemne que tiene la convención colectiva de trabajo, impone que al documento que la contiene no se le puede aplicar la tesis genérica según la cual es probatoriamente válida su aportación al proceso laboral en fotocopia o copia simple, como acontece en el caso, ya que permitirlo implica la vulneración del artículo 61 del código procesal del trabajo que al consagrar la libre formación del convencimiento por parte del fallador expresa: *“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta*

procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinado solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio(...).”

En consecuencia, se repite, como en los documentos que en fotocopia se observa de folio 74 a 105, no existe la autenticación que al tenor de los artículos 252 y 254 del código de procedimiento civil, aplicable al proceso laboral en virtud del principio de la integración, le otorga certeza sobre su origen y contenido, necesaria, en este caso, por la naturaleza especial de los actos jurídicos de que dan cuenta, la Corte tiene por acertada el razonamiento del Tribunal que les negó valor probatorio y, por ende, su decisión de no acceder al derecho pretendido que tenía su fundamento en la convención colectiva de trabajo cuya existencia, por lo ya dicho, no aparece debidamente acreditada en el proceso.

En consecuencia, el cargo no prospera.

En cuanto hace a los cargos de la impugnante distinguidos con los numerales primero y tercero, lo ya decidido con relación al segundo de los ataques, hace innecesario que la Corte entre a pronunciarse separadamente sobre ellos, ya que lo puntualizado al expresarse el porqué se empezaba a estudiar el cargo segundo y lo decidido

respecto a éste, es suficiente para negarle prosperidad al primero; aunque esto no obsta para agregar que la Corte también ha expresado que no se exige prueba solemne para acreditar el hecho del depósito.

En cuanto hace al cargo tercero la razón que se da para concluir que en el proceso no está debidamente demostrada la existencia de la convención colectiva y su depósito, en esto radica los dos primeros errores alegados, no permitía que el razonamiento expuesto por el Tribunal, con tal fin se atacara por la indirecta. Y en cuanto hace a los otros dos yerros fácticos que se denuncia, tampoco se presentan porque el juzgador no afirmó ni negó que el demandante fuera beneficiario de la convención colectiva de trabajo, ni analizó si al tenor de la misma aquél reunía o no los requisitos para acceder a la pensión de origen convencional cuyo reconocimiento pretendía. Circunstancia ésta que no permitía atribuirle a la sentencia recurrida vulneración de la ley con base en esos yerros.

No prosperan, entonces, tampoco los cargos primero y tercero.

Como el recurso se pierde y hubo réplica, las costas por el mismo se le impondrán al impugnante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 31 de mayo de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el juicio promovido por José Alfonso Arévalo Rojas a la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Costas en casación a cargo del demandante.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO

FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER

RAFAEL MÉNDEZ ARANGO

LUIS GONZALO TORO CORREA

GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ

JESÚS ANTONIO PASTAS PERUGACHE
Secretario

**SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
LUIS GONZALO TORO CORREA Y JOSÉ ROBERTO
HERRERA VERGARA**

Radicación: 15120

Con todo respeto nos vemos precisados a separarnos de la sentencia mayoritaria en el proceso de la referencia por considerarla contraria a otras proferidas por esta misma Sala en las que se ha dicho que los documentos emanados de las partes presentados en fotocopia en un proceso con fines probatorios, se reputan auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación.

Prescribe el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 en relación con la autenticidad de documentos: *“En todos los procesos los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.*

Como es apenas obvio el término “autenticación” contenido en el precepto reproducido traduce la idea de acción y efecto de

autenticar, esto es, de legalizar algo o dar fe de la verdad de un hecho con autoridad legal.

Aún bajo la vigencia de las normas anteriores el documento **original** se consideraba auténtico cuando había certeza acerca de su autor, lo que se obtiene con su simple presentación personal; en cambio, la autenticidad de la copia de un documento se lograba mediante su confrontación con el original. Este concepto está ínsito en los casos gobernados por los artículos 254 y 268 del CPC.

La modificación contenida en los artículos 25 del Decreto 2651 de 1991 y 11 de la Ley 446 de 1998, atrás transcrito, alude claramente a los documentos privados, para los cuales la única excepción que ha establecido esta Sala es respecto de procesos ejecutivos por su especial naturaleza. Por tanto si - en tratándose de los demás procesos - al intérprete no le es dado hacer excepciones para limitar su alcance, significa que también dicha regla comprende los documentos presentados en copia, así se trate de una convención colectiva de trabajo, porque eso es lo que manda su claro tenor.

Nótese que, en armonía con lo dicho, la disposición reproducida textualmente prevé el evento de presentación personal

de un documento, con lo que indudablemente hace expresa referencia a la hipótesis de autenticación de un documento original. Lo anterior pone en evidencia que si el precepto menciona la presentación personal de un documento privado e inmediatamente la autenticación del mismo, precedida de la conjunción copulativa “ni” es claro que diferencia la autenticidad de los documentos originales de la de las copias, y contempla categóricamente la presunción de autenticidad de las copias de los documentos privados.

Obsérvese entonces que en los términos del artículo 11 precitado, presentación personal y autenticación de documentos, no son vocablos idénticos o que tengan la misma acepción. Allí las dos se emplean como medios – acciones – para autenticar documentos privados originales y en copia. Su redacción, como se dijo, impide concluir que dicha preceptiva repita conceptos que regulen un mismo fenómeno jurídico.

Si fueran menester trámites de autenticación - como los señalados en el artículo 254 del CPC -, no tendría ningún sentido la reforma contenida en el decreto 2651 de 1991 y en la ley 446 de 1998, la cual claramente revela la intención de modificación de las mencionadas exigencias, además de que la nueva normatividad es

terminante en cuanto a la consecuencia de que así presentados tales documentos, **se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación.**

Todo lo dicho es aplicable a las convenciones colectivas de trabajo puesto que ellas no se despojan de su naturaleza de documentos emanados de parte por la sola circunstancia del requisito de depósito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las únicas formalidades contenidas en el artículo 469 del C.S.T. son la celebración por escrito en tantos ejemplares cuantos sean las partes y el depósito oportuno en las dependencias competentes del Ministerio de Trabajo. De modo que si, como en el caso *sub lite*, ese convenio fue aportado al proceso y contó con la constancia en copia de que cumplió la exigencia del depósito dentro del plazo legal, sin que hubiese reparo alguno de la parte contraria acerca de su eficacia probatoria, no hay ninguna razón jurídica valedera para desconocer su autenticidad porque una cosa es que dichos acuerdos colectivos para su validez como actos jurídicos necesariamente deban satisfacer el mencionado depósito, y otra bien distinta es la prueba del mismo en el proceso. No habiendo norma alguna que establezca tarifa legal para la prueba del depósito, ni ninguna otra que exija que para que se consideren

auténticas las convenciones colectivas de trabajo deben ser presentadas en original o en copia autenticada por el juez o por notario, es lógico que su presentación al proceso en copia, acreditando el cumplimiento de tales formalidades, los reputa auténticos, sin necesidad de presentación personal o autenticación, como lo ordena actualmente el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, conforme al alcance que ha impartido al mismo la jurisprudencia tradicional de esta Sala.

En consecuencia, cuando se está en presencia de un sello que de fe del depósito oportuno o de una certificación en tal sentido, consignados en las mismas copias, tal documento tiene eficacia probatoria acerca de la celebración y de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo. Además, no puede perderse de vista que en el caso bajo examen fue la propia parte demandada quien en los fundamentos de su defensa transcribió el texto convencional – que coincide con el aportado al expediente -, lo interpretó, solicitó su prueba, y para tal efecto lo allegó ella misma y con la constancia de su depósito igualmente en copia, sin que en el debate probatorio nadie se opusiera a su valor demostrativo, lo tachara o desconociera esa realidad material o sus efectos jurídicos, por lo que a nuestro juicio no cabe duda que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 se probaron en legal forma el

contenido y las formalidades del artículo 469 del C.S.T. que de ninguna manera se pretermitieron.

Tampoco puede olvidarse que la referida ley 446 de 1998 buscó reducir trámites procesales, descongestionar la actividad judicial y estimular la lealtad de las partes en el proceso, por lo que su interpretación debe armonizarse con esos nobles derroteros. Y como ya ha tenido oportunidad de expresarlo la Sala es también un cabal desarrollo del principio de la buena fe protegido en la Carta Fundamental.

Por todo lo dicho, consideramos que el cargo debía prosperar.

LUIS GONZALO TORO CORREA JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA

SALVAMENTO DE VOTO

**Además de unirme a las razones que expresan los
H.H. Magistrados que me acompañan en el
salvamento de voto, considero necesario
puntualizar lo siguiente:**

- Al separarme de la decisión mayoritaria no estoy desconociendo las formalidades especiales que la ley impone a la convención colectiva de trabajo para que llegue a configurarse como tal. Tampoco supone mi posición ignorar las solemnidades correspondientes al otorgamiento por escrito, la firma, el número de ejemplares y, sobretodo, el depósito.
- La distinción fundamental que considero necesario hacer es que una cosa es probar que se hizo en tiempo el depósito y otra cosa es demostrar la existencia de esa constancia de depósito oportuno. Vale decir, para probar la convención colectiva tengo la obligación de demostrar que se hizo el depósito en tiempo, por lo que para aceptar la existencia de la solemnidad es indispensable la prueba

de tal depósito, pero eso no quiere decir que dicha prueba tenga, a su vez, que ser solemne. Dicho de otra forma, si es necesario probar el depósito oportuno, no es necesario que la prueba del mismo sea

ineludiblemente un sello original o algo que formalmente pueda suplirlo.

- Dentro de tal entendimiento, considero que siempre que se pretenda probar la existencia de una convención colectiva, será indispensable acreditar que cumplió con todas las formalidades legales, pero ello no significa que para demostrar el cumplimiento de esas formalidades sea indispensable una única prueba formal o determinada. Creo que son admisibles los medios de prueba ordinarios que permitan colegir que la existencia del sello de depósito oportuno es real. Es decir, se trata de la prueba de la prueba. Esta es el sello de depósito en tiempo y aquélla es la prueba de la existencia de ese sello.
- Por lo dicho, creo que a esta situación le son aplicables las orientaciones jurisprudenciales sobre la admisibilidad de las fotocopias simples provenientes de las partes como medio idóneo

de prueba. El problema no es, entonces, si hay constancia de la existencia del depósito sino si es admisible obtener la constancia de ese depósito por medio de una fotocopia sin autenticar, aunque en ella aparezca clara la existencia de ese sello de depósito. Es la prueba de la solemnidad no del acto en sí mismo y por eso estimo que es aplicable el criterio al que alude el recurrente señalado en la sentencia de la Sala del 8 de marzo de 1999, radicación 11010.

Estimo finalmente, que el criterio al cual me uno, no solo es acorde con la tendencia procesal y probatoria de desrigorizar los trámites judiciales, sino que le brinda una mayor accesibilidad al trabajador respecto de la demostración de los derechos de rango convencional que pretenda.

Lo expuesto, aunado a lo señalado en los otros salvamentos de voto, explican debidamente la posición que he adoptado.

Fecha ut supra.

GERMAN G. VALDES SANCHEZ

SALA DE CASACION LABORAL

ACLARACION DE VOTO

Radicación 15120

Por cuanto he sido yo quien le ha propuesto a la Sala que modifique el criterio vigente sobre la forma como debe probarse en juicio la convención colectiva de trabajo --criterio según el cual para probar que se ha celebrado esta especie de convenio la ley exige una determinada solemnidad ad substantiam actus, pues, según lo tiene dicho la jurisprudencia, del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo resulta que para la validez del acto se requiere que haya sido celebrada por escrito y que se extienda en tantos ejemplares cuantas sean las partes "y uno más, que se depositará en el Departamento Nacional del Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma"-- estimo necesario explicar el porqué, pese a tener una opinión sobre el punto de derecho diferente, estuve de acuerdo que en este caso no prosperara el recurso de casación.

La razón no es otra diferente a que mientras se mantenga la interpretación de que el hecho de la

celebración de la convención colectiva sólo puede darse por establecido con el medio probatorio autorizado por la ley, es elemental que sería contrario a derecho admitir su prueba por otro medio.

Si se hubiera aceptado por la mayoría, incluyendo a los magistrados que salvaron el voto, la propuesta de modificar el criterio jurisprudencial vigente que ve en la convención colectiva un acto jurídico cuya celebración válida exige de una solemnidad ad substantiam actus, no habría tenido reparo en admitir que el hecho fuera probado mediante un documento diferente a la copia que la correspondiente oficina del Ministerio de Trabajo expida tomándola del ejemplar que allí fue depositado.

De la tesis jurídica que si no puedo participar es de la defendida por los magistrados que salvaron el voto, quienes, no obstante mantener el criterio de que la celebración de una convención colectiva de trabajo es un acto jurídico que para su validez exige que se cumpla

una determinada solemnidad, consideraron que la modificaciones que introdujo al Código de Procedimiento Civil inicialmente el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, de manera temporal, y con carácter permanente el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, permiten que se pruebe la convención colectiva mediante una copia simple, por tratarse de un documento privado que se incorpora al expediente con fines probatorios, lo que obliga a reputar auténtico el documento aportado.

Para mí este planteamiento no tiene fundamento en la ley, ni tampoco lo tiene en la doctrina, por cuanto es obvio entender que lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 --esencialmente igual a lo que disponía el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991-- modificó las normas del Código de Procedimiento Civil que regulaban la aportación de documentos que requerían de presentación personal o de autenticación; pero lógicamente no pudieron estos preceptos legales modificar las normas que exigen requisitos para la validez del acto o ad substantiam actus,

pues esta clase de normas no son de índole procesal sino sustantiva, aun cuando deban ser observadas también en los procesos judiciales.

Mientras el criterio jurisprudencial que tiene a la convención colectiva de trabajo como un caso en que la ley exige determinadas solemnidades para su validez, y que por ello se está ante un hecho que sólo puede darse por establecido con el medio probatorio autorizado por la propia ley, resultaría un contrasentido admitir la prueba del hecho por otro medio.

Lo anterior por cuanto si fuera verdad que las formalidades para la celebración de la convención colectiva de trabajo previstas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo deben ser entendidas como una excepción a la regla sobre libre formación del convencimiento, porque lo exigido en dicha norma significa que deben cumplirse solemnidades ad substantiam actus, se cae de su peso, entonces, que para acreditar en juicio la

existencia del convenio colectivo se hace necesario que la copia aportada al proceso haya sido expedida por el funcionario en cuya oficina se encuentra depositado el ejemplar adicional a los que se extendieron según cuantas hayan sido las partes que celebraron el acto.

Aceptar lo contrario sería tanto como admitir que en un juicio puede probarse la celebración de la compraventa de un bien inmueble mediante la aportación de una simple copia de la escritura que documenta el acto o mediante una copia autenticada por un funcionario diferente al notario en donde se corrió la correspondiente escritura.

Este ejemplo lo traigo a colación por tratarse de un caso en el cual es indiscutible que para la validez del acto la ley exige de unas determinadas formalidades; pero no porque esté convencido de que la regulación que contiene el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo deba ser entendida como la exigencia de una solemnidad ad substantiam actus para que

sea válida la convención colectiva, pues, como he tenido oportunidad de explicarlo en aclaraciones de voto, para mí se trata de otro procedimiento diferente de los que se vale la técnica jurídica, cual es el de darle publicidad al acuerdo de voluntades, motivo por el que se dispone su registro o depósito en una oficina pública; registro o depósito cuyo objeto realmente es el de informar a terceros que podrían verse afectados por la realización del acto jurídico. Adicionalmente, con esta intervención del organismo público que actúa como depositario, se busca una finalidad de seguridad jurídica y de certeza respecto de cuál fue el real acuerdo de voluntades para aquellos casos en que las partes que lo celebraron discrepen sobre este punto.

Sin embargo, mientras el criterio jurisprudencial sea el de que sí se trata de una solemnidad de esa especie, resultaría ilegal admitir la prueba del hecho mediante un medio probatorio diferente a la copia expedida por el funcionario ante el cual se depositó el ejemplar.

Es por lo anterior que considero que lo

previsto en el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 no puede ser aducido como razón suficiente para admitir la prueba de la convención colectiva de trabajo mediante la aportación de una copia simple o autenticada por un funcionario distinto a aquél en donde se encuentra depositado el ejemplar adicional al que se refiere el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por eso reitero que si la mayoría hubiera aceptado la propuesta que de tiempo atrás he venido haciendo para que se modifique este criterio, hubiera estado de acuerdo en que al no tratarse de un acto jurídico cuya validez exige de una determinada solemnidad, la prueba de su celebración es libre.

RAFAEL MENDEZ ARANGO



SALA DE CASACIÓN LABORAL

DR. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente

Radicación No. 38945

Acta No. 26

Bogotá D.C., nueve de agosto de dos mil once (2011).

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la **EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. -ECOPETROL-**, contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso adelantado por **JOSÉ ÁNGEL SIERRA CHAVERRA** contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES

En lo que interesa al recurso, **JOSÉ ÁNGEL SIERRA CHAVERRA** demandó a la sociedad **ECOPETROL S.A.** para que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, que se ejecutó en el



Corte Suprema de Justicia

Expediente 38945

Municipio de Yondó – Antioquía y que terminó por acogerse el demandante al beneficio de la pensión de jubilación convencional; en consecuencia, pide que se condene a la demandada a reconocer por concepto de cesantías, por todo el tiempo laborado, 26 años, 2 meses y 21 días, la suma de \$32'916.407, dejados de pagar en la liquidación final; \$2'312.689, por concepto de pensión de jubilación, más los reajustes anuales desde el momento de su disfrute y hasta cuando se haga efectivo el pago; \$6.073, por concepto de prima de vacaciones dejada de sufragar al momento de la liquidación definitiva de prestaciones sociales; así mismo que se tenga como factor con incidencia salarial el subsidio de alimentación por valor de \$1.016, el salario en especie o suministro de carne de que trata el artículo 57 parágrafo 1° de la convención colectiva de trabajo para entonces vigente, equivalente a \$361.000 mensuales y que la accionada no tuvo en cuenta en la liquidación; que se condene al pago de \$188.328, por concepto de vacaciones mal liquidadas, \$581.473 dejados de pagar por incorrecta liquidación de la prima de servicios durante el último año de servicios y \$95.076 por concepto de prima de antigüedad. Igualmente, solicita la condena al pago de los ajustes, indexación, retroactivos e intereses, conforme a lo ordenado legal y convencionalmente; que se ordene a la demandada a tener en cuenta la incidencia salarial del art. 121 de la C.C.T.V., en la suma de \$10.131.00, para efectos de liquidar la pensión de jubilación, cesantías y demás prestaciones; que se ordene a Ecopetrol S. A. a tener en cuenta el tiempo laborado como trabajador temporal para liquidar las prestaciones sociales y la pensión de jubilación, esto es, 1 año, 2 meses y 23 días; la condena a la indemnización moratoria por el no pago de la totalidad de las prestaciones sociales debidas al término del vínculo laboral. Pide que las condenas sean indexadas en legal forma; lo demás que ultra y extra petita resulte probado, y las costas.



Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios a la demandada desde el 21 de agosto de 1978 y hasta el 28 de noviembre de 2003, mediante un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente por espacio de 25 años, 3 meses y 7 días, más el tiempo laborado como trabajador temporal correspondiente a 1 año, 2 meses y 23 días, para un tiempo total efectivo laborado de 26 años y 6 meses, esto es, 9.441 días, descontados 100 días de "tiempo perdido"; que el último salario devengado era de \$38.081,00 diarios, pagadero por quincenas vencidas. Aduce que el 28 de noviembre de 2003, se acogió al beneficio de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 109 de la convención colectiva de trabajo; manifiesta que el 11 de agosto de 2005 reclamó ante la demandada la revisión de la liquidación de la pensión de jubilación y que la empresa respondió negativamente en oficio N° 4649 del 25 de agosto de 2005.

Agrega que el artículo 109 de la convención colectiva de trabajo, establece que la pensión de jubilación se debe conceder con el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, y que el párrafo 3° de la misma disposición señala que Ecopetrol aumentará el monto de la pensión en un 2.5% por cada año que el trabajador haya servido a la entidad demandada por encima de los primeros 20 años, razón por la que estima que su pensión ha debido liquidarse con el 90%. Añade, que durante el último año de servicios lo devengado corresponde a la suma de \$30'835.843,00 cuya incidencia salarial genera un salario promedio mensual de \$2'569.654,00 y que el 90% de ese salario arroja como resultado una pensión de jubilación de \$2'312.689,00



Se refiere a las demás prestaciones, que manifiesta que no le fueron pagadas o se le reconocieron en forma parcial, y remata solicitando la indemnización moratoria.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda por el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berrío Antioquía, la accionada respondió la demanda y adujo en defensa de sus intereses, que oportunamente liquidó y pagó al demandante salarios, prestaciones y acreencias laborales, así como la pensión de jubilación, para cuya liquidación tuvo en cuenta los factores salariales previstos legal y convencionalmente; que no existe ninguna diferencia a cancelar por estos o por cualquier otro concepto. Aduce que por la misma razón no hay lugar a las condenas impetradas por intereses e indexación. Aceptó que el demandante tenía una asignación salarial diaria de \$38.081,⁰⁰ así como los extremos de la relación laboral y su terminación por el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y aclaró, que el último contrato tuvo vigencia por espacio de 25 años, 3 meses y 8 días, menos los días perdidos, para un total de tiempo laborado de 24 años, 11 meses y 28 días; que a dicho tiempo se le sumó el tiempo servido mediante contrato de trabajo a término fijo, por un lapso de 1 año, 2 meses y 23 días y que por ello se tuvo en cuenta para efectos de la antigüedad un total de tiempo servido de 26 años 2 meses y 21 días.

Manifestó que al culminar el contrato de trabajo a término fijo, se le cancelaron al actor sus prestaciones sociales correspondientes y que por tal razón no se sumaron a la finalización del último vínculo laboral por lo cual dice, *"resulta imposible pretender sumar el tiempo ya pagado para efectos de*



prestaciones, aceptar ello conllevaría a reconocer el pago de sumas ya canceladas por un contrato liquidado en 1978, es decir, más de 28 años."

Continuó su alegación señalando que el demandante durante el último año de servicios, obtuvo un total de ganancias por valor de \$22'326.008,⁰⁰ y que el promedio mensual de ingresos por el mismo periodo, corresponde a la suma de \$1'860.501,⁰⁰ de manera que el 75% para liquidar la pensión es de \$1'395.375⁰⁰ y que a éste valor es al que se le debe calcular el 2.5% por cada año adicional a los primeros 20. Hizo los cálculos correspondientes y afirmó que el monto de la pensión corresponde a \$1'604.681,⁰⁰. Dijo que Ecopetrol dando cumplimiento al laudo arbitral homologado por esta Corporación, ha realizado los respectivos ajustes a la mesada pensional y a la liquidación de sus cesantías finales, teniendo en cuenta los incrementos porcentuales fijados en el laudo. Propuso las excepciones que denominó: buena fe, pago, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir y prescripción.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berrío – Antioquia, en sentencia del 7 de abril de 2008, le puso fin a la primera instancia y declaró la existencia del contrato laboral a término indefinido, le otorgó el derecho a la pensión de jubilación reconocida a partir del 29 de noviembre de 2003; declaró que la prestación en especie (carne) y el subsidio de alimentación suministrados por la empresa demandada, son constitutivos de salario y con incidencia para la liquidación de las prestaciones legales y extralegales; declaró ajustada a derecho la sumatoria de tiempo laborado en trabajos temporales con el laborado mediante contrato a término indefinido para efectos de antigüedad, y



condenó a Ecopetrol S. A. a reconocer y pagar al demandante: \$2'884.033,⁰⁰ por concepto de pensión de jubilación a partir del 29 de noviembre de 2003; \$2'643.994,⁰⁰ por concepto de reliquidación de la pensión; ordenó a la accionada realizar los cálculos y pagar los valores que resulten a título de reajuste de las mesadas pensionales causadas desde el 1º de enero de 2004 en adelante; \$364.444,45 por concepto de bonificación adeudada como incremento salarial del año 2003; \$37'859.425 por concepto de cesantías adeudadas; pagar la condena de manera indexada; exoneró de las demás pretensiones; declaró probada la excepción de buena fe y condenó en costas a la demandada en un 70%. (fls. 197 a 224).

IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Apeló la demandada vencida y la Sala Laboral del Distrito Judicial de Antioquia, mediante sentencia del 22 de octubre de 2008, confirmó en su totalidad el fallo de primer grado y no impuso costas en la alzada.

Precisó los puntos de inconformidad de la entidad recurrente y señaló que los temas de la providencia se concretarían a las condenas referidas a: "1º Suministro de carne; 2º, Auxilio de cesantías; 3º Monto de la pensión de jubilación; y 4º Indexación". Determinó así mismo que no se detendría a analizar, "el aspecto Salario, propuesto en la apelación del demandado, pues allí sólo se plantea una discusión teórico jurídica sobre lo que debe entenderse por salario; discusión que en la práctica no se traduce en un agravio concreto."



71

Expediente 38945

Comenzó por acoger un pronunciamiento anterior de ese Tribunal del 27 de mayo de 2008, que citó y transcribió parcialmente, en relación con el suministro de carne y concluyó:

*"En el anterior orden de ideas, se tiene que respecto al **PRODUCTO CARNE**, como atinadamente lo dijo el a quo, al no haberse pactado expresamente como no constitutivo de factor salarial, se debe entender como tal. La prueba arrimada a la cartilla procesal, folio 125, da fe que el demandante recibió por este concepto en el último año de servicios la suma de \$4'332.000, o sea, \$361.000 mensuales que tuvo en cuenta el juzgador de primer grado para efectos de realizar las respectivas liquidaciones. (...) En consecuencia, el fallo impugnado por este aspecto se mantendrá."*

En relación con la inconformidad del apelante respecto de la condena impuesta por concepto de cesantías, dijo:

"Ahora bien, en cuanto a la liquidación de las cesantías hecha por el A quo, la Sala encuentra ajustados a derecho los factores y las operaciones realizadas y teniendo en cuenta que a la liquidación efectuada por la empresa, debe sumársele el suministro de carne durante sus últimos tres meses de servicios, el cual, tal como se concluyó dentro de este misma providencia, constituye salario en especie. Ahora bien, al observarse la impugnación de la empresa en este sentido, no encuentra esta Corporación que el apelante explique el verdadero motivo de inconformidad, simplemente se limitó en el escrito de réplica a exponer la manera como se había liquidado las cesantías, pero se reitera, no argumenta en que aspecto consideró errada la decisión. En consecuencia, se confirmará el fallo apelado en este sentido."

Respecto a la reliquidación de la pensión de jubilación, indicó el Tribunal que el a quo se basó al efecto en el artículo 109 de la convención colectiva de trabajo para entonces vigente, el cual transcribió, y agregó:

"El juez de primera instancia para obtener el salario promedio base de liquidación, tuvo en cuenta los factores con incidencia salarial por mandato legal y convencional, aplicando los mismos conceptos y valores tenidos en cuenta para la liquidación de las cesantías y además, que el actor laboró un total de 26 años de los cuales los últimos 6 en atención al parágrafo 3° transcrito, generan el reconocimiento del 2.5% por cada año subsiguiente a los



primeros 20. En ese orden de ideas, el cual considera la Sala ajustado a derecho, procedió a condenar a la demandada al reajuste pensional; de lo que se sigue, se confirmará la decisión en este sentido."

En punto a la condena por indexación, expresó:

"El A quo, sin hacer mayores comentarios, accedió a indexar las condenas deducidas con el índice de precios al consumidor acumulado, entre la fecha de desvinculación del demandante y la fecha en que se efectúe el pago de la condena. Es evidente que existe una pérdida de poder adquisitivo de la moneda en contra del demandante, que debe ser compensada a través de la actualización monetaria, respecto de obligaciones puras y simples; tesis que encuentra de vieja data pleno respaldo jurisprudencial; entonces en este sentido no le asiste razón al apoderado de la entidad demandada en cuanto al planteamiento esgrimido atinente a la no procedencia de la indexación respecto de las sumas objeto de condena."

Así, el Tribunal decidió confirmar en todas sus partes la decisión apelada.

V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso la demandada con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y demás normas que la modifican y complementan, entre ellas los artículos 7° de la Ley 16 de 1969 y 51 del Decreto 2651 de 1991, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se "CASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia - Sala Laboral, el día 22 de octubre de 2008, en cuanto confirmó las condenas impuestas en los numerales primero, segundo, tercero, quinto, y séptimo de la sentencia proferida por el Juez de primera instancia; y para que en sede de instancia revoque la de primera instancia en sus numerales primero, segundo tercero, quinto, y séptimo del resuelve y en



73

Expediente 38945

su lugar absuelva de todo cargo y condena a la parte demanda ECOPETROL S. A., condenando en costas a la parte demandante."

Con ese propósito formuló dos cargos por la vía indirecta, que fueron oportunamente replicados.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia impugnada de violar la ley "por la vía indirecta, en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA, el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 51 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y artículos 174, 175, 177 y 87 del Código de procedimiento Civil."

Asevera que el Tribunal incurrió en el siguiente error de derecho:

"Dar por probado sin estarlo, que la convención colectiva aportada y con vigencia para los años 2001 - 2002, tenía la constancia de depósito, que la hiciera producir efectos."

La prueba mal apreciada, según el recurrente, es la Convención Colectiva vigente para 2001-2002 (anexo de pruebas).

La demostración argumentativa del cargo, la expone en los siguientes términos:

"El Juzgador de Segunda Instancia no apreció acertadamente la convención colectiva, por cuanto no se percató que dicho escrito, carecía de la constancia de depósito, que debe expedir o acreditar a través del Ministerio de Protección Social."

Trascribió al efecto el artículo 469 y agregó:



“Del anterior texto, se desprende que para que la convención colectiva produzca efectos es necesario cumplir el requisito del depósito, no acreditarlo significa que la convención colectiva a pesar de que su texto esté en el proceso, no produce efecto alguno; al no producir efecto tampoco se puede hablar de unas condenas tales como, el suministro de carne, el salario básico, subsidio de habitación, subsidio de transporte, prima convencional, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, turnos y sobretiempo, reemplazos temporales, prima de antigüedad en dinero y por ello la reliquidación del auxilio de cesantía, tampoco la reliquidación de la pensión de jubilación e indexación, porque por sustracción de materia si la convención colectiva no produce efectos, mal puede señalarse o tenerse en cuenta las normas de dicho escrito convencional que consagre estos auxilios, factores de liquidación y reajuste con los mismos a las cesantías y pensión de jubilación.”

“La prueba del depósito es lo que se ha denominado una prueba ad substantiam actus o ad solemnitatem, es decir, que no puede ser suplido por ningún otro medio probatorio, a pesar de la libre apreciación de las pruebas que tiene el juzgador, porque la ley ha querido darle una solemnidad a determinados actos, que sin ellos no es posible su demostración y su eficacia.”

Luego, reproduce la decisión impugnada y aduce:

“El anterior planteamiento del Tribunal, carece de validez, toda vez que la convención colectiva firmada para el bienio 2001- 2002, carece de la constancia de depósito, por tanto el hecho que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, Grupo de Archivo Sindical, se le haya solicitado el depósito el 11 de junio de 2001, no significa que haya sido depositada en tal fecha pues, no está acreditando a fecha de constancia en que se depositó dicha convención por lo que entonces observando el folio 115, del cuaderno anexo, no aparece a constancia del depósito, por lo que no produce efectos cuando no se cumple este requisito tal y como lo menciona el artículo 469 del C.S.T.

Así las cosas, el hecho que el Tribunal haya copiado el texto de la convención colectiva suscrita para los años 2001 - 2002 y que incorpora las normas de la convención colectiva firmada el 11 de junio de 2001, se tiene por no incorporada, a pesar de que aparezca el texto en el proceso, pero como carece de los requisitos ordenados en la ley hace que no produzca efecto, razón por la cual estamos frente al error de derecho señalado.

En cuanto a la convención colectiva firmada el 11 de junio de 2001 a pesar de que existe un sello en fotocopia ilegible, no se puede leer que haya sido depositada pues en esa fotocopia no se indica qué actividad se realizó y



Corte Suprema de Justicia

75

Expediente 38945

qué constancia quiere dejar el sello ilegible, en el mismo se lee (folio 115 cuaderno anexo de pruebas):

TRABAJO
Santafe de 200
En esta fe el se Néstor Raúl Porras G.
Hernando Hernández Pardo
Hace el depósito de la Convención Colectiva
De Trabajo Vigencia 1 Enero 2001- 31 Diciembre 200
Firmado entre la Empresa Colombiana
de Petróleos ECOPETROL
y el S Unión Sindical Obrera
de la Industria del Petróleo USO
El S.'

Sello que no indica la fecha del depósito de la convención colectiva pues ni siquiera aparece de qué convención colectiva se trata.

De acuerdo a lo anterior se debió poner el sello que acredita el depósito de la misma, pero tal sello no aparece y el que esta es totalmente ilegible por lo que no se puede acreditar que el mismo certifique el depósito de dicha convención, razón por la cual carece de la constancia de depósito, y si así es, entonces no puede producir efectos toda vez que no reúne los requisitos que ordena el artículo 469 del C.S.T., por lo que estamos frente al error de derecho endilgado en este cargo.

Estimo que en los anteriores términos queda probado el cargo y que procede entonces anular la sentencia en la forma que lo indica el alcance de la impugnación.."

VII. LA RÉPLICA

La oposición indica que no se configura el yerro acusado, en razón a que la Ley 712 de 2001 le otorga valor a las reproducciones simples de algunos documentos, entre otros, a "las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos reglamento de trabajo y estatuto sindicales."

Agrega que la fotocopia simple de la convención que obra al plenario, "trae en su primera pagina (sic) un escrito dirigido al ministerio del trabajo, grupo de archivo sindical firmado por el apoderado de ECOPETROL (...) y presidente de USO nacional existiendo sello de recibido del 13 de junio de 2001"; complementa su



alegación señalando que el recurrente se contradice al afirmar que el sello no es legible, al tiempo que manifiesta, *"que se hace el depósito de la convención colectiva de trabajo con vigencia de enero 01 de 2001 a diciembre d 31 de 2002."* Concluye entonces que la convención colectiva anexa al expediente, es *"auténtica (sic), no fue refutada ni tachada por ECOPETROL S.A."* y que su apoderado en primera y en segunda instancia, así como los jueces de primer y segundo grado, le *"dieron aplicación en forma correcta y debida."*

VIII. SE CONSIDERA

No tiene razón la opositora, al sustentar su alegación en la autorización legal establecida para aportar a los juicios del trabajo la reproducción simple de la prueba documental que se pretenda hacer valer, en cuanto no es ese el cuestionamiento que plantea la censura, cuyo ataque versa en realidad sobre la ausencia de los requisitos consagrados en el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo, requisitos que permitieran darle validez al acuerdo convencional.

Tampoco es atinada la objeción referida a que el apoderado de la demandada, tanto en la primera como en la segunda instancia, no refutó, ni tachó la copia de la convención anexa al expediente, ya que como lo señaló la Sala en sentencia del 25 de noviembre de 2004, rad. 20985, cuando en la demanda inicial se invoca, de manera principal, el reconocimiento de los beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo y sobre ese aspecto gira el litigio en las instancias, bien procede en sede de casación la discusión sobre la validez de dicho acto jurídico que es la fuente sobre la cual el Tribunal profirió la sentencia condenatoria. Al respecto precisó que *"no hay*



77

Expediente 38945

'hecho nuevo' puesto que, además, es la misma ley, artículos 469 del Código Sustantivo del Trabajo y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la que exige el cumplimiento de una serie de requisitos para otorgarle pleno valor probatorio."

Descartados los reproches que la opositora le formula al cargo, cabe anotar que el argumento central de la recurrente para derrumbar el soporte del fallo impugnado, consiste en que el texto convencional en el que basó el Tribunal su decisión, carece de la constancia de depósito por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, no produce efectos.

En este orden de ideas, advierte la Corte que revisada la primera página del anexo que contiene la convención colectiva de trabajo, obra comunicación del 11 de junio de 2001 suscrita tanto por el apoderado general de la demandada como por el presidente de la organización sindical, en la que se lee que en los términos del artículo 469 del C.S.T. se hace el depósito del convenio colectivo con vigencia de dos años, a partir del 1º de enero de 2001, firmada en la misma fecha, es decir, el 11 de junio del 2001. Además, se observa, al mismo folio, de manera casi imperceptible, el rastro de un sello ilegible, que no permite tener certeza de la fecha de su depósito.

Y si ello es así, no es posible establecer si el pregonado depósito se hizo a más tardar dentro de los quince días siguientes a la firma del acuerdo colectivo, por cuanto ello no emana de la documental en comento, que dicho sea de paso, necesariamente debió acreditarse por quien pretendió que se le aplicaran los beneficios de la convención. De modo que sin dubitación alguna, para la Corte es claro, que no existe prueba de la constancia de depósito



conforme a lo mandado en el multicitado artículo 469 de la codificación laboral y de la seguridad social.

La Corte Suprema se ha pronunciado reiteradamente en asuntos similares en el sentido anunciado.

Ciertamente, en asunto seguido contra la misma demandada, dijo la Sala en la sentencia radicada bajo el No. 26651 del 9 de febrero de 2006, refiriéndose a la prueba de la convención colectiva de trabajo, lo siguiente:

"Por lo demás, como bien lo anota la oposición, ese medio de convicción de todos modos no podría ser considerado por la Corte en cuanto no fue regularmente allegado al proceso; en efecto, la convención colectiva de los años 1983 – 1985 no fue pedida por las partes ni decretada como prueba por la autoridades judiciales que tuvieron a su cargo el asunto. En la demanda se solicitó como prueba oficiar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social) para que enviaran copia autenticada y con constancia de depósito de la "Convención Colectiva vigente para los años 1985 y 1987" y así se decretó por parte del Juzgado.

*Ahora bien, no pasa desapercibido para la Corporación, que la Convención Colectiva que rigió en el lapso de 1985 – 1987 aparece en la actuación, pues fue aportada por ECOPETROL en la contestación de la demanda y decretada como prueba en la primera Audiencia de Trámite realizada el 30 de julio de 2003 (fl. 51 Cdn. Ppal.). **No obstante, dicho acuerdo carece de eficacia probatoria, pues no cuenta con la constancia de que se cumplió con el depósito oportuno en las dependencias competentes del Ministerio de la Protección Social, solemnidad que exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y que es menester probar cuando se pretende hacer derivar derechos o prerrogativas de tales actos jurídicos, como de manera reiterada lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencia de 28 de agosto de 2002, rad. N° 18296). (Resalta la Sala)***

En oportunidad posterior, en sentencia No. 37307 del 21 de septiembre 2010, reiteró:



"El cargo sostiene que el Tribunal incurrió en el error de derecho de dar por demostrado la existencia de la convención colectiva de trabajo obrante en autos, sin advertir que la misma carecía de la constancia de depósito, así como dar por demostrado que el demandante estaba excluido del campo de aplicación de la convención.

Sobre el particular, observa la Corte que efectivamente la convención colectiva de trabajo obrante de folios 202 a 234 del expediente, aparece sin la correspondiente nota de depósito, exigencia que **de acuerdo con el artículo 469 del C. S. del T. es imprescindible para acreditar la existencia de un convenio colectivo de trabajo, en tanto que el referido precepto dispone que sin el lleno de ese requisito legal la convención no produce efecto alguno.**

Es claro, en consecuencia, que el colegiado incurrió en el error de derecho de dar por demostrada la existencia de la convención colectiva de trabajo que en copia reposa en el expediente; y desde luego, tampoco podía deducir de allí que el cargo ocupado por la demandante estaba excluido del campo de aplicación de la convención colectiva de trabajo." (Negrilla fuera de texto original)

Y, recientemente, en asunto en el que se debatió cuáles eran los factores salariales establecidos en la convención que debían tenerse en cuenta para liquidar la pensión, dijo la Corte en sentencia No. 43418 del 1º de febrero de 2011, lo siguiente:

"Sin embargo, para determinar cuáles eran los respectivos factores salariales a tener en cuenta para liquidar la prestación en un 75% de lo devengado en el último año de servicios, el Tribunal debía contar previamente con la Convención Colectiva de Trabajo, fuente del derecho reconocido por la entidad al demandante, en la que constaran tales aspectos, pues al tratarse de una pensión convencional, su liquidación y forma estaban reguladas necesariamente por aquélla.

Pero, contrario a ello, tal como lo sostiene la censura, **dicha prueba no fue allegada al proceso, con su debida nota de depósito ante el Ministerio de la Protección Social, para de ello derivar el derecho** que fue reconocido erradamente por el ad quem, por lo que éste, al haber dado por sentado que los factores certificados en el folio 14 y devengados por el



actor en el último año de servicios debían tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación convencional, **sin existir la prueba solemne requerida, incurrió en el error endilgado por la Caja recurrente.**" (Destaca la Sala).

Así las cosas, no cabe duda que el Tribunal incurrió en el desacierto que le atribuye el cargo, pues le dio validez a la convención colectiva de trabajo en la que apoyó su decisión, sin reparar en la ausencia de la solemnidad exigida en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual, por esa razón, fue indebidamente aplicado.

En consecuencia, el cargo prospera y habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto a las condenas impuestas que dependían de la aplicación de la convención colectiva de trabajo.

IX. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia impugnada de violar la ley "por la vía indirecta, en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA, los artículos 467, 468, 469 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 37, 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965; en relación con los artículos 127, 128, 249, 307 y 308; los artículos 1 (modificado por la ley 712 de 2001, artículo 1), 2 (modificado por la ley 712 de 2001, artículo 2), 25, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; artículos 174, 175, 187, 251 a 254, 258, 268, 276 a 279 del Código de Procedimiento Civil."

Señala que fueron pruebas erróneamente apreciadas, las siguientes:

1. Convención Colectiva vigente para 2001 - 2002 del cuaderno anexo de pruebas. (artículo 57 parágrafo 1)



2. Constancia de tiempo de servicios de fecha 23 de agosto de 2005. (folio 26 del cuaderno principal)
3. Escrito de demanda (folios 2 y 3 del cuaderno principal)
4. Laudo arbitral de diciembre 9 de 2003, (cuaderno anexo de pruebas)
5. Liquidación cesantía, (folios 21 y 91 del cuaderno principal)
6. Liquidación de pensión de jubilación (folios 89 y 90 del cuaderno principal)
7. Comprobantes de pago (folios 32 a 56 del cuaderno principal)

Indica que el tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por probado sin estarlo, que ECOPETROL suministró carne al aquí demandante José Ángel Sierra Chaverra, a título gratuito.
2. No dar por demostrado estándolo, que el suministro de carne se hace a título oneroso, en razón a que ECOPETROL continuará vendiendo en sus comisariatos los artículos que ha venido vendiendo, y en el caso del precio de la carne mantuvo el vigente a la fecha de la firma de la convención colectiva.
3. Dar por demostrado sin estarlo que el aquí demandante, para objeto de la liquidación de cesantías trabajó 26 años, 2 meses y 21 días, cuando el contrato a término indefinido data del 21 de agosto de 1978 y el retiro el 28 de noviembre de 2003, para un tiempo de 25 años, 3 meses 8 días, descontado el tiempo perdido de 3 meses 10 días, da un tiempo de 24 años, 11 meses y 28 días.
4. No dar por demostrado estándolo que el aquí demandante inició a laborar con contrato a término indefinido el 21 de agosto de 1978 y se retiró el 28 de noviembre de 2003, para un tiempo de 25 años, 3 meses 8 días, que descontando el tiempo perdido o no laborado de tres meses 10 días arroja un neto de 24 años, 11 meses y 28 días.
5. No dar por demostrado estándolo que con base en la convención colectiva de trabajo vigente para 2001- 2002, con base en el artículo 104, se tiene el último salario mensual del trabajador que no haya tenido variación en los últimos tres meses.
6. No dar por demostrado estándolo que para liquidar el tiempo de servicios para el auxilio de cesantía se debe acudir al Código Sustantivo de trabajo, artículo 249, es decir un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año.
7. No dar por demostrado estándolo que el aquí demandante en el hecho cuarto de su demanda (folio 2 del cuaderno principal), confesó que el tiempo con contrato a término indefinido lo fue de 25 años 3 meses 7 días, igualmente confiesa un tiempo perdido de 100 días, que equivale a tres meses y diez días.



8. No dar por demostrado que el tiempo laborado por el demandante denominado contrato temporal lo fue de 1 año, 2 meses y 23 días en forma anterior al contrato a término indefinido.
9. Dar por demostrado sin estarlo, que para liquidar el salario base de liquidación de la cesantía, se toman los factores que lo componen por doceavas partes, cuando debe ser el promedio de los últimos 3 meses.
10. No dar por demostrado estándolo, que el salario base de liquidación de la cesantía es el percibido en forma uniforme durante los últimos 3 meses, o en caso de ser variable & promedio de estos últimos 3 meses de servicio.
11. No dar por demostrado estándolo que el subsidio de alimentación es el que fija la convención colectiva, para el lugar donde se encuentra trabajando el trabajador, que para el caso del demandante corresponde a \$87.00 pesos.
12. No dar por demostrado estándolo que la convención colectiva señala que el subsidio de alimentación para os trabajadores de pito a pito no tiene incidencia salarial.
13. Dar por probado sin estarlo que la prima semestral de servicios tiene incidencia salarial.
14. No dar por probado estándolo, que la prima de servicios por expreso mandato de la ley y según el artículo 1 de la convención colectiva de trabajo vigente para 2001 -2002, no tiene incidencia salarial.
15. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario base de liquidación para la pensión de jubilación es el mismo que se tiene para liquidar la cesantía.
16. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante era beneficiario del laudo arbitral proferido el 9 de diciembre de 2003.
17. No dar por demostrado, estándolo, que el aquí demandante terminó su relación laboral en forma anterior a la expedición del laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003.
18. Dar por demostrado sin estarlo, que el aquí demandante era beneficiario del incremento para el año 2003, como bonificación, contemplado en el laudo arbitral expedido el 9 de diciembre de 2003.

En la demostración del cargo, dice el recurrente que el juez de alzada apreció equivocadamente el artículo 57 de la convención colectiva de trabajo, el cual transcribe, referido a los comisariatos de la empresa, en los que se provee a los trabajadores de artículos al precio de costo más un 10% y en el que se establecen las condiciones para el suministro de carne.

Precisa que el parágrafo de la citada norma convencional, "no significa que se entregue la carne como un salario en especie" y que en tal sentido "EL Tribunal interpreta mal la convención colectiva, pues está claro que el demandante en su último



Expediente 38945

año de servicios en su hecho décimo primero, retiró carne en bolsas de primera calidad explicando en tal hecho, que era conforme al artículo 57 parágrafo 1 de la convención colectiva, es decir que la compraba, en ese mismo hecho señala que tenía un cupo de 1.140 libras al año, pero que, no puede el valor que tenía esta carne volverlo un salario en especie, porque la norma convencional es clara y expresa y no admite interpretaciones distintas que ECOPETROL le vendía la carne a sus trabajadores a través de sus comisariatos, así las cosas, el Tribunal incurre en los errores de hecho señalados como primero y segundo y que son de bulto, porque para que exista un salario en especie se requiere que se suministre tal elemento a título gratuito o a una suma írrita, pero la norma convencional, señala que el valor de la carne, regirá el valor vigente a la fecha de la convención colectiva." (fls. 36 y 37 del c. de la Corte). Para redundar en su argumentación se refiere a la prueba pericial, en la que en su entender queda claro que el ex trabajador demandante pagó un precio por la carne conforme a lo mandado en el artículo 57 del acuerdo convencional.

Luego agrega:

"Y digo que el Tribunal interpretó incorrectamente la convención colectiva, porque le dio el tratamiento al suministro de carne, de salario en especie, al entender que lo fue a título gratuito" (...). Si (...) hubiera interpretado correctamente el artículo 57 parágrafo 1 de la convención colectiva vigente para los años 2001 y 2002, habría llegado a la conclusión, de exonerar a ECOPETROL de tal pago porque no era constitutivo de salario, toda vez que no fue suministrado por ECOPETROL a título gratuito sino oneroso, del peculio del trabajador y en desarrollo de su libertad de adquirir los alimentos en el casino de la empresa o en el establecimiento de comercio de su preferencia, no es de dudar que el casino sí es un beneficio que facilite a los trabajadores adquirir alimentos para su manutención, pero que no constituye una contraprestación directa del servicio, por lo que en ningún momento se puede calificar de salario en especie.

El Tribunal interpreta equivocadamente el artículo 3 parágrafo 2 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2001 y 2002 (cuaderno anexo de pruebas), que a la letra dice: "Los trabajadores al servicio de contratistas y los temporales que laboran para ECOPETROL en trabajos propios de la industrial del petróleo, **serán llamados para proveer las vacantes que se produzcan dentro de los escalafones respectivos en cada distrito**, siempre y cuando llenen los requisitos establecidos por la



Expediente 38945

Empresa, sin afectar en ningún caso al personal de base de la escala inferior al cargo, así como también los preferirá para llenar los nuevos cargos que se crearen. (Negrillas propias del texto).

(...)

Parágrafo 2. El tiempo de servicio de estos trabajadores temporales será reconocido por Ecopetrol por efectos de antigüedad y demás prerrogativas de esta Convención' (...) Y digo que interpretó equivocadamente el artículo mencionado, porque el texto convencional es clarísimo al señalar que el tiempo de un contrato temporal se cuenta para efecto de antigüedad y otras prerrogativas, pero el mismo no señala que sea tenido en cuenta para liquidar prestaciones sociales como la cesantía; así las cosas, el Tribunal incurrió en los errores de hecho señalados del 3 al 8. (Negrillas propias del texto).

Si el Tribunal se hubiese atendido a la literalidad del parágrafo 2 del artículo 3 de la convención colectiva, habría entendido que el tiempo que se debía de tener en cuenta para liquidar la cesantía del aquí demandante, no era otro que el que resultara de contabilizar desde la fecha de inicio del contrato a término indefinido, es decir, desde el 21 de agosto de 1978 a 29 de noviembre de 2003, para un total de 25 años, 3 meses 8 días y que de contado el tiempo en que no hubo prestación de servicio denominado perdido, de 3 meses 10 días, nos arroja un neto de 24 años 11 meses y 28 días, que es el correcto según la convención colectiva, por lo tanto el Tribunal interpretó equivocadamente la certificación expedida por Ecopetrol, (folio 26 del cuaderno principal), porque esta constancia debió cotejarla con lo dispuesto en la convención colectiva, y digo que interpretó mal el documento del folio 26 porque hace como propios los argumentos que esbozo el juzgado de primera instancia para proferir sentencia.

Y es que interpretó mal la convención colectiva porque la misma en su artículo 1 manifiesta que se consideran incorporadas a dicho texto convencional todas las disposiciones legales pertinentes y en especial las del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o modifican, que son las que se aplican en Ecopetrol, así las cosas si la convención colectiva no señaló cuál era el tiempo a tener en cuenta para liquidar las cesantías necesariamente tenemos que remitirnos al artículo 249 del C. S. del T., en donde se indica que se pagará al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, 1 mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracción de año, entonces si lo que terminó fue el contrato a término indefinido, el tiempo a tener en cuenta es el que corresponde a la vigencia de dicho vínculo, por lo que no hay razón para sumar tiempos anteriores de otros contratos, porque la norma así no lo indica, y porque la convención colectiva sólo se refirió a tiempos de contratos anteriores para la prima de



antigüedad y otras prerrogativas pero no lo expresó para la liquidación de cesantías.

Así las cosas, el Tribunal en forma equivocada interpretó la liquidación final de cesantías (folio 21 del cuaderno principal), pues el tiempo es el señalado en dicho documento de 24 años 11 meses 28 días, hago referencia a ésta prueba, pues al decir el Tribunal: 'Ahora bien, en cuanto a la liquidación de las cesantías hechas por el A-quo, la Sala encuentra ajustados a derecho los factores y las operaciones realizadas', por lo que hace propias las razones expresadas por el juez de primera instancia, en esa razón señalo en que interpreta equivocadamente el documento de marras, así las cosas el total de días no son de 9.441, sino de 8.998 que corresponde a 24 años 11 meses y 28 días; como quiera que en los dos primeros errores de hecho demostré que el suministro de carne no es salario, no se debe sumar al salario base de liquidación de cesantías, por lo que al hacerlo, el Tribunal interpreta erróneamente el documento de folio 21 que corresponde a la liquidación final de cesantías, así las cosas, tampoco ha lugar a liquidar en las cesantías el concepto de prima convencional, porque la prima de servicios, la Corte lo ha dicho en reiterada jurisprudencia que no constituye salario y tampoco la denominada prima convencional, porque al decir del artículo 1 de la convención colectiva de trabajo, a ellas se consideran incorporadas todas las disposiciones legales pertinentes y en especial las del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o modifican que son las que se aplican en ECOPETROL, el artículo 307 señala: 'Ya prima anual no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso' Y sí que diciendo en su artículo 308.' 'Las empresas que por pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o reglamentos de trabajo estén obligadas a reconocer a sus trabajadores primas anuales o primas de navidad tendrán derecho a que el valor de éstas primas se impute a la obligación de que trata el presente capítulo, pero si la prima de servicios fuere mayor deberán pagar el complemento'.

De acuerdo a las disposiciones transcritas interpreta equivocadamente el Tribunal la convención colectiva, en cuanto a la prima de servicios como factor salarial, que se consagra en su artículo 96, así las cosas, interpreta igualmente en forma errónea la liquidación de la cesantía (folio 21 del cuaderno principal).

En cuanto a las sobrerremuneraciones que se refieren a trabajos extras diurnos y dominicales y festivos el Tribunal se equivoca al tomar los datos de los documentos (folios 32 a 56 del cuaderno principal), porque suma dos veces los valores de los extratiempos del folio 32 y del folio 33 que corresponden a un mismo periodo; y además tiene en cuenta los demás recibos del folio 39 al 56, lo que no es correcto, pues el salario para liquidar las cesantías es el que equivale a los tres (3) últimos meses y si éste sufre variación en ese mismo periodo por los extratiempos, se sacará el promedio



de lo causado por ese concepto en esos tres (3) meses, por lo que al sumar los folios 32, 34, 35, 36, 37 y 38, nos arroja el valor que se encuentra consignado en el documento del folio 21 como promedio de horas extras equivalente a \$291.756, y eso es así porque en los recibos de folios 32, 34 a 38 el valor dado corresponde a horas, el promedio se saca de sumar los sobretiempos, y sobrerremuneraciones (horas extras, sobrerremuneraciones y recargos de salario que incluye los dominicales y recargos nocturnos), de los meses noviembre, octubre y septiembre de 2003, luego se divide por tres (3) y el resultado es el que corresponde al que aparece en la liquidación de cesantías (folio 21 del cuaderno principal) en la suma de \$291.756.00.

Así las cosas, el Tribunal apreció con error tales documentos, porque al tener como ciertos los cálculos que hizo el juez de primera instancia y que los tomó como propios, incurrió en los errores de apreciación de tales documentos, por lo que a consecuencia de tal error también apreció equivocadamente la liquidación de la cesantía que obra a folio 21 del expediente, siendo lo correcto el valor de \$291.756 y no como lo señaló el Tribunal en la suma de \$14.531.494 arrojando un promedio de \$1.210.957.80, porque esa es la sumatoria del último año de servicios que no ha lugar para liquidar cesantías, pues el artículo de la convención colectiva 104 expresa en su inciso 2, como sigue: 'Cuando el salario varíe por aumento del salario ordinario básico, reemplazos de vacantes, **sobrerremuneraciones (dominicales y festivos, ganancias extras, sobretiempo, recargos de salario,** se tomará como base el promedio de lo devengado en los últimos tres (3) meses o en todo el tiempo de servicio si fuere menor de tres (3) meses' y el Tribunal apreció con error la convención colectiva, pues es claro que el tiempo de servicios del demandante era superior a tres (3) meses, por lo que la liquidación de las sobrerremuneraciones corresponde a los últimos tres (3) meses y no a todo el tiempo del último año, así las cosas, el Tribunal se excedió indebidamente y condenó a la Empresa de Ecopetrol a un monto de cesantías que no correspondía a la liquidación real según la convención colectiva y el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que si el Tribunal hubiese apreciado correctamente la liquidación de cesantías del folio 21 del cuaderno principal, habría entendido que Ecopetrol las había liquidado correctamente y en consecuencia la habría absuelto y en contra partida no habría propinado la condena injusta. (Negrillas propias del texto).

En cuanto al subsidio de alimentación que está regulado en el artículo 59 de la convención colectiva, en el párrafo 1, se dispone: 'Los subsidios a que se refiere el presente Artículo, **para el personal de turno y pito a pito no tendrán incidencia salarial**', según la convención colectiva el Tribunal al acoger las liquidaciones del A-quo y las razones que expresó hizo propios tales argumentos, razón por la cual tengo que decir que se equivocó en la conclusión porque el párrafo final sin discriminar los subsidios de — alimentación de los diferentes lugares y expresar que se rige para los



87

Expediente 38945

turnos y pito a pito, calificando que tales subsidios no tienen incidencia salarial, por lo que la conclusión a que hago referencia contradice el texto convencional y propina una condena sin sustento, en la liquidación del folio 21 Ecopetrol le tuvo en cuenta para la liquidación de cesantías el valor de \$87.00, lo que excede de lo que manda la norma convencional, luego supera lo que no tenía derecho el trabajador y por ello no puede propinarse la condena que en forma equivocada asume el Tribunal, al demostrar este error protuberante, es necesario estarse al valor dado en la liquidación de cesantías (folio 21 del cuaderno principal). (Negrillas propias del texto).

En cuanto a la prima de vacaciones no se discute por estar de acuerdo con la sentencia, ya que corresponde a la liquidada por la Empresa, lo mismo sucede con las vacaciones y la prima de antigüedad.

En consecuencia la liquidación de las cesantías es la que corresponde con base en el documento (folio 21 del cuaderno principal) y no las que el Tribunal tuvo en cuenta al confirmar la sentencia del A-quo de hacer propias las liquidaciones y cálculos como lo expresó en su sentencia con los errores de hecho, alegados y que corresponden del 3 al 14.

En cuanto a la pensión de jubilación, el Tribunal incurre en el error protuberante de hecho, al tener los mismos factores que para la liquidación de cesantía, pues como lo analicé en esa oportunidad el Tribunal no tiene la razón, porque interpreta equivocadamente la convención colectiva y por ende la liquidación para la pensión (folios 89 y 90 del cuaderno del principal), la convención colectiva (cuaderno anexo de pruebas), en su artículo 109, expresa: **'La Empresa continuará reconociendo la pensión legal y vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de/promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, a los trabajadores que habiendo llegado (...)'.** (Negrillas propias del texto).

Está demostrado en el proceso que el aquí demandante terminó su contrato de trabajo el 28 de noviembre de 2003, por lo que el último año de servicios se encuentra comprendido desde el 28 de noviembre de 2002 a 28 de noviembre de 2003, luego no se puede tener en cuenta el mismo salario que para la cesantía, pues éste cambia en cada año por el mes de junio, así las cosas, los salarios del último año tienen variación y para la cesantía no deben tener variación en los últimos 3 meses de servicio o si la tiene, será el promedio de éstos últimos 3 meses, al romperse nota la equivocación del Tribunal, pues el promedio del último año de servicios no se obtiene de sumar durante 12 meses el último salario del trabajador, sino que cada mes se debe sumar, más los demás factores de liquidación para luego tener un valor total de ganancias del último año, al que se divide por 12 para obtener el promedio y luego si sacarle el 75%.



Expediente 38945

Si el Tribunal hubiese aplicado correctamente el artículo 109 de la convención colectiva no habría incurrido en el error protuberante de hecho de tener el salario para las cesantías, como el mismo para liquidar la pensión de jubilación, error que se obtiene de la simple lectura del artículo 109 de la convención colectiva, habría llegado a la conclusión que Ecopetrol había liquidado correctamente la pensión de jubilación, con base en los documentos a (folios 89 a 90 del cuaderno principal), valor que resultó de sumar todos los haberes y ganancias del último año de servicios que arrojó la suma de \$22.326.008, que dividido por 12, nos da un salario promedio para pensión de \$1.860.501, valor al cual se le liquida el 75% y obtenemos la suma de \$1.395.375, cantidad a la cual se le suma 2.5% por cada año de servicio en exceso después de los 20, como el tiempo total de servicio, sumando los contratos temporales y el contrato a término indefinido, descontando años, por lo los días no laborados o perdidos nos arroja la suma de 26 que los primeros 20 corresponde el 75% y a los seis (6) restantes se les multiplica por 2.5 lo que nos da un 15% que sumado a los 75% equivale a un 90% del salario promedio base de liquidación de la pensión, lo que nos arroja la suma de \$1.604.681.

Y no como equivocadamente el Tribunal lo tiene por establecido al hacer propias las liquidaciones y cómputos del juzgado de primera instancia como lo expresa en su sentencia.

Las sobrerremuneraciones le dan al Tribunal \$1.210.958 (folio 217) y Ecopetrol en el rubro trabajos dominicales y/o festivos que corresponden según a convención colectiva como ya lo establecí a sobrerremuneraciones, tiene la suma de \$2.455.037.

La prima de servicios no es salario como lo expliqué ampliamente en este escrito, es lo que el juez llama prima convencional, que según la jurisprudencia de esa Alta Corporación en forma copiosa ha determinado que no es salario por así establecerlo la convención colectiva y el Código Sustantivo de Trabajo, luego no se debe sumar y sin embargo la liquidación de Ecopetrol trae un rubro que lo denomina "bonificación semestral (directivo) o prima convencional y le da el valor de \$1.827.888, que dividido por 12 arroja la suma de \$152.324, cantidad superior a los \$133.802 del Tribunal; la prima de vacaciones Ecopetrol la liquida con la suma de \$1.104.349 (esta cantidad es a la que se refiere el Tribunal cuando señala el folio 48) y que corresponde al 15 de abril de 2003, valor que no puede ser sumado con el del folio 32 porque éste es inferior al del folio 48, luego no puede sumar los dos, porque la prima de vacaciones se causa por el periodo de vacaciones disfrutadas que es de un año, luego no puede sumar dos valores de primas de vacaciones porque se refiere a dos periodos de vacaciones distintos que corresponderían a dos periodos de dos años y como ya lo vimos el salario promedio del último año de servicios es lo que corresponde para el valor dela



Expediente 38945

pensión, luego el Tribunal está sumando dos veces un mismo concepto prima de vacaciones lo que altera las ganancias del último año de servicio, por eso no puede ser de recibo tal liquidación por que (sic) contradice lo estipulado en el artículo 109 de la convención colectiva y que corresponde a una interpretación errónea de la misma, teniendo como consecuencia una apreciación equivocada de los documentos (folios 89 a 90 del cuaderno principal) y que constituyen la liquidación de la pensión de jubilación.

En cuanto a la prima de antigüedad no hay discusión, pues coinciden los valores, lo mismo sucede con los subsidios de transporte y arriendo.

En cuanto a la carne como salario, traigo la misma demostración de los errores de hecho, al tenerlos como salario cuando la verdad es que dicho rubro no se causó, por cuanto como dice la convención colectiva ese suministro de carne se hace a través de los casinos de la empresa por compra que hace el trabajador de tales alimentos.

En cuanto al subsidio de alimentación no es salario por lo explicado para el concepto de cesantías y que en forma graciosa lo trae la liquidación de Ecopetrol (folio 89), suma que es la misma que el Tribunal tuvo en cuenta; así las cosas, demostrado cómo está la equivocación el Tribunal incurrió en los errores protuberantes de hecho señalados y en consecuencia se debe tener como cierta la liquidación de la pensión de jubilación en los rubros expresados (folios 89 y 90 del cuaderno principal). En consecuencia si el Tribunal hubiese interpretado correctamente la convención colectiva, los documentos folios 32, 48, 89 y 90, habría llegado a la conclusión que Ecopetrol había liquidado correctamente la pensión de jubilación y no habría generado la condena que propició al confirmar la sentencia del juez de primera instancia, concluyendo que debía absolver por este rubro a Ecopetrol.

En cuanto a la condena por bonificación salarial como incremento en el año 2003, incurre el Tribunal en error, pues el laudo arbitral fue expedido en diciembre de 2003, como consta en el cuaderno anexo de pruebas, laudo arbitral, expresa: **"En Bogotá, D. C. a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2003 sesiona el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el conflicto entre la USO y ECOPETROL con el fin de resolver los escritos presentados en la Secretaría con ocasión del laudo arbitral dictado el 9 de diciembre del mismo año y que fuera notificado a las partes"**. (la resalta no es del texto) y el demandante terminó su contrato de trabajo el 28 de noviembre de 2003, fecha que no es discutida por las partes, confrontando tales fechas, no es posible aplicar el laudo arbitral al demandante pues su relación laboral había finiquitado para la época en que se notificó el laudo arbitral 9 de diciembre de 2003, error protuberante pues no se puede condenar a una bonificación a una relación laboral terminada antes de proferir el laudo arbitral, el error salta de bulto y por eso, el Tribunal



apreció equivocadamente el cuaderno de pruebas laudo arbitral, de haber confrontado correctamente las fechas habría llegado a la conclusión que había que exonerar a Ecopetrol de tal pretensión. (Negrillas propias del texto).

Hago referencia a esas pruebas porque el Tribunal al indicar que el juez de primera instancia había liquidado correctamente todas las condenas y que estaba de acuerdo con sus planteamientos y factores de liquidación, hizo propios tales argumentos, por lo que deben ser objeto del análisis en la demanda de casación.

X. LA RÉPLICA

El opositor, en gran parte repite la argumentación expuesta para refutar el primer cargo. Además, confronta las acusaciones de la censura con los beneficios consagrados en la convención y, en relación con la bonificación consagrada en el laudo arbitral dice, en síntesis, que en éste se consagró una bonificación para los trabajadores que no recibieron incremento salarial durante el 2003 y que tenían contrato de trabajo vigente al 9 de diciembre de la misma anualidad. Agrega que "la proporcionalidad se da en la medida en que se aplica el derecho a la igualdad para los trabajadores" que a esa data no tenían contrato de trabajo vigente y habían optado por acogerse al beneficio de la pensión de jubilación.

XI. SE CONSIDERA

Emana del texto del recurso, tal y como quedó reseñado en precedencia, que en su gran mayoría, con excepción de los yerros 16 a 18, las acusaciones fácticas están dirigidas a endilgar al juez de alzada la errada apreciación de la prueba de la convención colectiva de trabajo.



Así enfáticamente lo indica el impugnante, cuando al referirse a los yerros primero y segundo (fl. 37 del c. de la Corte) afirma que el *"Tribunal interpreta mal la convención colectiva"*, concretamente en el artículo 57, que como antes se dijo, relata entre otros aspectos, las condiciones para el suministro de carne en los comisariatos de la demandada.

Igual ocurre con los errores enumerados del 3 a 8, los que según la censura (fl. 38 del c. de la Corte) se configuraron porque el *"Tribunal interpretó equivocadamente el artículo 3º parágrafo 2 de la convención colectiva de trabajo (...) "*.

La misma situación se presenta con los yerros enlistados en los numerales 3 a 14, referidos, según explica el recurrente (fl.41 del c. de la Corte), a la errada apreciación de la prueba que obra al folio 21 del cuaderno principal concerniente a la liquidación de cesantías, en los que se incurre porque el Tribunal *"interpreta equivocadamente (...) la convención colectiva"* en los artículos: 1, 3, 57, 59, 96, 104 y 109.

En lo que corresponde a la pensión de jubilación, error enlistado en el numeral 15, sustenta el recurrente su acusación en el contenido de los artículos 104 y 109 de la multicitada convención. (fls. 41 a 43).

Así las cosas, los yerros 1 a 15 no serán objeto de análisis por cuanto su revisión resultaría inane, toda vez que como quedó sentando al resolver el primer cargo, el ejemplar de la convención colectiva de trabajo que se aportó al plenario carece de eficacia probatoria, por no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social.



92

Por la misma razón, esto es, por estar sustentados los reproches en la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo, ninguna de las otras pruebas denunciadas, sirven de soporte para configurar los yerros fácticos que se imputan en los numerales 1 a 15 antes señalados, quedando la Corte relevada de estudiarlas, cada una por separado.

Ahora bien, el único beneficio extralegal que se sustrae de la convención colectiva de trabajo, es el referido a la bonificación por incremento salarial que consagró el laudo arbitral y que fue reconocida a favor del demandante por el juez de primer grado y avalada por el ad quem, con cuya decisión considera el recurrente, se configuraron los yerros enlistados en los numerales 16 a 18.

Dice la censura que incurre el Tribunal en los citados desatinos, por la errada apreciación del laudo que *"fue expedido en diciembre de 2003 (...) y el demandante terminó su contrato de trabajo el 28 de noviembre de 2003"*, por manera que no era posible que la decisión arbitral lo cobijara. Así, considera que *"el error salta de bulto"* y que si se hubiere apreciado correctamente la prueba se habría exonerado a *"Ecopetrol de tal pretensión."*

Sobre el particular es de anotar que la Colegiatura no pudo cometer el error de valoración que se le endilga, toda vez que el laudo arbitral no fue materia de análisis, y por ende, mal podía enrostrarse su mala apreciación; lo procedente era la acusación por la falta de estimación de la citada prueba.



93

Expediente 38945

Además, ante la circunstancia de que el Tribunal no se hubiera pronunciado específicamente respecto al beneficio de la bonificación por incremento salarial, que se afirma contiene el laudo, la entidad demandada debió acudir al trámite dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de que se adicionara la sentencia respecto de la inconformidad plasmada a folios 234 y 235 del memorial de apelación. Como ello no fue así, el recurso de casación no es el remedio procesal para corregir esa omisión en la que incurrió el fallador de alzada y tampoco es el escenario para atribuirle yerros en los que no pudo incurrir.

Sobre este puntual aspecto, recientemente así lo expresó la Corte en sentencia del 24 de mayo de 2011, radicado No. 41142, en la que dijo:

“Ahora bien, en el asunto bajo examen observa la Sala que la sentencia impugnada es un claro ejemplo de aquellas en donde el juzgador omite pronunciarse sobre alguna excepción alegada por la demandada en la oportunidad procesal pertinente, (...).

Ante dicha circunstancia, la sociedad recurrente, apoyada en el remedio procesal establecido en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debió solicitar la adición de la sentencia ante la misma Corporación que la profirió, precepto que dispone que “cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término (...).”

A este propósito la Sala en sentencia de 29 de junio de 2001, radicación 15.456, razonó:

“En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los



artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L.

En sentencia del 8 de septiembre de 1998 (rad. 10967), dijo la Sala, en un caso que era susceptible de ser subsanado mediante la adición de la sentencia, pero que, para el evento de la corrección, resulta igualmente apropiado por existir igual razón jurídica, lo siguiente:

"En segundo lugar y dada la omisión del Tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización de herramientas jurídicas regladas para el caso.

"Al respecto dijo la Corte en sentencia del 11 de febrero del año en curso:

'... resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto.

'En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor.'

'Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1° numeral 141 del Dcto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895." (Sentencia de 11 de febrero de 1998, radicación 10115)"

En resolución, la esfera casacional no es la propicia para ventilar la disconformidad esgrimida en este cargo, por lo que el juez plural no pudo haber incurrido en los yerros jurídicos que se le enrostran".

Colofón de lo expuesto, es que la condena a la bonificación censurada impuesta por el juez de primer grado y confirmada por el Tribunal, se mantiene firme.



En consecuencia, en Tribunal no incurrió en los yerros fácticos endilgados y por consiguiente el cargo no sale avante.

XII. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

A lo expuesto en sede de casación, basta añadir, que como quedó dicho, la prosperidad del primer cargo conduce al quebrantamiento de las condenas que dependieron de la aplicación de la convención colectiva de trabajo, respecto de las cuales y habida consideración de no haberse demostrado en el proceso su depósito ante las autoridades administrativas del trabajo, habrá de absolverse a la sociedad demandada en relación con ellas.

En consecuencia, se modificará la decisión de primer grado a efectos de revocar todas las condenas imputadas a la demandada, salvo lo dispuesto en el literal d) del numeral 3º, referido al pago de la bonificación consagrada en el laudo arbitral y a su correspondiente indexación ordenada en el numeral 5, cuya resolución se mantiene. Revocará en lo demás.

El pago de la bonificación debidamente indexada que la demandada deberá cancelar al demandante, corresponde al monto de \$520.359,35, suma obtenida conforme se indica a continuación:

CAPITAL			CAPITAL
INICIAL	DESDE	HASTA	INDEXADO
\$ 364.444,45	28/11/2003	30/06/2011	\$ 520.359,35



96

Costas en la primera instancia serán a cargo de ambas partes en 50% para cada una. No se impondrán en la alzada por no haberse causado. En sede de casación, no habrá lugar a ellas, porque el primer cargo salió avante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CASA PARCIALMENTE** la sentencia dictada el 22 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por **JOSÉ ÁNGEL SIERRA CHAVERRA** contra la **EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. – ECOPETROL**, en cuanto a las condenas impuestas que dependían de la aplicación de la convención colectiva de trabajo.

En sede de instancia **MODIFICA** la sentencia de primera instancia, y en su lugar dispone:

PRIMERO: Condenar a la demandada a cancelar al actor, la bonificación consagrada en el literal a) del numeral 12 del Laudo Arbitral, cuyo monto indexado al 30 de junio de 2011, asciende a la suma de \$ 520.359,35 conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Revocar las condenas impuestas en los numerales segundo, tercero y quinto de la sentencia apelada, excepto en lo que corresponde a la condena impuesta al pago indexado, de la bonificación consagrada en el literal a) del numeral 12 del Laudo Arbitral.



97

Expediente 38945

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: Costas en la primera instancia a cargo de ambas partes en 50% a cada una. No hay lugar a ellas en la alzada.

En sede de casación, no se impone costas, conforme se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.


CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS


FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ


CAMILO TARQUINO GALLEGO

SECRETARIA SALA DE CASACION LABORAL

Se deja constancia que en la fecha se fijó edicto

Bogotá, D.C. **12 SET. 2011**

Secretario

SECRETARIA SALA DE CASACION LABORAL

Se deja constancia que en la fecha y hora señaladas, quedó ejecutoriada la presente providencia. **19 SET. 2011** Hora **5:00 P.M.**

Bogotá, D.C. Secretario

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL**

**CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada Ponente**

**SL5882-2016
Radicación n° 45332
Acta n° 14**

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por **EDILBERTO PÉREZ CASALLAS** contra el **FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-**.

I. ANTECEDENTES

Con la demanda inicial, el actor solicitó que se condene a la demandada a reconocer la pensión convencional, en forma vitalicia, a partir del día en que cumplió los 55 años de edad y en cuantía del 85% del salario promedio devengado durante el último año de servicios, debidamente indexado, junto con los intereses moratorios. En subsidio de la primera pretensión, solicitó que se imponga a la accionada el pago de la pensión legal de jubilación.

Como fundamento de esos pedimentos, expuso que mediante contrato de trabajo se vinculó a la Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS-, del 16 de diciembre de 1974 al 21 de marzo de 1996; que su último salario ascendió a \$481.512.16; que su empleadora dio por terminada la relación laboral de forma unilateral, por lo que mediante sentencia judicial se ordenó su reintegro, y que el 21 de marzo de 1996, las partes suscribieron una conciliación en la que se acordó el pago de \$7.044.589, por concepto de salarios correspondientes al 1° de enero de 1995 al 21 de marzo de 1996 y de \$30.524.642, por *«mesadas pensionales convencionales desde el 22 de marzo de 1996 hasta cuando cumplieran los 55 años de edad y así tener derecho a la pensión legal de jubilación»*.

Así mismo, manifestó que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo que establecía en su art. 30, lit. a, que *«el personal con veinte (20) años de servicio exclusivos a la*

Empresa, y 50 años de edad, se pensionara (sic) con el 85% de la asignación mensual promedio devengada por el trabajador en el último año de servicio»; que el parágrafo de dicha normativa dispuso que el tiempo de servicios aludido «se entenderá servido a la Empresa exclusivamente, pero puede ser continuo o discontinuo», y que la mencionada empresa fue liquidada mediante D. 495/1996, en el que además se dispuso que a partir del 1° de agosto de 1996, «el Distrito Capital de Santafé de Bogotá sustituye a la Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS-, en la titularidad de sus derechos y en el cumplimiento de sus (sic) obligaciones a su cargo».

Igualmente, adujo que nació el 25 de junio de 1949, por lo que cumplió 55 años de edad en el mismo día y mes del año 2004; que con ocasión a la expedición de la L. 100/1993, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el D. 350/1995 mediante el cual se creó el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá; que FAVIDI era la encargada del reconocimiento y pago de las pensiones a cargo del Fondo de Pensiones de Bogotá; que mediante A. 257/2006 se creó el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones como establecimiento público, y que presentó reclamación administrativa la cual fue resuelta desfavorablemente (fls. 2 a 9).

El Fondo accionado, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones y aceptó los hechos relativos a la existencia de la relación laboral del actor con la EDIS y el extremo inicial de la misma, la orden de reintegro impartida judicialmente, el contenido del art. 30 convencional, la liquidación de la aludida empleadora, la expedición de las

diferentes normativas sobre el particular y el agotamiento de la reclamación administrativa. Así mismo, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido, compensación y prescripción.

En su defensa, sostuvo que el actor, en vigencia de la relación laboral no cumplió con la edad dispuesta convencionalmente para acceder a la pensión deprecada, por cuanto a la finalización del vínculo *«contaba con 42 años de edad»*, y únicamente laboró durante *«16 años y 20 días reales y efectivos»*, de modo que no cumplió con los requisitos para acceder a la prestación que reclama. Igualmente, sostuvo que era deber del demandante acreditar su condición de afiliado al sindicato suscriptor de la Convención, lo cual no se suple *«con allegar las solas Convenciones Colectivas de Trabajo»*. (fls. 121 a 130).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Conoció de la primera instancia el Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 23 de mayo de 2008 (fls. 591 a 610), resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a la demandada (...) a pagar al demandante (...) pensión legal de jubilación equivalente al 75% del último salario devengado a partir del 29 de junio de 2.004, cuya primera mesada será de **\$558.155,17** y en adelante con respectivos incrementos legales anuales.

SEGUNDO: declarar **NO PROBADAS** las excepciones propuestas por la demandada.

TERCERO: ABSOLVER al **FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP** [de] las demás pretensiones incoadas en su contra.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a la demandada.

Para efectos de negar la pensión convencional reclamada, adujo textualmente:

Se aportó al proceso por la Entidad demandada fotocopia de la Convención colectiva de Trabajo, correspondiente al año 1.995 (fls. 457 a 516), vigente a la fecha de terminación de la relación laboral, 21 de marzo de 1.996, sin embargo, revisada la misma encuentra el despacho que dicha fotocopia no cuenta con la constancia de depósito en términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que hace que no pueda surtir efectos y la allegada por el apoderado del actor en audiencia de 20 de febrero de 2.008 (fls. 530 587), lo fue de forma extemporánea, pues no fue acompañada con la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la sentencia impugnada, confirmó la del *a quo* , sin costas en la segunda instancia (fls. 635 a 648).

Para esta decisión, sostuvo que las partes acordaron los efectos de la no solución de continuidad del vínculo laboral hasta la fecha en la que libremente suscribieron la conciliación –respecto de la que ninguna de las partes solicitó la nulidad- y, por tanto, no podía desconocer su contenido. De ahí, sostuvo que el actor laboró más de 20 años al servicio de la EDIS, lo que lo hacía acreedor de la pensión de jubilación oficial impuesta en primera instancia.

A continuación, señaló que el reproche del demandante se limitaba a confutar la negativa del juez de primer grado a reconocer la pensión convencional pretendida. Así, refirió que la convención colectiva aplicable a la fecha de la terminación de la relación laboral *«que no es otra que el 21 de marzo de 1996»*, era la suscrita para el periodo 1994-1995; empero, al remitirse al texto de aquella, observó que la misma carecía de la prueba del depósito legal exigido por el art. 469 del CST, por lo que afirmó que el actor no cumplió con la carga probatoria que el art. 177 del CPC le impone y, en tal virtud, señaló que no era viable el reconocimiento de la pensión convencional deprecada.

En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional señaló que la liquidación presentada por el demandante en su escrito de apelación se encontraba errada, pues al efectuar los respectivos cálculos arrojaba una mesada inicial inferior a la que había impuesto el juez de primer grado.

Finalmente, frente a la alegada procedencia de los intereses moratorios, confirmó su no viabilidad por cuanto la prestación reconocida lo fue con base en la L. 33/1985, posición que apoyó en lo adoctrinado por esta Sala en sentencia CSJ SL, 21 may. 2007, rad. 30325, de la cual reprodujo algunos apartes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el accionante que esta Sala case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, revoque la del *a quo* y, en su lugar, *«condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión convencional, en cuantía del 85% del salario promedio devengado durante el último año de servicios, indexando la base salarial, la cual reconocerá en cuantía inicial de \$654.514.64 , a partir del 29 de junio de 2.009»*, en forma vitalicia, con los reajustes de ley e intereses moratorios. En subsidio, solicita la casación parcial de la sentencia recurrida, y convertida la Sala en sede de instancia, *«revoque parcialmente el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia proferida en primera instancia, para que la pensión legal equivalente al 75% del promedio salarial indexado, sea en cuantía inicial de \$825.977,03»*.

Con tal objeto, por la causal primera de casación, formuló dos cargos que fueron replicados simultáneamente y que la Corte procede a estudiar de manera conjunta, con vista a la réplica y, en tanto denuncian similar cuerpo normativo, se valen de idénticos argumentos y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria, de la ley sustancial por vía indirecta *«en la modalidad de ERROR DE HECHO, en el concepto de aplicación indebida de las normas de carácter nacional consagradas en los artículos 64, 67, 68, 69, 70 y 194 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por la Ley 50 de 1990, vigentes a la terminación del contrato de trabajo, y en los artículos 16, 19, 21 y 488 del mismo Código; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en relación con el artículo 53 de la Constitución Política y violación medio del Art. 60 del C.P.L.»*.

Refiere que el Tribunal incurrió en los siguientes yerros evidentes de orden fáctico:

Dar por demostrado sin estarlo que la Convención Colectiva de Trabajo obrante a folios 532 a 587, carece del requisito de depósito legal exigido por el artículo 469 del C. S. T.

No dar por demostrado estándolo que, la Convención Colectiva de Trabajo aportada por el suscrito, si tiene la constancia de depósito legal.

Dar por demostrado sin estarlo que la Convención Colectiva de Trabajo, fue desconocida por la demandada.

No dar por demostrado estándolo, que la misma demanda reconoció desde un principio la Convención Colectiva de Trabajo.

Aduce que los anteriores errores se produjeron por la errada apreciación de la convención colectiva de trabajo obrante a folios 341 a 450 y 532 a 587.

Para sustentar el cargo, aduce que en la parte final del instrumento colectivo visible a folios 532 a 587, se observa la imposición de un sello que refiere:

30 MARZO 2005

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD ESPECIAL DE INSPECCIÓN

VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO

ARCHIVO SINDICAL

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

DEPOSITADA Enero 31 /89"

Y que igualmente, en el sello de la margen derecha, también se alcanza a leer *«la fecha 31 de marzo de 1989 y consta que el señor Elias (sic) Aponte depositó la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Empresa Distrital de Servicios Públicos y SINTRAEDIS, y contiene el nombre de Teresa Rojas»*.

De manera tal que, afirma, contrario a lo advertido por el por el Tribunal, el instrumento colectivo que aportara en audiencia celebrada el 20 de febrero de 2008, contiene la constancia del depósito legal conforme el art. 469 del CST.

Manifiesta igualmente que el *ad quem* no tuvo en cuenta que la demandada aportó la convención colectiva de trabajo y nunca alegó que aquella carecía del respectivo depósito, en tanto negó el derecho a la pensión convencional, por motivos diferentes. Al respecto, transcribió apartes de la sentencia CSJ SL, 20 jun. 2007, rad. 28780.

Continúa con la reproducción del art. 30 convencional y señaló que conforme lo estableció el juez de primer grado *«la empleadora aceptó la continuidad de la relación»* y que, en cuanto al último salario promedio mensual, aquél lo definió en *«\$480.312,88»*, suma que asevera, debió ser actualizada

conforme al IPC *«causado entre la fecha del retiro y la fecha de cumplimiento de los 50 años de edad»*, conforme la fórmula de indexación utilizada por esta Sala.

Asegura que de la lectura de la citada cláusula convencional, se advierte que la intención de las partes fue la de reconocer una pensión para *«el personal»* que cumplieran 20 años de servicios para la EDIS, sin que fuera requisito para ello, el cumplimiento de la edad en vigencia del contrato de trabajo. De ahí que, señala, en dicha cláusula no se utilizó el término *«trabajador»*.

Bajo ese contexto, acude al tenor literal del art. 1618 del C.C., para señalar que en desarrollo del ejercicio interpretativo, se debe respetar el contenido intrínseco del texto y, manifiesta que la pensión es *«una retribución al desgaste del capital del trabajador, que lo es su fuerza laboral, ésta, en todos los lugares de la tierra se ha establecido por un determinado número de años de trabajo, siendo el cumplimiento de la edad un requisito que se cumple con el transcurrir del tiempo, sin importar para nada la existencia de la relación laboral para que se acceda a la pensión»*. Apoya su postura en lo dicho por esta Sala en providencias CSJ SL, 17 jul. 2002, rad. 18075 y CSJ SL, 4 mar. 1982, rad. 5937 que transcribe.

Aduce que conforme el art. 61 del CPT y SS, el juez está en la obligación de aplicar el principio *in dubio pro operario*, *«lo que llevado a la Convención Colectiva de trabajo, la cual no es norma legal pero sí una prueba, tal como lo han sostenido la Jurisprudencia y la Doctrina, también debe preferirse la interpretación que más favorezca al trabajador»*. Sobre el particular, reproduce

apartes de las providencias CSJ SL, 24 jul. 2002, rad. 18266 y SL 27 sep. 2002, rad. 18915.

En punto al IBL pensional señala que el Tribunal se equivocó al indexarlo desde el 31 de diciembre de 1995, pues ello debió efectuarse desde el 22 de marzo 1996 *–fecha de terminación de la relación laboral–* y hasta el 28 de junio de 2004 *–data desde la que se reconoció el derecho–*, por lo que la pensión legal debe ser reconocida en cuantía inicial de \$825.977,03.

En punto al tema de intereses moratorios, duplica apartes de la sentencia CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30325, para señalar que esta Sala, en dicha providencia no observó lo adocitrinado por la Corte Constitucional en sentencia C-601/2004, que transcribe *in extenso*. Luego, copia el art. 8 de la L. 153/1987 y afirma que procede el reconocimiento de los intereses moratorios contenidos en el art. 141 de la L. 100/1993, respecto de todas las pensiones *reconocidas «a partir de 1994, sean del régimen de transición, o de regímenes especiales, en tanto las mesadas no sean pagadas oportunamente»* y que su no aplicación conlleva la violación del derecho de igualdad.

VII. CARGO SEGUNDO

Le atribuye al Tribunal, por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, la violación del mismo elenco normativo citado en la acusación anterior, salvo el art. 141 de la L. 100/1993.

Aduce que el Tribunal incurrió en los dos primeros errores evidentes de hecho referidos en el cargo primero y acusa la misma prueba denunciada como indebidamente valorada en aquél. Así mismo, reproduce idénticos argumentos a los ya esgrimidos.

VIII. RÉPLICA

El demandado se opone a la prosperidad de los cargos, en tanto señala que el recurrente incurrió en error en la técnica del recurso en la medida que no precisó en qué consistió el eventual error de hecho en que incurrió el Tribunal y, que como quiera que lo que realmente cuestiona el censor es la ausencia de la prueba de la convención colectiva de trabajo con las formalidades de ley, lo pertinente era proponer errores de derecho.

Igualmente, señala que los instrumentos colectivos obrantes a folios 341 a 400 y 457 a 516, en realidad carecen de la constancia de depósito, por lo que las mismas carecen de validez y, que el visible a folios 532 a 587 del expediente, sobre el cual hace recaer su acusación, consiste en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años de 1989-1990, la cual rigió del 1° de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1990, esto es, no tenía aplicación para la fecha en que el demandante finalizó el vínculo laboral con la EDIS.

No obstante lo anterior, refiere que el actor no cumple con los requisitos para acceder la pensión convencional que reclama, pues aun cuando completó 20 años de servicios para su empleadora, la edad exigida en la convención, la cumplió en una data posterior al fenecimiento del vínculo laboral.

Además, señala que conforme la jurisprudencia de esta Sala, el criterio del juzgador en punto a la interpretación de la norma convencional debe ser respetado. Refuerza su posición con lo dicho por esta Sala en sentencias CSJ SL, 28 mar. 2006, rad. 27165, CSJ SL, 1 ago. 2006, rad. 27491 y CSJ SL, 28 feb. 2008, rad. 29841, cuyos apartes reproduce en lo pertinente.

IX. CONSIDERACIONES

Son tres los cuestionamientos que el censor le endilga al Tribunal: (i) que erró en la apreciación de las convenciones colectivas que enuncia, al no advertir de ellas el cumplimiento del requisito de depósito ante el órgano competente; (ii) que se equivocó en la aplicación de la fórmula matemática para efectos de indexar el IBL pensional, y (iii) que falló al no ordenar el pago de los intereses moratorios contenidos en el art. 141 de la L. 100/1993. En ese orden, procede la Sala a su estudio.

1. Cumplimiento de la exigencia de depósito de la Convención Colectiva.

Sea lo primero recordar que tal como quedó visto en el itinerario procesal, el juez de primera instancia, para negar el reconocimiento de la mencionada prestación, adujo que la convención colectiva del año 1995 *-«vigente a la fecha de terminación de la relación laboral»-* y obrante a folios 457 a 516, no cumplía con el requisito contenido en el art. 469 del CST para que surtiera sus efectos, esto es, carecía de la constancia de depósito ante el Ministerio del Trabajo, y que la visible a folios 530 a 587, fue allegada por el actor de forma extemporánea, en tanto no se aportó con la demanda (fl. 604).

El demandante, para confutar tal determinación, precisó en su escrito de apelación que *«el hecho de no haberse aportado con la demanda la CONVENCION (sic) COLECTIVA DE TRABAJO, sino dentro de audiencia, ello de por sí no le quita eficacia a dicha prueba. Ninguna norma procesal impide que se arrimen al proceso ls (sic) pruebas que hayan sido solicitadas y decretadas. Entonces se tiene que al estar la Convención Colectiva de Trabajo debidamente aportada, con la constancia de depósito, tiene todo su valor probatorio»* (fl. 613).

En ese contexto, el Tribunal procedió a revisar el instrumento convencional de folios 341 a 400, repetido a folios 457 a 516, *«aplicable para la fecha de la terminación de la relación laboral»*, para señalar que, en realidad, los dos ejemplares carecían de la prueba del depósito, requisito legalmente exigido para que aquel surta sus efectos, de donde concluyó que el demandante no cumplió con la carga de la prueba en los términos del art. 177 del CPC, aplicable

al rito laboral en virtud de la analogía dispuesta por el art. 145 del CPT y SS.

Ahora, el censor le endilga al Tribunal la errónea apreciación de la Convención Colectiva de Trabajo, obrante a «*folios 341-450 y 532 a 587*», pues afirma que en esta última (fl 585), se advierte claramente la respectiva constancia de depósito ante el ente ministerial y, por tanto, es válida para, con fundamento en ella, obtener la pensión de jubilación convencional que reclama.

Conforme lo anterior, la Sala desde ya, advierte que el Tribunal no incurrió en los errores fácticos endilgados, por cuanto:

- (i) No apreció erradamente la Convención Colectiva de Trabajo obrante a partir de los folios 341 y 457.

En efecto, al hacer la revisión objetiva de dicho instrumento colectivo, evidencia la Sala que el juez de apelaciones no incurrió en defecto alguno en su valoración, pues tal como acertadamente lo expuso en la sentencia recurrida en casación, de los folletos adosados no es posible establecer la fecha en que se verificó el depósito de dicho instrumento, con miras a constatar si tal exigencia se satisfizo dentro de los 15 días siguientes a su firma, como lo requiere el art. 469 del CST.

Nótese, además, que en la demanda inicial nada se dijo sobre el depósito del instrumento de negociación aludido, y ninguna manifestación sobre ese mismo tópico hizo la demandada en el escrito de respuesta, de suerte que este preciso asunto fue materia de elucidación en las instancias, de ahí que conforme a las reglas sobre distribución de cargas probatorias en los procesos judiciales, sobre el actor recaía la obligación de demostrar el cumplimiento de la exigencia echada de menos.

Aquí y ahora, conviene memorar que esta Sala tiene adoctrinado que aun cuando el art. 54 A del CPT y SS tiene por auténtica la reproducción simple de la convención colectiva de trabajo y de la constancia o certificación que haga parte o deba anexarse a dicho documento, lo cierto es que, si bien el legislador eliminó la necesidad de la autenticidad para esos dos textos, mantuvo la exigencia del depósito oportuno como requisito de validez y eficacia del instrumento colectivo (CSJ SL, 13 mar. 2207, rad. 27575; CSJ SL, 9 ago. 2011, rad. 38945 y CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 37106).

Bajo este entendimiento, la convención colectiva cuya indebida apreciación se censura, no se puede tener como un acto jurídico válido, fuente de derechos y, en esa medida no erró el sentenciador de segundo grado.

- (ii) El Tribunal, no se ocupó de apreciar el acuerdo convencional visible a folios 532 a 587.

Al punto, es preciso señalar, que el *ad quem* no pudo incurrir en la errada valoración del documento aportado a folios 532 a 587 que se le atribuye, pues su consideración acerca del no cumplimiento del requisito de depósito del acuerdo colectivo -como quedó visto-, lo extrajo únicamente de aquellos estudiados en el punto anterior. En esa medida, el censor lo que debió fue alegar la no apreciación de ese documento.

No obstante lo anterior, vale la pena resaltar que esa abstención del Tribunal se encuentra plenamente justificada, por cuanto el texto reseñado, tal como lo adujo el *a quo* en su providencia, no fue decretado como prueba.

Sobre el particular, es de precisar que esa documental no fue allegada con la demanda y, en consecuencia, en la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y SS, celebrada el 3 de octubre de 2007, el juez no la ordenó como tal, en tanto dispuso: «*se decretan como pruebas las aportadas junto con la demanda*» (fls. 524 y 525).

En efecto, el instrumento en mención solamente fue arrimado por el apoderado del demandante en la continuación de la segunda audiencia, realizada el 20 de febrero de 2008; empero, el juzgado no se pronunció sobre el mismo, ni corrió traslado de él a la parte demandada para que lo rebatiera.

Luego, no era posible asignarle ningún valor de convicción a tal instrumento, pues se itera, nunca fue

decretado como prueba y, además, fue allegado extemporáneamente tal como lo concluyera el *a quo*. Entonces, tenerlo en cuenta, como lo pretende el censor, viola el derecho de defensa de la parte demandada en tanto ni siquiera tuvo conocimiento sobre su aducción.

Así las cosas, en torno a este aspecto, el cargo no prospera.

2. Aplicación de la fórmula matemática para indexar el IBL pensional.

Manifiesta el recurrente que la fórmula aritmética que el Tribunal estableció para actualizar el IBL del demandante, es errática, por cuanto no tuvo en cuenta el IPC de los meses en que se terminó la relación laboral y se reconoció el derecho, pues en su lugar, aplicó el de la anualidad inmediatamente anterior.

Al respecto, basta señalar que el procedimiento matemático que aplicó el juez de primera instancia y que acogió el Tribunal al confirmar la indexación del IBL de la pensión del demandante, armoniza, con el actual y reiterado criterio de esta Sala, el cual fue vertido en la sentencia CSJ SL, 13 dic. 2007, rad. 31222, en los siguientes términos:

(...) en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará en sede de instancia:

$$VA = VH \times \frac{IPC \text{ Final}}{IPC \text{ Inicial}}$$

De donde:

$$VA = IBL \text{ o valor actualizado}$$

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

*IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la **última anualidad en la fecha de pensión.***

*IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de **la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.***

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas (Resaltado fuera del texto original).

Por lo anterior, el cargo no es fundado en punto a esta temática.

3. Procedencia del pago de intereses moratorios contenidos en el art. 141 de la L. 100/1993.

Frente a este aspecto, se ha de indicar que el mismo corresponde a un planteamiento eminentemente jurídico; luego, el censor debió encausar su reproche por la senda directa que supone plena conformidad con las conclusiones fácticas e inferencias probatorias del *ad quem*, pero como así no lo fue, la Sala se abstiene de efectuar pronunciamiento alguno sobre el particular.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que el Tribunal no incurrió en los errores fácticos que se le endilgan y, en consecuencia, el cargo no prospera.

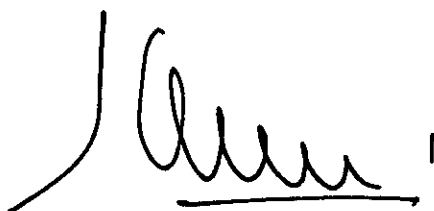
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió adelante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandante recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos (\$3.250.000,00) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

XVIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por **EDILBERTO PÉREZ CASALLAS** contra el **FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-.**

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.



JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

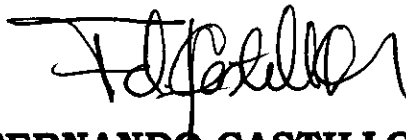
Presidente de Sala



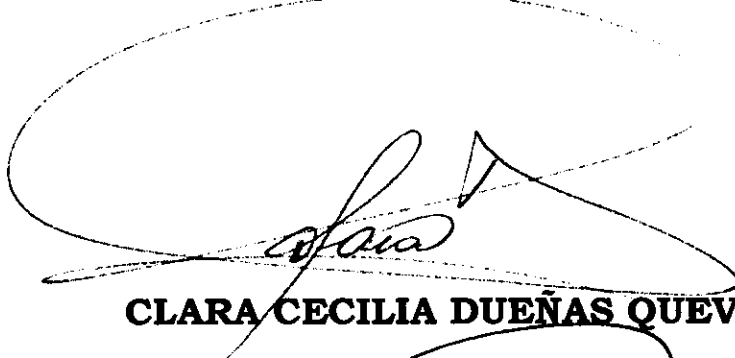
GERARDO BOTERO ZULUAGA



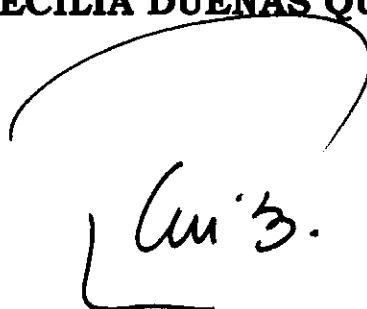
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ



FERNANDO CASTILLO CADENA



CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO



RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO



LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

SECRETARIA SALA DE CASACION



Se deja constancia que en la fecha de hoy se

Bogotá, D.C. 13 MAY. 2016 BOOTH

[Handwritten signature]

SECRETARIA SALA DE CASACION



Se deja constancia que en la fecha de hoy se

Bogotá, D.C. 13 MAY. 2016 BOOTH

[Handwritten signature]

SECRETARIA SALA DE CASACION



Se deja constancia que en la fecha de hoy se
Bogotá, D.C. 18 MAY 2016 BOOTH

[Handwritten signature]



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado ponente

SL378-2018

Radicación n.º 64611

Acta 02

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por **JUAN DARÍO GÓMEZ OCHOA**, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de julio de 2013, en el proceso que instauró el recurrente contra **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.**

I. ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el hoy recurrente demandó a Empresas Varias de Medellín E.S.P. para que fuera condenada a reconocerle y pagarle, *“a partir del momento en que cumplió los 21 años de servicio”*, la pensión de jubilación consagrada en el artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo, junto con las

mesadas y primas causadas, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la empresa demandada *“bajo el cargo de peón de barrido”* desde el 18 de octubre de 1993 hasta el 17 de enero de 1996; que a partir de esta última data se desempeñó en el cargo de auxiliar de soldador; que presentó a su empleador solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación por satisfacer los requisitos establecidos en el acuerdo extralegal mencionado; que la demandada le negó la prestación pensional deprecada bajo el argumento de que *“desempeña el cargo de soldador el cual conlleva obligaciones, funciones y deberes diferentes a las funciones de soldador”*; que su cargo formalmente es el de auxiliar de soldador, pero que *“ha ejecutado funciones de soldador durante los últimos 14 años”*, conforme dan cuenta los registros de control que lleva la empresa, y acorde con *“el acápite de responsabilidades específicas, contenido en el manual de responsabilidades y en el cual se indica que los auxiliares de soldador efectúan “actividades de soldadura”*.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso al éxito de las pretensiones, por considerar que el actor *“ostenta en la Empresa el cargo de auxiliar de soldador que de ninguna manera tiene las mismas funciones, responsabilidades y nivel de competencia que el propio cargo de soldador, tanto es que la empresa tal y como consta en el manual de funciones exige para el cargo de soldador ser técnico en soldadura eléctrica y de acetileno en Institución acreditada y no un simple curso de soldadura, requisito que no posee el señor Gómez Ochoa”*.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas e *“imposibilidad de reconocer intereses moratorios e indexación”*.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de julio de 2011, condenó a la enjuiciada a pagar la pensión de jubilación convencional reclamada, a partir del 18 de octubre de 2007, *“aplicando para ello, lo dispuesto en la cláusula 27 de la convención colectiva de trabajo vigente, literales a.1 y d., así como el correspondiente pago del retroactivo de las mesadas pensionales adicionales a que tenga derecho”*. También ordenó el pago de los intereses moratorios, a partir del 26 de julio de 2010, la indexación de la condena y las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 31 de julio de 2013, revocó la de su inferior y en su lugar absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra. Dejó las costas de ambas instancias a cargo del demandante.

Centró el problema jurídico en determinar *“si el demandante reúne los requisitos señalados en la convención colectiva de trabajo de las Empresas Varias de Medellín para que se le reconozca la pensión de jubilación, en caso afirmativo desde qué fecha debe otorgarse la pensión y si son procedentes los intereses moratorios”*.

Dijo que no era materia de discusión, que el actor ingresó a laborar en la empresa demandada el 18 de octubre de 1993, *“inicialmente en el cargo de peón de barrido”*, y que el 18 de enero de 1996, pasó al cargo de *“auxiliar de soldador”*.

Adujo que la disconformidad de la demandada con la decisión del *a quo*, *“se centra en determinar que el demandante no cumple con los requisitos exigidos por la cláusula 27 de la convención colectiva de trabajo”*.

A renglón seguido, manifestó que *“aunque no es motivo de ataque el formalismo que debe contener el documento convencional, la Sala sí estudia los requisitos de la misma toda vez que es la fuente del derecho que está en disputa”*.

Transcribió el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, y aseveró que los requisitos allí establecidos son claros, en cuanto que *“una copia del texto convencional debe ser depositada en el hoy, Ministerio de la Protección Social, y el otro requisito es que ese depósito se debe hacer dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la convención”*.

Precisó que la prueba de la convención colectiva es solemne, por lo que, *“debe obrar en el expediente, ya que al Juez no le es dable reconocer derechos que no están debidamente probados y menos aún en este caso que la única prueba legalmente eficaz sería el texto de la convención, no importando que se trate de una copia informal, como es el caso, pero sí importando que contenga la nota de depósito, se repite, aunque sea en copia informal, pero que tenga la mencionada nota”*.

Al respecto, indicó que la convención colectiva obrante en el expediente, de folios 16 a 17, *“no cumple con los requisitos legales, pues no se sabe si el original de tal documento fue depositado ante el Ministerio y mucho menos si el depósito se hizo oportunamente”*. En sustento de lo anterior, citó apartes de un fallo de casación del 20 de mayo de 1976, sin indicar número de radicado.

Remató, entonces, en que *“la convención colectiva que se invoca como fuente del derecho no fue aportada al proceso siendo carga procesal del actor por lo que no logró probar los argumentos de su pretensión”*.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, *“y la dictada por el Juzgado Segundo Adjunto*

al Segundo Laboral del Circuito de Medellín”, y en su lugar, conceda las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y se decide a continuación.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa las sentencias de primera y segunda instancia, por la vía directa, por ser violatorias “de la ley sustancial, concretamente por la interpretación errónea del artículo 24 de la Ley 712 de 2001; artículos 177 y 195 del C. de P.C. y 1757 del Código Civil, a su vez conllevó a la aplicación indebida del artículo 469 del C.S.T.”.

Manifiesta que el primer error en que incurrió el Tribunal, “consistió en exigir la demostración de la nota de depósito de la convención colectiva de trabajo ante la autoridad competente, como un elemento sin el cual era imposible tener por cierto que la pensión de jubilación se pudiese dar al actor, no obstante que en la demanda se debatieron hechos tendientes a demostrar si las funciones realizadas por el demandante si se ajustaban a los parámetros exigidos en la convención colectiva para ser beneficiario de la pensión de jubilación, de acuerdo a lo que ésta misma exige, y en la contestación Empresas Varias de Medellín E.S.P. aceptó el hecho de que existía una convención colectiva vigente para los trabajadores, que ésta misma se le aplicaba al demandante (sic) como se trataba de un asunto no controvertido, porque ambas partes estuvieron de acuerdo con ello, la ausencia de prueba de la nota de depósito no tenía porque incidir en la decisión [...]”.

Sostiene que la empresa demandada debió alegar en el escrito de contestación de la demanda *“el hecho que la copia de la convención colectiva que se arrimo (sic) al proceso con la que se pretendía demostrar el derecho sustancial que se solicita, carecía de toda (sic) y por ende no tendría efectos frente a terceros; pero lo anterior no se menciona (sic) en la contestación, por tanto no deberá de suplirle el yerro procesal a la demandada del olvido de oponerse frente a las obligaciones de dicha convención”*.

Expresa que el debate probatorio no giró en torno a la validez del instrumento colectivo, *“por tal razón es innecesario que se haya centrado en la discusión el Tribunal”*, y agrega que --en la primera instancia-- las partes asintieron acerca de *“la validez de la misma y las obligaciones que de ella se (sic) emanan”*.

Dice que *“tampoco en el recurso de apelación entablado por la demandada se mencionó si quiera de manera tangencial la validez o no de la convención por falta de la nota de depósito, por tanto este hecho no se apelo (sic) no teniendo consonancia el fallo de segunda instancia con lo debatido en el proceso y lo apelado que fue específicamente el cumplimiento de las funciones de soldador que dan lugar a demostrar el derecho de obtener la pensión de jubilación”*.

Afirma que cuando el artículo 469 del C.S.T. *“le imprime la solemnidad a la convención colectiva con el hecho de tener la nota de depósito lo hace con la finalidad única que administrativamente se radique dicho convenio ante la autoridad administrativa, por eso lo reviste de tal, sin embargo al aceptar el contenido de la misma se acepta el hecho de la existencia de dicha nota de depósito”*.

Reproduce la disposición antedicha, y arguye que lo

que en ella reza es que el convenio *“tendrá existencia siempre y cuando conste por escrito tal como aquí se demostró”,* pues, añade, se aportó al proceso *“prueba documental del contenido de la convención colectiva y ésta no fue tachada ni siquiera controvertida por el demandado [...]”.*

Transcribe el artículo 54 A *“adicionado por el artículo 24 de la Ley 712 de 2001”,* y señala que *“la copia simple de la convención colectiva tiene plena validez y debió el sentenciador de segunda instancia darle pleno valor probatorio ya que esta norma NO hace excepción si la convención va acompañada o no de la nota de depósito”.*

Asevera que en la primera instancia fue tomada como prueba la convención colectiva echada de menos por el *ad quem,* tanto que la demandada admitió su existencia en la contestación de la demanda y al sustentar la alzada, *“por tanto quien debió de (sic) desvirtuar dicha prueba de la convención sería la demandada”.*

Destaca que *“mediante la prueba de la confesión”* la demandada admitió la existencia de la convención colectiva cuestionada, y que los beneficios allí establecidos le eran aplicables al actor *“si se demostraba las funciones de soldador”.*

Expone que la segunda parte del artículo 469 del C.S.T. alude *“a la solemnidad de la nota depositaria de la convención ante la autoridad competente; lo que desconoce el sentenciador de segunda instancia es el hecho que no se presentó*

ninguna excepción de mérito en la cual se tratara de eludir el cumplimiento por la supuesta ineficacia de la convención al no aportar la nota de depósito”.

Menciona que erró el Tribunal al confundir *“la solemnidad de la convención con efectos frente a las partes con el hecho de la validez de la convención, no queriendo decir que la solemnidad del acto se supla con otro medio de prueba, pero no podrá desconocer la validez de un documento contentivo de obligaciones por las partes, máxime cuando este no fue tachado de falso o manifestó su invalidez o nulidad por falta de solemnidades”*. En ese sentido, subraya que *“no se está discutiendo la solemnidad del acto, sino que este no fue alegado por la demandada en primera ni en segunda instancia”*.

Por último, copia fragmentos de las sentencias de esta Sala de la Corte, del 2 de septiembre de 2008 (radicación 30267), y del 16 de mayo de 2001 (radicación 15120).

VII. RÉPLICA

Crítica al impugnante por agrupar en un mismo cargo dos conceptos de violación excluyentes, como son la interpretación errónea y la aplicación indebida, tanto en el planteamiento como en la demostración del mismo.

Señala que el recurrente plantea la violación de normas adjetivas, *“y es claro que no puede traerse como norma violada la norma procesal, pues ella no tiene el carácter de norma sustancial violada para poder deducir de ella una de las causales de casación”*.

También manifiesta que el actor dirigió su ataque contra las sentencias de primer y segundo grado, *“lo que impediría de cualquier forma abordar el estudio del recurso extraordinario”*.

Advierte que al margen de los defectos técnicos enunciados, lo cierto es que el Tribunal *“no encontró la probanza del depósito de la convención colectiva”*, y asegura que existe reiterada jurisprudencia de esta Corporación *“en cuanto a que es un requisito esencial para que la convención tenga operancia procesal”*.

VIII. CONSIDERACIONES

No asiste razón a la réplica en cuanto al primer reproche técnico que hace al cargo de la demanda de casación, que entiende la Sala consiste en haber acumulado modalidades de violación que por ser excluyentes deben proponerse en cargos separados, por cuanto tal hipótesis sólo es dable censurarla cuando las diversas modalidades de violación de la ley se predicen respecto del mismo precepto normativo en un mismo cargo, pero no cuando en éste se atribuyen a diversas disposiciones como acontece en el *sub lite*, dado que, bien puede ocurrir que al ser el fallo del Tribunal violatorio de la ley, lo sea por infringir directamente una norma, interpretar erróneamente otra y de contera, o al unísono, aplicar indebidamente otra u otras y no se vea necesidad por el recurrente o no se requiera promover separadamente

las acusaciones. Siendo frecuente, incluso, que al infringirse directamente la norma que regula el caso se aplique indebidamente otra, que no es la apropiada a los supuestos de hecho establecidos, o que la interpretación errónea de un particular precepto conduzca al juzgador a utilizar indebidamente otro, o debiendo aplicarlo se sustraiga de ello.

Empero, en lo que sí le asiste entera razón a la empresa opositora es en la objeción que plantea respecto del alcance de la impugnación, toda vez que desconoce abiertamente las reglas mínimas del recurso, pues, como se vio, el recurrente persigue la casación de *"la sentencia del Juzgado Segundo Laboral de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral"*, cuando quiera que este es un medio de impugnación de carácter extraordinario que procede contra la sentencia dictada por el Tribunal y sólo bajo estrictas circunstancias contra la sentencia del juzgado, pues el mecanismo propio a esta última situación lo es el recurso ordinario de apelación. De manera que, si se surte el recurso de alzada contra la sentencia del juzgado, como aquí ocurrió, en modo alguno es posible proponer su casación. Además, en tan excepcional circunstancia tampoco es posible proponer coetáneamente la casación del fallo del Tribunal, pues la casación *per saltum* (artículo 89 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) inhibe el pronunciamiento de segundo grado, dado que supone el ataque directo ante la Corte del fallo de primera instancia.

De esa suerte, la pretensión del recurso extraordinario carece de precisión, claridad y sindéresis frente a lo ocurrido en las instancias del proceso.

Ahora bien, en esencia, la censura alega en el cargo que el sentenciador de segundo grado se equivocó en su decisión, porque, i) sostuvo que el texto convencional allegado al proceso, contentivo del derecho a la pensión de jubilación reclamada, no contaba con la nota de depósito ante el Ministerio de la Protección Social para predicar su validez procesal, y en ese sentido, la copia aportada carecía de las formalidades contempladas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo; y ii) ignoró que al sustentar la apelación, la empresa convocada a juicio nada reprochó al fallo de primer grado relativo precisamente a la *validez o no de la convención por falta de la nota de depósito*.

En cuanto al segundo de los argumentos, debe advertirse que el Tribunal no ignoró que la empresa demandada no planteó como motivo de inconformidad la circunstancia de la falta de depósito, pues así lo manifestó en la sentencia, solo que estimó que por ser la convención colectiva la fuente del derecho que estaba en disputa, sí era necesario estudiar los requisitos de la misma.

Y sobre el particular, profusamente esta Sala ha analizado el contenido del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y ha considerado que se trata del establecimiento de un límite a la competencia del juzgador de segundo grado para resolver el recurso de apelación, de suerte que este

solo puede ocuparse de proveer sobre los puntos materia de inconformidad propuestas por el recurrente, pues de lo contrario, incurriría en un claro desconocimiento del debido proceso y en una directa vulneración de aquél precepto instrumental.

Sin embargo, también ha asentado la Corte que en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas que consagran los derechos sustanciales en disputa, el *ad quem* no está sometido a restricción alguna, en la medida en que es al juzgador a quien le corresponde encontrar y aplicar el derecho en el caso concreto (CSJ SL2939-2016).

En la sentencia recurrida, previo a resolver las inconformidades expuestas en el escrito de alzada, el Tribunal procedió a examinar el expediente en busca de la convención colectiva de trabajo invocada como soporte de la pretensión de reconocimiento de la pensión de jubilación. Es decir, antes que incursionar en el análisis de fondo de los cuestionamientos efectuados por el demandante a la decisión del *a quo*, el *ad quem* procedió a indagar sobre la fuente del derecho debatido; en este caso, uno estipulado en un convenio colectivo de trabajo, y en vista de que no encontró incorporada al expediente la constancia de depósito de dicho acuerdo, procedió a revocar la sentencia estimatoria proferida por el sentenciador de primer grado.

Si bien esta Corporación ha reiterado que en casación la convención colectiva solo es una prueba, por manera que no procede la inclusión de sus contenidos normativos en la

proposición jurídica, también ha destacado su importancia como fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes que quedan cobijadas por sus preceptos. En ese sentido, en la misma forma en que una vez delineado el contexto fáctico del caso, el fallador procede a buscar el precepto legal llamado a producir efectos, cuando de un derecho convencional se trata, ese mismo operador judicial debe buscar la fuente generadora de ese derecho en aras de examinar si se dan los supuestos fácticos que impongan la aplicación del texto convencional, que es ley para las partes.

Así las cosas, ante la ausencia de prueba de la nota de depósito del acuerdo convencional, es claro que el colegiado de segunda instancia no podía partir de la existencia de la norma sustancial -por su contenido-, sino que, contrario a lo planteado por la censura, hizo bien en indagar por la existencia del derecho a cuyo reconocimiento aspiró el promotor del litigio, entre otras razones, porque requería conocer los supuestos fácticos en perspectiva de definir si reconocía o negaba el derecho deprecado, en tanto, frente a la oposición de la demandada a las pretensiones de la demanda, se alegó la inaplicabilidad para el actor de la cláusula convencional sobre la cual soportó su pretensión pensional. Bien puede decirse, entonces, que el juzgador tiene el deber de verificar si se cumplen o no los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual: *«La convención colectiva de trabajo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su*

firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto».

De antaño, la jurisprudencia de la Sala ha entendido la exigencia consagrada en la norma legal no solo como una formalidad, sino además, como un requisito asociado estrechamente a la existencia misma del convenio colectivo de trabajo, no tanto por blindar con mayores garantías los derechos de los trabajadores beneficiarios de la convención, como sí por la necesidad de revestir de certeza ante las partes y frente a terceros la existencia del acto y la correlativa generación de efectos del mismo.

Al respecto, vale la pena rememorar lo dicho por esta Sala, en sentencia CSJ SL8718-2014:

En cuanto a la aplicación que reclama la acusación, en este caso de los postulados constitucionales de prevalencia del derecho sustantivo y de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, debe decirse que no es válido invocar estos principios para suplir la falta de una exigencia prevista por la ley como condición imprescindible del acto solemne para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, pues la razón de ser de este medio de prueba es precisamente dar certeza a las partes y a terceros sobre la existencia del acto, y su consecuente generación de efectos, precisamente con el propósito de garantizar sus derechos, de manera que la ausencia de una exigencia requerida para la validez de un acto no puede identificarse como un problema de conflicto de normas, de interpretación de las mismas o simplemente de una formalidad superflua, pues se trata de un asunto de derecho probatorio.

Y mediante providencia del 16 de mayo de 2001, radicación 15120, fue enfática la Corte al señalar:

[...] al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando [...], así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo”.

En conclusión, el que no aparezca la nota de depósito oportuno del acuerdo colectivo ante el Ministerio del Trabajo, pues el demandante se limitó a allegar un folleto del texto convencional (folios 16 a 17), circunstancia que no discute el recurso, impide verificar si el depósito fue hecho o si lo fue de manera oportuna, esto es, *“a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma”*, para acreditar así la existencia y validez del mismo, aspectos jurídicos que debían ser analizados por el Tribunal, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia.

De otro lado, como también la censura alega que el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto dispone que la copia simple de la convención colectiva tiene plena validez sin hacer excepción acerca de si la convención va acompañada o no de la nota de depósito, debe igualmente ponerse de presente que no incurrió el tribunal en el yerro que se le imputa.

Así se afirma, porque en primer lugar, el depósito de la convención colectiva es un requisito exigido por el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para que dicha convención produzca efecto, como ya quedó dicho; y en

segundo, porque el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al disponer que deben reputarse auténticas las copias simples, entre otros documentos, de las convenciones colectivas de trabajo, no derogó el citado requisito del depósito. Una cosa es los requisitos que deben tener ciertos instrumentos para que puedan producir efectos probatorios; y otra, muy distinta, es que a dichos instrumentos se les haya quitado la exigencia de la autenticidad o de la originalidad, de manera que copia simple de ellos se reputen auténticos. En otras palabras, la copia simple de un convenio colectivo debe contener la constancia de su depósito, por lo que si el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, a través de la oficina correspondiente, expide copia de una convención colectiva con su nota de depósito, las reproducciones fotostáticas de ella se reputarán auténticas, pero sin que pueda obviarse la constancia del depósito.

Por tanto, no prospera el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. En su liquidación, que deberá hacer el juez de conocimiento conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos (\$3.750.000).

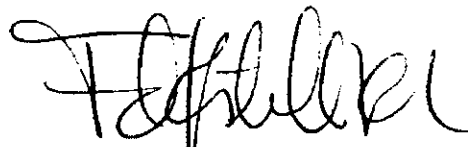
IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de julio de 2013, en el proceso que promovió **JUAN DARÍO GÓMEZ OCHOA** contra **EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.**

Costas, como se dijo en la parte motiva.

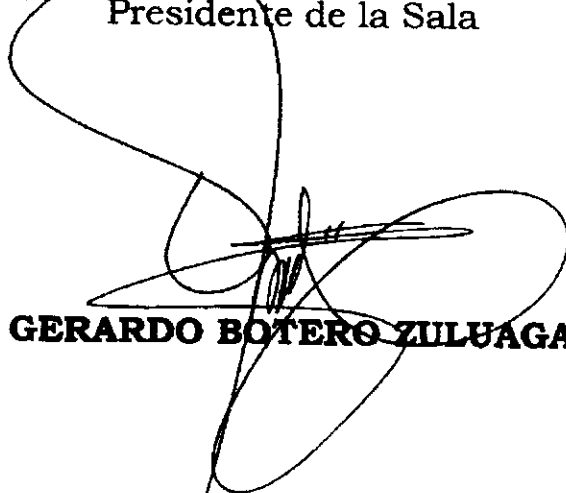
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.



FERNANDO CASTILLO CADENA

Alejo Jota

Presidente de la Sala

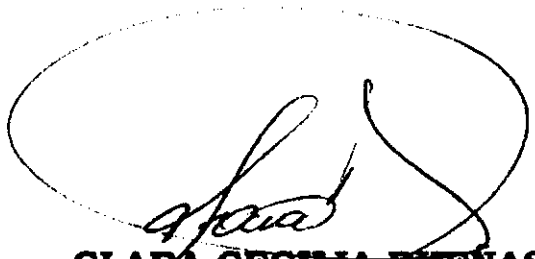


GERARDO BOTERO ZULUAGA




JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ


SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Se deja constancia que en la fecha se
Bogotá, D.C. 05 MAR 2018 5:00 pm


CLARA CECILIA BUENAS QUEVEDO
24/01/18
~~SALVO VOTO~~

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Se deja constancia que en la fecha se
Bogotá, D.C. 28 FEB 2018 5:00 pm

Cu 3.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS


JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Se deja constancia que en la fecha se
Bogotá, D.C. 28 FEB 2018 8:00 am



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°64611

**REFERENCIA: JUAN DARIO GÓMEZ OCHOA VS. EMPRESAS
VARIAS DE MEDELLÍN ESP.**

Me permito, de manera sucinta, aclarar mi voto en tanto considero que el tema concerniente a la validez de la convención colectiva de trabajo no fue materia de debate, es decir, estaba por fuera del marco procesal.

Lo anterior porque basta revisar algunas piezas procesales como el escrito inaugural del proceso y la contestación de la demanda, para llegar a dicho colofón.

La pretensión incoada por el promotor del proceso atinente al reconocimiento de la pensión, tuvo como báculo el acuerdo colectivo. La llamada a juicio, al responder y puesta la mirada en la prueba aportada por el demandante, no desconoció la existencia y validez de la norma convencional como tampoco que el derecho pretendido encontrara venero en la misma, sino que por el contrario se opuso a su viabilidad, porque: i) el *«demandante ostenta en la Empresa el cargo de auxiliar de soldador que de ninguna*

manera tiene las mismas funciones, responsabilidades y nivel de competencia que el propio cargo de soldador, tanto es que la empresa tal y como consta en el manual de funciones exige para el cargo de soldador ser técnico en soldadura eléctrica y de acetileno en institución acreditada y no un simple curso de soldadura, requisito que no posee el señor GÓMEZ OCHOA»; y ii) «por otra parte la Convención Colectiva de trabajo de Empresas Varias de Medellín E.S.P. en la cláusula 27 literal d) cuando habla de funciones de soldador se refiere a ostentar el cargo de SOLDADOR con todas sus responsabilidades y niveles de competencia que de ninguna manera posee el señor GÓMEZ OCHOA al no estar capacitado como se exige en el mismo manual de funciones dadas las circunstancias y exigencias de la misma labor contratada para el mismo desempeño del cargo de SOLDADOR».

Al proponer las excepciones, fue insistente en que: «INEXISTENCIA DEL DERECHO QUE SE RECLAMA Y POR CONSIGUIENTE LA INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., debe ser absuelta de todas las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el demandante ostenta en la Empresa el cargo de auxiliar de soldador que de ninguna manera tiene las mismas funciones, responsabilidades y nivel de competencia que el propio cargo de soldador, tanto es que la empresa tal y como consta en el manual de funciones exige para el cargo de soldador ser técnico en soldadura eléctrica y de acetileno en institución acreditada y no un simple curso de soldadura, requisito que no posee el señor GÓMEZ OCHOA. Por otra parte

la Convención Colectiva de trabajo de Empresas Varias de Medellín E.S.P. en la cláusula 27 literal d) cuando habla de funciones de soldador se refiere a ostentar el cargo de SOLDADOR con todas sus responsabilidades y niveles de competencia que de ninguna manera posee el señor GÓMEZ OCHOA al no estar capacitado como se exige en el mismo manual de funciones dadas las circunstancias y exigencias de la misma labor contratada para el mismo desempeño del cargo de SOLDADOR».

Y como medios de prueba pidió: «DOCUMENTO APORTADOS POR LA CONTRAPARTE: Solicito valorar legalmente aquellos que sean favorables para mi poderdante». Nótese que jamás se opuso a la prueba de la convención colectiva de trabajo.

Luego, la demandada jamás negó la existencia de la convención colectiva de trabajo y tampoco su validez, precisamente parada en ella consideró que no se cumplían los supuestos fácticos para que el actor accediera a la prestación deprecada por estimar que no desempeñó el cargo allí estatuido. Y siendo lo anterior así, no le correspondía al juzgador restarle validez a la prueba aportada por el accionante, porque, se itera, estaba por fuera del marco procesal.

Fecha ut supra


FERNANDO CASTILLO CADENA



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Juan Dario Gómez Ochoa

Demandado: Empresas Varias de Medellín E.S.P.

Radicación: 64611

Magistrado Ponente: Luis Gabriel Miranda

Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, no estoy de acuerdo con el sentido de la decisión ni con su motivación, por las siguientes razones.

De una parte, porque el principal argumento que esgrimió Empresas Varias de Medellín, tanto en la contestación de la demanda (f.º 29 a 33) como al desatar la alzada (f.º 88 a 92), fue que el actor no reunió los requisitos para el reconocimiento del derecho pensional, conforme a la cláusula 27 literales a) y d) de la convención colectiva de trabajo vigente. Pues bien, con ello, la accionada aceptó la existencia de dicho acuerdo y, por lo tanto, dejó por fuera del debate procesal dicho asunto. Así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala, entre otras, en las sentencias CSJ SL 10475, 28 jul. 1998, CSJ SL 37572, 22 ago. 2012, CSJ SL660-2015 y CSJ SL20748-2017.

Asimismo, porque con el actuar de la convocada a juicio se cumplió el mismo objetivo del artículo 469 del Código

Sustantivo del Trabajo y de manera alguna se trasgredió su finalidad, esto es, dar certeza a las partes y a terceros de la existencia de la convención colectiva. De modo que, en este caso en particular, exigir la constancia de depósito en la copia simple aportada por el demandante, cuando dicho medio de convicción no fue objeto de reparo por parte de la accionada, es un formalismo que hace nugatorio el derecho pensional.

Por otra parte, en mi criterio, Gómez Ochoa reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, de conformidad con lo establecido en los literales a) y d) de la cláusula 27 convencional. En efecto, esa disposición establece lo siguiente:

CLÁUSULA 27. JUBILACIONES Y PENSIONES.

Literal a. La Empresa se compromete a otorgar el beneficio de jubilación a los trabajadores que se encuentren en las siguientes condiciones:

a1. El trabajador que cumpla veintiún (21) años de servicios continuos o discontinuos en la empresa se les (sic) concederá una pensión de jubilación equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del salario promedio devengado en el último año de servicios (...).

Literal d. A los que realicen funciones de soldadores actualmente, que hayan laborado más de diez años (10) en este oficio en la empresa, se les contabilizará para efectos de la pensión de jubilación dieciocho (meses) para cada uno de los años trabajados en el oficio.

Nótese que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la demandada a partir del 18 de octubre de 1993 en el cargo de peón de barrido y el 17 de enero de 1996 (f.º 5)

la empresa le asignó las funciones de auxiliar de soldador, hechos que no suscitaron ninguna controversia en las instancias.

El debate se originó en que, según Empresas Varias, las actividades de auxiliar de soldador son diferentes a las del soldador y que el beneficio convencional está contemplado a favor de éste último cargo; argumento que no puede ser de recibo porque en el literal d) la plurimencionada cláusula 27 no hace ese tipo de diferenciación y tan solo se refiere a quienes realicen «funciones de soldadores» durante 10 años o más en ese oficio en la entidad.

Si bien existen ambos cargos en la empresa, nótese que en los *Manuales de Responsabilidades, Resultados y Perfiles* se les asigna funciones similares (f.º 10 a 13) y que en el registro de control de actividades que realiza la demandada a dichos trabajadores (f.º 15) se evidencia igualmente que las gestiones encomendadas son semejantes. En síntesis, considero que la prerrogativa que se concede a este tipo de empleados no está sujeta a ninguna condición del cargo o nivel de estudios, como lo afirma la accionada, y basta simplemente con que se desarrollen las funciones allí indicadas.

Ahora, para la fecha en la que el trabajador hizo la solicitud de la pensión de jubilación, 25 de marzo de 2010, es claro que tenía 14 años de servicios en las funciones de soldador. Por ello, al contabilizar el tiempo de servicios tal y como lo dispone el literal d) de la cláusula 27 de la

convención colectiva de trabajo, arroja un resultado de 252 meses, que es lo equivalente a 21 años de servicios.

Con todo, si alguna duda interpretativa insalvable subsistiere en torno al alcance de la cláusula convencional, ella tendría que resolverse en favor del trabajador, según lo ordena el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

Así las cosas, considero que no era pertinente en este proceso quitarle validez a la prueba del acuerdo convencional que aportó el accionante y se debió reconocer la pensión deprecada.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi salvamento de voto.

Fecha *ut supra*.



CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada



ET
336

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Radicación No. 29212

Acta No. 23

Bogotá, D. C., trece (13) mayo de dos mil ocho (2008).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por **HOLMER YESID VÉLEZ TINEO** contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, de fecha 30 de noviembre de 2005, proferida en el proceso ordinario laboral que el recurrente promovió en contra de **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.** y **OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.**, al cual fueron llamadas en garantía **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** y **COLSEGUROS**.

I. ANTECEDENTES

El recurrente en casación demandó a las mencionadas empresas para que solidariamente se les condene a los ajustes salariales, prestaciones, pagos convencionales, sobrecostos convencionales y por aportes, retroactivos e indemnizaciones, consagrados en las diferentes convenciones colectivas de trabajo celebradas entre la Occidental y su sindicato y la

indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En sustento de esas súplicas, afirmó que las demandadas son contratistas entre sí para la ejecución de labores relacionadas con la explotación y exploración de petróleo en el Complejo de Caño Limón (Arauca); prestó servicios para Integral de Servicios Técnicos Ltda. en el mencionado complejo, a través de varios contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, entre el 1 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 2002, desempeñando funciones de Operador de Grúa P. y H.; el salario final devengado fue de \$2'158.500,00 y, que a pesar de trabajar para la mencionada empresa, ésta no le liquidó los emolumentos laborales mencionados conforme a las convenciones colectivas de trabajo celebradas por la Occidental con su sindicato, aplicables a sus empresas contratistas y subcontratistas, derechos que cuantifica en \$117'785.674,00.

La empresa Integral de Servicios Técnicos Ltda. aceptó los hechos 1, 3, 4, 5 y 8, parcialmente el 2; los demás los negó. Propuso las excepciones de prescripción, pago de la totalidad de salarios y prestaciones sociales, inexistencia de la obligación por error en la liquidación presentada, transacción, finiquito y paz y salvo a la empresa demandada, buena fe del empleador y pago de la indemnización a que tiene derecho el trabajador (Folios 222 a 232).

Occidental de Colombia INC. se opuso a las pretensiones del actor. En cuanto a los hechos no aceptó como cierto ninguno. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. Llamó en garantía a La Previsora y a Colseguros S.A. (Folios 248 a 256).

La primera instancia terminó con sentencia de 22 de agosto de 2005, mediante la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca absolvió de todas las pretensiones, declaró probadas las excepciones de pago de la totalidad de salarios y prestaciones sociales e inexistencia de la obligación. (Folios 557 a 564).

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al decidir la apelación del actor, el ad quem, luego de manifestar que delimitaba su decisión a los motivos de inconformidad expuestos por la parte recurrente, anotó que las pretensiones del promotor del pleito tenían sustento en normas convencionales, sin embargo, las convenciones colectivas de trabajo aportadas por éste al proceso y obrantes a folios 438 a 553, fueron deficientemente allegadas por carecer de los requisitos esenciales para su validez, en tanto carecen de autenticidad y de la constancia de su depósito. En su respaldo, citó y reprodujo el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y apartes de las sentencias de 20 de mayo de 1976, 16 de mayo de 2001 y de 17 de junio

de 2004, radicación No. 22912, todas proferidas por esta Sala de Casación.

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso la parte demandante. Con él pretende que se case la sentencia recurrida a fin de que en sede de instancia se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se condene por los conceptos impetrados en la demanda.

Por la causal primera de casación formuló tres cargos que fueron replicados, de los cuales, por razón de método, la Sala estudiará de manera conjunta los dos primeros, pese a estar orientados por diferentes vías.

PRIMER CARGO

Acusa el fallo de ser directamente violatorio del artículo 24 de la Ley 712 de 2001, establecido como artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que como norma medio condujo a la violación directa de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 65 (anterior), 127, 141, 186, 189, 249, 306, 467, 471 y 476 (éstas cuatro últimas normas en cuanto respaldan los derechos consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo), del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del

Decreto 2351 de 1965, 1 de la Ley 52 de 1975, 1 del Decreto Reglamentario 116 de 1976, en relación con los artículos 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 28, 55, 57-4, 59-9 y 340 del mismo estatuto laboral; 66, 1494, 1502, 1519, 1523, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil; 4, 252, del Código de Procedimiento Civil; Convenios 87 y 98 de la OIT, adoptados mediante leyes 26 y 27 de 1976; 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 39, 53, 55, 93 y 228 de la Constitución Política.

Para su demostración transcribe el artículo 54 A del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, e insiste que parte de la base que existe la Convención Colectiva de Trabajo y su constancia de depósito (Folios 439), pero el Tribunal considera que carece de validez, sin embargo, contrario a la manifestado, la norma procesal transcrita reputa auténtica la reproducción simple de una convención colectiva de trabajo, con lo cual, se presume que existe certeza de su existencia, de su validez y de su eficacia.

Al haber manifestado el Tribunal que la Convención carece de validez, que de ella no se deriva ningún derecho, desconoció el texto de la norma transcrita que consagra la presunción de autenticidad, es decir, que existe certeza de que fue creada por las partes en litigio y de su contenido, en otras palabras que tiene eficacia para predicarse de ella su existencia legal y la derivación de los derechos reclamados por el actor.

Desconoció entonces el Tribunal, la existencia de una presunción legal *iuris tantum*, la cual, por haber sido obviamente reconocida y consagrada por la ley positiva produce el importante efecto jurídico de relevar de la carga de la prueba a quien la alega a su favor.

Ahora bien, no es cierto como lo afirma el Tribunal que la Convención Colectiva de Trabajo, de conformidad con el artículo 469 del Código Sustantivo de trabajo, al ser deficientemente acreditada, no puede predicarse de ella su existencia legal, y por ende derivar cualquier tipo de derecho.

No es cierto, porque por una parte, el artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral, norma posterior al artículo 469 *ibidem*, violado directamente, ha establecido una presunción legal de autenticidad de las reproducciones simples de una Convención Colectiva, con lo cual, quedó establecido con tal excepción de prueba (presunción) que existe certeza de quienes son sus autores, firmantes, contenido de ella, y por lo mismo, de su validez y eficacia; y por otra parte, que mal pudo el Tribunal exigir una copia auténtica de la convención cuando la ley presume la autenticidad de las copias simples de ellas, máxime cuando de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad, y convenios de la OIT, prima el imperio de la ley antes que una norma legal

como el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, pues es sabido que Colombia como parte integrante de la OIT, y obligada a respetar los convenios y tratados internacionales en virtud del principio del pacta sunt servanda, ratificó el Convenio 98 de la OIT, sobre negociación colectiva, cuyo objeto es la protección del derecho a la negociación voluntaria entre empleados y empleadores, que le impide válidamente adoptar mediante leyes internas disposiciones que tiendan a entorpecer no sólo el libre ejercicio de la libertad sindical en su triple aspecto de derecho a la asociación, negociación – contratación y huelga sino también, mediante sus agentes obstaculizar el libre y fácil ejercicio, garantía, aplicación y disfrute del resultado de la negociación colectiva, mediante la utilización de normas como la indebidamente aplicada.

Así las cosas, jamás podía el tribunal, por impedírselo los artículos 4 de la Constitución y 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aplicar el susodicho artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo, exigiendo prueba de solemnidades y requisitos ad substantiam actus con el aporte de copia autenticada de la convención colectiva y su constancia de depósito, para su validez y eficacia con el fin de poder disfrutar el actor de sus beneficios, pues la norma procesal ya estableció una presunción de autenticidad de las copias simples, y porque además, no podía olvidar que la Constitución de la OIT en su preámbulo, estableció como uno de los

propósitos de la Organización la de luchar contra la injusticia social, proponiendo mejorar las condiciones de los trabajadores.

SEGUNDO CARGO

Acusa el fallo de violación indirecta de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia directa con los artículos 65 (anterior), 127, 141, 186, 189, 249, 306, 461, 471 y 476 (los tres últimos en cuanto respaldan los derechos consagrados en la convención colectiva de trabajo), del Código Sustantivo del Trabajo; 31 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 1° de la Ley 52 de 1975; 1 del Decreto 116 de 1976, en relación con los artículos 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 28, 55, 57-4, 59-9 y 340 del mismo estatuto laboral, 54A, 660 (Sic) y 61 del Código Procesal del Trabajo; 66, 1494, 1502, 1519, 1523, 1740, 1745 y 1146 del Código Civil; 4 y 252 del Código de Procedimiento Civil; Convenios 87 y 98 de la OIT; 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 39, 53, 54 93 y 228 de la Constitución Política, debido a los siguientes manifiestos errores de derecho:

"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que la Convención Colectiva de Trabajo vigente en que funda sus pretensiones el actor está deficientemente acreditada, no derivándose de ella ningún derecho.

"b No dar por demostrado, estándolo, que sí está acreditada la constancia de depósito oportuno de la Convención Colectiva del Trabajo ante el Ministerio de la Protección Social, como autoridad del trabajo correspondiente.

"c) No dar por probado, estándolo, la validez de la Convención Colectiva del Trabajo.

"d) Dar por demostrado, sin estarlo, que a pesar de haber regido una Convención Colectiva de Trabajo entre OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC., y sus Trabajadores, las Empresas Contratistas y Subcontratistas, ella carece de validez y de existencia legal, no derivando derecho alguno.

"e) No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo firmada entre OCCIDENTAL INC., y EL SINDICATO USO, aportada al proceso, se presume auténtica, y por ello existe legalmente, derivando derechos para el actor.

"f) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada nunca cuestionó ni debatió la condición de validez, existencia y eficacia de la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre OCCIDENTAL INC., y EL SINDICATO USO, todo lo contrario, los aceptó.

"g) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante laboró para una empresa contratista directa de OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC., era un trabajador de rol diario, con derecho a la remuneración y beneficios laborales establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la Occidental de Colombia INC., y el sindicato de la USO.

"h) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada INTEGRAL DE SERVICIOS, no le pagó al actor a la terminación del contrato de trabajo de manera completa el valor de sus salarios y prestaciones legales a que tiene derecho, conforme a la Convención Colectiva.

"i) No dar por demostrado, estándolo, que las sociedades demandadas por no haberle pagado al demandante a la terminación de su contrato de trabajo los valores correspondientes a sus salarios y prestaciones sociales, conforme a lo estipulado en la Convención Colectiva, incurrieron en mora por falta de pago.

"j) No dar por demostrado, estándolo que al no pagar la sociedad INTEGRAL DE SERVICIOS, al demandante sus derechos laborales y prestaciones EN LA FORMA DEBIDA establecida en la Convención Colectiva, la sociedad beneficiaria del contrato, OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC., es solidariamente responsable con aquella de los pagos."

Manifiesta que estos yerros los cometió el Tribunal por dejar de apreciar, siendo del caso hacerlo, la prueba solemne del depósito de la convención colectiva de trabajo firmada entre OCCIDENTAL y la USO, visible a folio 439, donde estas partes negociadoras entregaron al Ministerio del Trabajo una copia de aquella para su depósito, dejando constancia de su recibo, con lo cual queda por demostrado que la solemnidad del depósito fue satisfecha, ya que de lo contrario, las demandadas no lo hubiesen aceptado al contestar la demanda.

Falta de estimación que en sentir de la censura, condujo a que tampoco se apreciara otra prueba solemne, como lo es la convención colectiva de trabajo visible a folios 440 a 553 del cuaderno principal.

La demostración del cargo la hace en los siguientes términos:

“Los errores de derecho que aparecen a prima facie consisten en lo siguiente:

“En que el fallo acusado habiendo observado la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época en que el actor laboró para las demandadas, consideró no apreciarla al afirmar que fue deficientemente acreditado y que de ello, no podía derivarse la existencia de los derechos pretendidos por el actor, por abstenerse de apreciar a su vez la constancia de depósito que daba fe de haberse cumplido con esta solemnidad ante el Ministerio, lo cual condujo al Tribunal a relevarse de abordar el estudio de los cargos formulados en apelación.

“Por estos errores de derecho se le causó un agravio al actor, al no reconocerse a su favor y condenarse a las sociedades demandadas, al pago de los valores correspondientes a todos sus emolumentos salariales y prestacionales derivados de la Convención Colectiva, así como la indemnización por mora en el pago de éstos emolumentos.

"El Ad quem, además, dejó de apreciar tales medios probatorios indicados, limitándose solo a manifestar que no estaba acreditada en legal forma la Convención Colectiva en el expediente, porque en su concepto no estaba acreditada la constancia de su depósito, cuando, contrario o lo afirmado, a folio 439 existe a constancia del recibo por el mismo Ministerio del Trabajo."

Agrega que de "haberse apreciado tal escrito, el Tribunal hubiese valorado acertadamente la Convención Colectiva de Trabajo, dándole la eficacia y validez que la misma contraparte aceptó con la contestación de la demanda, de tal manera que si así se hubiese hecho, siendo el caso de hacerlo, habría revocado la sentencia de primera instancia, accediendo las pretensiones incoadas por el actor por pertenecer al grupo cinco de trabajadores escalafonados de conformidad con su artículo 103.

"Al abstenerse de valorar la prueba documental indicada, se cometió un evidente error de derecho que condujo al desconocimiento al actor de sus derechos laborales reclamados."

En respaldo de sus afirmaciones cita apartes de las sentencias de 4 de junio de 1998, radicación 10658 y de 12 de agosto de 1997, radicación No. 9872, haciendo énfasis en que las demandadas nunca cuestionaron la validez de la convención colectiva de trabajo, razón por la cual este tema había quedado por fuera de controversia.

LA RÉPLICA

La empresa Integral de Servicios Técnicos Ltda. se opone a la prosperidad de todos los cargos, pues aduce que la convención colectiva de trabajo allegada al proceso por el demandante y que es materia de cuestionamiento, fue aportada al proceso en forma

irregular, puesto que a pesar de que había solicitado al juzgado que se oficiara al Ministerio de Trabajo División de Asuntos Colectivos, para que se allegara copia de la convención de marras, no esperó a que esa dependencia la remitiera sino que sorpresivamente en la audiencia de 17 de noviembre de 2004 solicitó al juez a quo se decretara una prueba no solicitada en la demanda, como era el traslado al proceso de copias de dos convenciones colectivas de trabajo de otro proceso.

Occidental de Colombia INC., le critica al cargo haber confundido el error de hecho con el de derecho.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La razón no acompaña a las sociedades replicantes en los reproches que hacen al cargo, puesto que la irregularidad respecto de la oportunidad procesal para la aportación de las convenciones colectivas, debió plantearse en las respectivas instancias y no ahora en casación.

Cuanto al reparo que se hace en relación con la supuesta confusión entre los errores de hecho y derecho en la que incurrió la censura, es preciso anotar que conforme al inciso final del numeral 1 del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el error de derecho se presenta *“cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no*

*autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también **cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso hacerlo.*** (Resaltado fuera de su texto original).

Como quiera que el Tribunal se refirió en concreto a la falta de acreditación del depósito de la convención colectiva de trabajo, por no contar con las solemnidades para su validez, omisión sobre la que se despacha la censura para formular los yerros aludidos, es razón por el cual la Corte estima que los referidos reproches no pueden ser de recibo.

El problema jurídico a resolver es el relacionado con la autenticidad del convenio colectivo y su depósito. En relación con ese tema, la jurisprudencia de esta Corte y la misma ley, han dispuesto que no es necesario allegar la copia auténtica de aquel medio probatorio, sino que tiene plena validez una copia simple, tal y como lo establece el artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por el 24 de la Ley 712 de 2001, que, como lo pone de presente el cargo, en lo pertinente, señala que se reputarán auténticas las reproducciones simples de las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos, reglamentos de trabajo y estatutos sindicales.

Más aún, con antelación a esta norma, la Ley 446 de 1998 previó el valor probatorio de las reproducciones no auténticas de documentos allegados a un proceso y al respecto esta Corte en sentencia 16505 de 25 de octubre de 2001 dijo:

"...esta innovación legislativa no solo reformó el citado artículo 279 del CPC, sino que también lo hizo respecto del 254 Ibídem, pues le dio pleno valor a las copias, porque debe entenderse que un documento privado desprovisto de autenticación y de presentación personal, puede estar contenido en una copia o en una fotocopia simple.

"En ese orden, se impone afirmar que no hay razón para que dicho criterio no se le aplique a la convención colectiva de trabajo, si se aporta a un proceso en copia o fotocopia simple, con la aspiración de servir de prueba, siempre y cuando, obviamente, contenga la constancia o el sello de haberse depositado en el Ministerio de Trabajo dentro del término de los 15 días siguientes a su firma, previsto en el artículo 469 del CST.

"De esta suerte, en obediencia a lo consagrado actualmente por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, si la convención colectiva agregada en copia o fotocopia simple contiene el sello que da fe del depósito oportuno o una certificación en tal sentido, tiene pleno valor probatorio lo contenido en ella. De la misma manera se tendrán por cumplidos los ritos de solemnidad a saber: que se celebró por escrito, que se extendió en un número de ejemplares igual al de las partes y que una copia más

se depositó dentro del termino legal en la oficina del Ministerio de Trabajo..."

El Tribunal se abstuvo de apreciar las convenciones colectivas de trabajo que reposan a folios 439 a 553, por considerar que fueron deficientemente acreditadas por no haber sido allegadas en ejemplares auténticos, expedidos por el depositario de las mismas y con la constancia de que dicha formalidad (el depósito) se efectuó en forma oportuna ante la autoridad administrativa del trabajo; solemnidades que, dijo, eran necesarias para predicar su existencia legal y, por ende, derivar cualquier tipo de derecho, sin que pueda ser sustituida por otra por expresa prohibición del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Folio 28 del cuaderno de segunda instancia).

Concluyó, por consiguiente, que el caso de autos se encuentra acéfalo del elemento probatorio indispensable, el cual se constituye en el requisito *sine qua non* para abordar el análisis de fondo, por ser punto de partida sobre el cual gira el *petitum* introductorio (Folio 31 ibídem), es decir, dejó de apreciar las convenciones colectivas de trabajo por considerar que carecían de autenticidad y de la constancia de su depósito.

Examinadas las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre la Occidental de Colombia Inc. y su sindicato, con vigencia para los años 1998-2000 una y, 2000-2002 la otra, obrantes a folios 438 a 546, encuentra

la Sala que no obstante haber sido arrimadas al proceso en fotocopia simple, conforme al artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social reúnen las exigencias legales para su validez, puesto que las reproducciones simples de esta clase de documentos se reputan auténticas.

De manera que incurrió el Tribunal en un error jurídico cuando les restó validez a esos acuerdos colectivos por estimar que no eran auténticos, y equivocadamente adujo que el caso de autos se encontraba sin el elemento probatorio que sirviera de herramienta para el estudio a fondo de las pretensiones del actor.] Por esa razón, incurrió en el quebranto normativo que se le imputa en el primer cargo.

Pero también incurrió en un yerro apreciativo por asegurar que dichos acuerdos carecían de constancia de depósito ante la autoridad administrativa del trabajo, por cuanto [a folio 439 reposa oficio suscrito por los representantes legales de la Occidental de Colombia Inc. y del Sindicato Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, Subdirectiva Arauca, recibido por la Dirección Regional Bogotá Cundinamarca del Ministerio de Trabajo el 3 de noviembre de 1998, mediante el cual hacen entrega formal del acuerdo colectivo celebrado entra las mismas partes el 30 de octubre de 1998, texto rubricado por éstas en cada una

de las páginas, con la fecha antes anotada y el sello de recibo de la entidad administrativa mencionada.

Lo anterior significa que la convención colectiva de trabajo celebrada el 30 de octubre de 1998 y con vigencia para los años 1998 a 2000, sí fue entregada al Ministerio de Trabajo para su depósito dentro de los quince (15) días siguientes a su firma.

Igual situación se dio respecto de la convención colectiva de trabajo vigente durante los años 2000 - 2002 obrante a folios 496 a 546, pues según el oficio de folio 496, el 8 de febrero de 2001 las partes contratantes hicieron entrega formal del acuerdo colectivo firmado el 7 de febrero de 2001, a la Dirección Regional Bogotá Cundinamarca del Ministerio mencionado, y como la anterior, ésta también se encuentra rubricada en cada una de sus páginas, con la fecha indicada y con el sello de depósito de esa misma data (Folio 546).

Sobre el particular, esta Sala de la Corte en sentencia de 13 de marzo de 2007, dijo:

"El problema jurídico a resolver es si el depósito de un ejemplar de la convención colectiva de trabajo ante el Ministerio de la Protección Social, dentro de los 15 días siguientes a su firma, como requisito de validez del convenio colectivo, fue suprimido o modificado por el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

"Para la Sala el recurrente asimila dos conceptos diferentes relacionados con la connotación probatoria de la

convención colectiva de trabajo, como lo son (i) la validez y eficacia del convenio y (ii) la autenticación del texto.

“El artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo señala la forma como debe celebrarse la convención colectiva para que produzca efectos, esto es, por escrito, en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se depositara a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su firma, ante el Ministerio de la Protección Social, requisito que se debe acreditar en procesos laborales en los que se pretenda el cumplimiento de obligaciones convencionales.

“Por su parte, el artículo 54 A del CPTSS tiene por auténtica la reproducción simple de la convención colectiva de trabajo y de la constancia o certificación que haga parte o deba anexarse a dicho documento, de suerte que el legislador, al eliminar el requisito de la autenticidad, tanto para el texto del acuerdo como para su constancia, mantuvo las exigencias de validez y eficacia, específicamente la relacionada con el depósito oportuno.”

Demuestra en consecuencia la acusación que el juzgador de segundo grado se equivocó al restarle eficacia a las convenciones colectivas aportadas al proceso puesto que cumplen con la exigencia de su depósito oportuno, conforme lo requiere el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo. Por cuanto los cargos son fundados, se torna inane el estudio del otro, en cuanto persigue el mismo fin, es decir, demostrar que el Tribunal se equivocó por no darle validez a las convenciones colectivas de marras, en razón de que, como quedó visto, sí reunían los requisitos para su validez.

Sin embargo, y a pesar de que los cargos son fundados, no prosperan por cuanto la Corte, fungiendo como Tribunal de instancia, llegaría a la misma decisión del Ad quem, por las siguientes razones:

Es pertinente recordar que el actor solicita que previamente a la declaratoria de que en virtud de varios contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año prestó servicios personales a la empresa Integral de Servicios Técnicos Ltda. entre el 1 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 2002, se condene solidariamente a las empresas demandadas, conforme al artículo 1 de la convención colectiva de trabajo, en armonía con el capítulo XVI de la misma, por los siguientes conceptos: ajustes salariales, prestaciones, pagos convencionales, sobrecostos convencionales y por aportes, retroactivos e indemnizaciones consagrados en las diferentes convenciones colectivas de trabajo celebradas entre la Occidental y su sindicato y la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respaldó sus pretensiones en la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa Occidental de Colombia S.A. y el sindicato Unión Sindical Obrera USO, vigente para los años 1996-1998; 1998-2000 y 2000-2002.

Fundamentó esas súplicas afirmando que a pesar de trabajar para la mencionada empresa, Integral

de Servicios Ltda., *“no le canceló las horas extras laboradas, los días dominicales y festivos laborados convencionalmente, como tampoco se le realizó la liquidación final conforme a la Convención que rige para la Occidental de Colombia Inc., empresas contratistas y subcontratistas de ésta, no se le canceló el retroactivo del 01 de septiembre de 2000 al 28 de febrero de 2001, las primas de convención, prima de antigüedad, ni el disfrute en tiempo de las vacaciones, por lo tanto deducido lo pagado se le adeuda así,...”*

A continuación cuantificó las condenas por los mencionados conceptos, arrojándole un total de \$117'785.674,00, señalando el valor del salario, prima, dominicales, festivos, hora ordinaria, diurna, nocturna, festiva y recargo nocturno de los períodos 1998-2000 y 2000-2002 (Folios 5 a 7 del cuaderno principal).

Conforme a lo anterior, se precisa determinar en primer término, si en verdad los beneficios convencionales establecidos se extienden a los trabajadores de las empresas contratistas de la Occidental de Colombia Inc., calidad que tiene la otra sociedad demandada conforme se desprende de la confesión de los apoderados de ambas empresas cuando dieron contestación a la demanda (Folios 222 a 232 y 248 a 257), lo mismo que de los contratos celebrados entre aquéllas, obrantes a folios 257 a 327.

Desde ya advierte la Sala que las pretensiones que tienen fundamento en la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1998 se desestimarían, pues el texto de la convención de marras brilla por su ausencia en el infolio.

Entre tanto, los artículos 1 de las convenciones colectivas vigentes para los años 1998 - 2000 y 2000 - 2002 (Folios 440 y 497), establecen:

"APLICACIÓN DE LA CONVENCION. Esta Convención de Trabajo se celebra entre Occidental de Colombia Inc., y el Sindicato Unión Obrera de la Industria del Petróleo USO, con Personería Jurídica No. 0005272 de octubre 22 de 1993, Subdirectiva Arauca, en representación de los trabajadores de rol diario que laboran para ésta, ya sea directamente o por medio de empresas contratistas o subcontratistas que ejecuten trabajo para la empresa en las dependencias que ésta tenga o tuviere en el país.

"Las disposiciones de la presente Convención Colectiva serán aplicadas a todos los trabajadores de rol diario al servicio de la Occidental de Colombia, Inc. y al personal de rol diario contratista y subcontratista de la misma.

"Occidental de Colombia, Inc., se obliga a imponerle a todas las empresas contratistas y subcontratistas el cumplimiento de las disposiciones pactadas en el Capítulo XVI de la presente Convención Colectiva..."

Del texto convencional anterior es claro que sus beneficios se extienden a los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas de la Occidental de Colombia Inc., siempre que sean *"trabajadores de rol diario."*

De manera que, correspondía al actor, en calidad de asalariado de la empresa contratista, demostrar que era beneficiario de las prerrogativas convencionales reclamadas.

Sobre el particular, esto es, respecto de la condición de beneficiario de la convención que aduce el promotor del pleito, y no obstante que la Occidental de Colombia Inc. en la contestación de la demanda manifestó que el cargo del actor no era de rol diario, puesto que se trataba de uno catalogado como de dirección, confianza y manejo (Folio 249), aquella característica sí se infiere de la respuesta que al libelo genitor dio la empresa para la cual prestó servicios el demandante (Integral de Servicios Técnicos Ltda.), cuando admitió que éste sí era beneficiario de algunas de las disposiciones del capítulo XVI de tales convenciones colectivas de trabajo (Folio 223), lo que se corrobora con el contrato de trabajo que corre a folio 194 y vuelto, lo mismo que con la liquidación de prestaciones sociales vista a folio 185, documentos en los que aparece el reconocimiento de un derecho convencional denominado *"prima campamentos"*.

Demostrada así la calidad de beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo del accionante, estima la Sala oportuno anotar que de conformidad con el artículo 1 convencional transcrito, por ser el demandante trabajador de una empresa contratista de la Occidental, se le aplican las cláusulas que integran el Capítulo XVI de las convenciones colectivas de trabajo, que corresponde a los artículos 79 a 104 de las mismas.

Entre los derechos que figuran en estas disposiciones convencionales, y en relación con los reclamados por el actor, únicamente se encuentran los siguientes: primas, vacaciones, dominical, horas extras, recargo por trabajo en días festivos y salario.

Cuanto a la que denomina el demandante como "*prima de convención*", es preciso anotar que este concepto no hace parte del Capítulo XVI al que se ha hecho referencia, al paso que entre los pagos convencionales que reclama el actor y que hacen parte de este capítulo se hallan los de las primas legales proporcionales al igual que las vacaciones proporcionales (compensación), que se acreditan con las liquidaciones de prestaciones sociales que obran a folios 185, 187, 189 a 193.

En relación con la denominada "*prima compensatoria en campos petrolíferos*" y en "*campos no*

petrolíferos", para la Sala es claro que conforme al texto de los artículo 101 y 102 de la convención colectiva de trabajo citada, tales primas se refieren a la *"prima de campamento"*, cuyos pagos periódicos se demuestran con la prueba documental de folios 20 a 158 de cuaderno principal y con la liquidación de prestaciones sociales de folio 185.

En cuanto a las horas extras, dominicales y festivos supuestamente laborados y no pagados, en primer lugar debe decirse que la parte accionante no indicó en su demanda las fechas en que presuntamente trabajó tiempo suplementario y en días de descanso obligatorio, omisión que impide al operador judicial el estudio de esta pretensión, pues a éste no le es dado suponer tales fechas.

Sin embargo, y de conformidad con la prueba documental que corre a folios 19 a 184, se colige que durante la permanencia del actor en la empresa, periódicamente trabajó horas extras diurnas, nocturnas; extras festivas diurnas y nocturnas, pero esos medios de prueba también registran el pago de tales conceptos.

En lo que toca con los *"ajustes salariales, prestaciones, pagos convencionales, sobre costos convencionales y por aportes, retroactivos e indemnizaciones consagrados en las diferentes convenciones colectivas de trabajo"*, al igual que la

demanda sobre horas extras, corresponde advertir que también son pretensiones genéricas, las cuales, así planteadas no permiten un pronunciamiento de fondo, porque al respecto hay que dejar sentado que no están apoyadas en hechos que hayan sido fijados con total y absoluta claridad en el libelo inicial, por lo tanto, no hay lugar a estimar fundada una pretensión que no encuentra respaldo en los hechos que conforman la causa *petendi* inicial.

Ni aún haciendo un esfuerzo interpretativo de la demanda es posible acceder a estas pretensiones, en tanto no se informa la razón del ajuste salarial demandado, cuál o cuáles prestaciones se reclaman, a cuáles pagos convencionales se refiere, ni mucho menos a qué sobrecostos convencionales se alude, a qué clase de aportes, como tampoco qué tipo de indemnización se demanda.

Igual situación puede predicarse respecto de la afirmación que hace el actor en el capítulo de los hechos de su demanda, según el cual *“tampoco se le realizó la liquidación final conforme a la Convención que rige para la Occidental de Colombia Inc., empresas contratistas y subcontratistas de ésta”,* ni que *“no se le canceló el retroactivo del 01 de septiembre de 2000 al 28 de febrero de 2001...”*, pues no se requiere de mayor esfuerzo para concluir que estas aseveraciones carecen de soporte en tanto no informa el demandante la razón de

su decir, esto es, por qué considera que la liquidación final de prestaciones sociales no se hizo conforme a la convención colectiva de trabajo, ni a qué obedece el retroactivo reclamado.

Por último, y en relación con la prima de antigüedad, baste decir que este concepto tampoco hace parte del prenombrado Capítulo XVI convencional al que tanto se ha hecho alusión.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

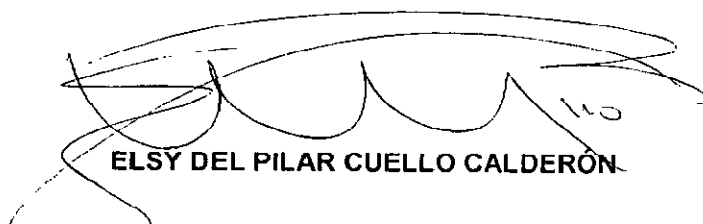
Sin costas en casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca el 30 de noviembre de 2005, en el proceso ordinario laboral seguido por **HOLMER YESID VÉLEZ TINEO** en contra de **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.** y **OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.**, al cual fueron llamadas en garantía la **PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** y **COLSEGUROS**.

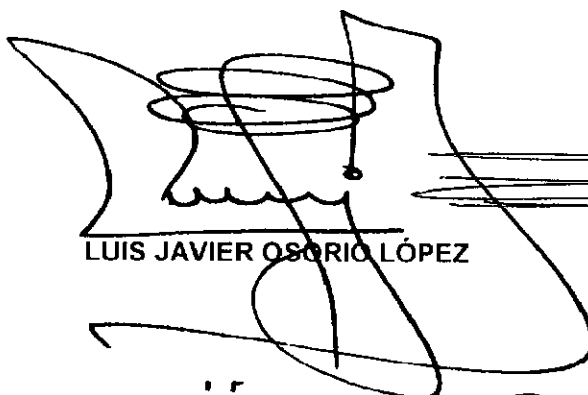
Sin costas en casación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

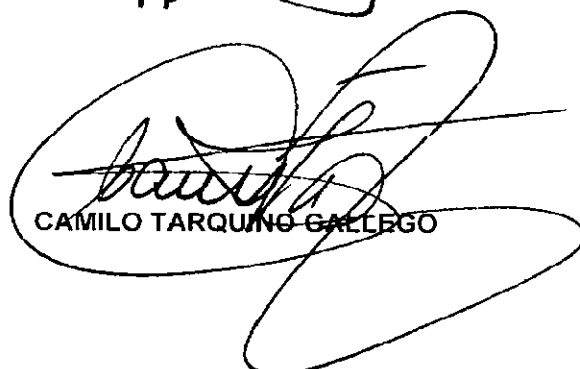

GUSTAVO JOSÉ GNECCO-MENDOZA

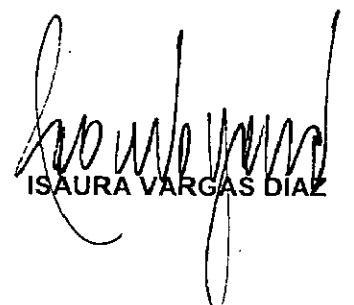

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN


EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS



LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ


CAMILO TARQUINO GÁLLEGO

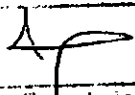

ISAURA VARGAS DÍAZ

SECRETARIA SALA DE CASACION LABORAL




MARÍA ISMENA GARCÍA MENDOZA
Secretaria

Se deja constancia que en la fecha se fijó edicto
17 JUN. 2008
Bogotá, D.C.


Secretario

SECRETARIA SALA DE CASACION LABORAL



Se deja constancia que en la fecha y hora señaladas, quedó ejecutoriada la presente providencia
24 JUN. 2008 Hora: 5 pm
Bogotá, D.C.

27



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL20037-2017

Radicación n.º 48833

Acta 44

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la **EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS – ECOPETROL S.A.-** contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 30 de agosto de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que en su contra promueve **ÁLVARO GÓMEZ LIZARAZO**.

Acéptese el impedimento manifestado por el Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, en consecuencia, declárase separado del conocimiento de la presente decisión.

Téngase a la doctora Claudia Janeth Wilches Rojas como apoderada general de la recurrente, en los términos del certificado de existencia y representación incorporado al cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Gómez Lizarazo, fundado en que el contrato de trabajo acordado con la demandada fue terminado de manera unilateral e injusta por parte de aquella y, en que debido a la necesidad de atender las obligaciones familiares y personales se acogió a una pensión disminuida, buscó la declaratoria de ineficacia de la conciliación que suscribió ante el Ministerio de la Protección Social, seccional Barrancabermeja, y como consecuencia de ella solicitó se le ordene a ECOPETROL S.A. reintegrarlo al mismo o similar cargo al que desempeñaba, a cancelar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido injusto hasta cuando opere la medida deprecada, descontando lo pagado por pensión proporcional de jubilación; y subsidiariamente pretendió el pago de la indemnización por la desvinculación injusta hasta cuando cumpla 65 años de edad, o en su defecto, los salarios y prestaciones hasta cuando cumpla la edad para pensión plena; en subsidio de ésta última, el pago de la indemnización legal, los perjuicios morales y materiales que estima en 500 salarios mínimos legales; la pensión de jubilación en cuantía de \$1.935.569 con los respectivos ajustes, \$875.901 por concepto de prima de vacaciones, la reliquidación de las prestaciones sociales de los 3 últimos años, de acuerdo a los parámetros convencionales; \$373.666 por concepto de prima de servicio del último año, \$14.331.678 por cesantías, \$209.930 por prima quinquenal, \$1.215.900 por concepto del artículo 121 de la Convención Colectiva; así mismo pidió se le hagan los reajustes salariales para los años 2003 y 2004 y se le paguen las diferencias entre

lo que se le reconoció y lo que ha debido cancelarse por concepto de prima convencional, al igual que la incidencia de salario en especie y prima de antigüedad; la indemnización moratoria y las costas procesales.

De la confusa demanda en donde, como lo advierte la pasiva, se mezclan hechos con pretensiones y argumentaciones jurídicas, se extrae que el actor para dar respaldo a sus peticiones se basó en que prestó servicios a la demandada del 10 de agosto de 1987 al 4 de mayo de 2004, en el municipio de Yondó, y fue despedido sin ser escuchado en descargos ni bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.

Comentó que la huelga es un derecho universal y que participó en la surtida en 2002, que fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo desconociendo el bloque de constitucionalidad.

Detalló que, aun cuando existe la citación del 30 de abril de 2004, viernes, a rendir descargos el lunes 3 de mayo siguiente, no hay prueba de que esa comunicación se le hiciere llegar, razón por la que no concurrió a la correspondiente diligencia; que así las cosas el despido se tornó violatorio del debido proceso.

Añadió que el Tribunal ad – hoc, integrado para revisar los 248 despidos originados por la participación en el cese de actividades mencionado, con base en el acta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y Ecopetrol – USO, de 26 de mayo de

2004, ordenó el reintegro de dichos trabajadores, pero lo excluyó a él por tener puntaje para pensión.

Admitió haber firmado un acta de conciliación, en la que se pactó reconocerle pensión proporcional, pero advirtió que en la misma se dijo que las sumas de dinero allí recibidas no cubrirían derechos ciertos e indiscutibles.

Destacó que de acuerdo a la convención colectiva se le suministraba carne, elemento que constituye salario en especie, aunque la empresa no le reconoció tal connotación; y que además, no le pagó el retroactivo salarial pactado en el Laudo Arbitral a partir del 9 de diciembre de 2003, por lo que tiene derecho a que se le reliquiden todas las prestaciones e indemnizaciones que se le cancelaron (folios 1 - 33).

ECOPETROL al responder el libelo aceptó la existencia del vínculo laboral dentro de los extremos temporales en él referidos y el despido por la participación del demandante en una huelga declarada ilegal; los demás los negó o destacó que se trataba de fundamentaciones jurídicas. Resaltó que el suministro de carne no es salario, dijo haber cancelado todas las acreencias reclamadas según las directrices de la convención colectiva, y haber conciliado la pensión proporcional que otorgó al actor. Por lo anterior se opuso al éxito de las pretensiones y propuso como medios exceptivos la buena fe, pago, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir y prescripción (folios 166 y 177).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berrio con sentencia de 24 de junio de 2010, condenó a la demandada a pagar \$1.525.077 como mesada inicial desde el 5 de mayo de 2004, \$453,00 por prima de vacaciones, \$98.746 por prima quinquenal, \$159.542 por prima de servicios, \$102.881 por prima convencional, \$11.341.540 por reajuste de cesantía y \$14.616.986 por reajuste de pensión; dispuso que las anteriores sumas se indexaran, absolvió de las demás pretensiones; declaró próspera la excepción de cosa juzgada e impuso las costas a la pasiva (folios 477 y 505).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver la apelación interpuesta por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, con sentencia de 30 de agosto de 2010, confirmó la de primer grado.

Valga la pena anotar que aun cuando el actor a folio 519 y siguientes presentó escrito con el que pudiera entenderse que instauró recurso de alzada, el mismo corresponde a un alegato anterior a la expedición del fallo de primer grado, en la medida que tiene sello de presentación personal del 18 de junio de 2010, aunque aparezca en foliatura posterior a la providencia, por lo que acertadamente el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el particular, muy a pesar de que el juez equivocadamente hubiere concedido el recurso a ambas partes.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el sentenciador de segundo grado para definir si el suministro de carne constituía salario, se remitió a la sentencia de esa misma corporación fechada el 27 de mayo de 2008, de la que dijo reproducir un fragmento y agregó:

Más allá de lo expuesto, la filosofía del salario en especie no es otra diferente a la de ayudar al trabajador a que su remuneración dineraria sea suficiente para cubrir los gastos básicos para su manutención y la de su familia, y esta prestación otorgada al actor cumple ese objetivo.

*Teniendo en cuenta lo expuesto en múltiples ocasiones por esa Corporación, el **producto carne**, como atinadamente lo dijo el A quo, al no haberse pactado expresamente como no constitutivo de factor salarial, se debe entender como tal.*

Según consta en el plenario, específicamente la certificación que milita a folio(s) 83, se tiene que el demandante recibió salario en especie representado en el suministro de carne, durante el último año de servicios, comprendido entre el mes de abril del año 2003 al mismo mes del año 2004 por total de 672 libras de carne a razón de \$3.800,00 cada libra, como consta a folio (s) 342, lo cual efectivamente establece un total de \$2.553.600,00 para una incidencia mensual de \$212.800, tenido en cuenta por la juzgadora de primer grado para efectos de realizar las respectivas liquidaciones, sin que tal valor, dicho sea de paso (,) sea punto de apelación, puesto que la inconformidad del recurrente radica en la concesión del salario en especie como concepto constitutivo de salario y no sobre el valor y cálculos del mismo efectuados por el A quo.

No son necesarias más elucubraciones para concluir que resulta acertado el razonamiento que hizo el A quo acerca de la periodicidad y contenido de este suministro para determinar que lo recibido por concepto de carne constituía salario, con todas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan...” (Las negrillas son del texto).

Respecto de la pensión de jubilación, el Tribunal destacó la impropiedad de la entidad apelante al referir que el actor había laborado 20 años, 6 meses y 23 días, y que por tanto, siguiendo lo dispuesto en el artículo 109 de la Convención Colectiva, el monto de la misma sería del 75%,

pues de la demanda y lo señalado por el juez, el tiempo de vinculación fue de 19 años, 8 meses y 11 días, de tal manera que la prestación debía liquidarse con el 67.5% de los salarios devengados en el último año de servicio, como lo había precisado el inferior, y no como equivocadamente lo proponía el apoderado sustituto que representaba a la empresa.

Así mismo indicó que el recurrente oportunamente no había criticado la validez de la conciliación, ya que dichos reparos los había formulado en los alegatos presentados ante esa colegiatura, por lo que se abstendría de pronunciarse sobre el particular.

En torno al auxilio de cesantía, encontró que los factores y operaciones realizadas por el juez se ajustaban a derecho, pues *«a la liquidación efectuada por la empresa debe sumársele el salario en especie por carne durante sus últimos tres meses de servicios»*; agregó que Ecopetrol no explicaba el verdadero motivo de su inconformidad y que por ello debía confirmar la decisión del juzgado.

Finalmente, sobre la indexación, dijo que ésta no opera como una sanción cuando hay tardanza en la solución de un crédito laboral, sino que se trata simplemente de un *«elemento de actualización por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda»*.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que pasa a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pide que la Corte case la sentencia del Tribunal *«en cuanto confirmó las condenas impuestas en los numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Noveno»*, de la providencia del juez, y en sede de instancia, revoque esos numerales y en su lugar la absuelva de las pretensiones.

Con fundamento en la causal primera, formula dos cargos que no tuvieron réplica y que se procede a resolverlos.

VI. CARGO PRIMERO

Denuncia la violación indirecta, debido a la aplicación indebida del artículo 469 del C.S.T, en relación con los artículos 467, 470 y 471 de la misma normativa, 51, 60 y 61 del C.P.T y S.S, 174, 175, 177 y 187 del C.P.C y 1757 del C.C.

Afirma que el Tribunal cometió el error de derecho consistente en haberle dado eficacia a la Convención Colectiva vigente entre 2001 y 2002, a pesar de no contar con la constancia de depósito ante el Ministerio de la Protección

Social, lo cual condujo al sentenciador a sacar conclusiones contrarias a la realidad probatoria.

Para dar sustento a la acusación, el censor asegura que el artículo 469 del C.S.T impone la necesidad de depósito del texto extra legal, como requisito de solemnidad, que no se puede dispensar, así militen en el proceso dos ejemplares; afirma que esa omisión trae como consecuencia que la convención no produzca efectos y por tanto *«no se pueden determinar condenas como la del suministro de alimento carne...y otros beneficios de carácter extralegal[...]»* Así entiende que se le dio validez a una prueba ineficaz, pues *«ni los tenues sellos, ni fecha oficial” solicitud de depósito” ante el Ministerio son claros y precisos»*, agrega que la convención que reposa a folio 343 hace referencia a una solicitud de depósito fechada el 27 de septiembre, es decir fuera del término legal, pues la firma data del 11 de junio de 2001, de donde infiere que *«además hay inconsistencias en las fechas, por lo tanto no puede producir efectos la prueba documental que sirvió de base para le decisión del Tribunal»*.

X. CONSIDERACIONES

Corresponde a quien pretende la casación de una sentencia, dada la doble presunción de acierto y legalidad que la acompaña, demostrarle a la Sala que la providencia transgredió la normativa prevista para dilucidar el conflicto, pues el recurso extraordinario consiste precisamente en un control de legalidad, que limita al censor, para lograr el éxito del recurso, a referirse a las argumentaciones y fundamentos

de la decisión atacada, dejando de lado inconformidades sobre aspectos no abordados por el sentenciador y mucho menos los soslayados en el devenir procesal, en la medida que no se trata de una tercera instancia.

Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 – 2014, SL4427 – 2014 y SL 930 – 2014, presupuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que el tema relativo a la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes.

Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685 *«al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia»*, la fuente normativa de la prestación.

De otra parte, con independencia de lo *tenue* que le pueda resultar a la censura el sello que se reporta a folio 343 del plenario en armonía con el que obra a folio 351, se infiere que la convención colectiva con vigencia 2001 – 2002 adosada, se suscribió el 11 de junio de 2001 y se depositó el 12 del mismo mes y año, y al día siguiente se allegaron sus anexos como se describe en la respectiva nota de la Dirección Regional Bogotá - Cundinamarca, es decir, dentro del término legal.

De tal suerte que no solamente porque en el acontecer litigioso ECOPETROL no puso en duda que al demandante se le aplicara la normativa en que aquel fundaba sus súplicas, al punto que al esgrimir la defensa adujo que la liquidación de las prestaciones se ajustaba a las directrices convencionales, sino también porque en el plenario obra la prueba que demuestra la satisfacción del requisito de solemnidad echado de menos, se concluye que el cargo carece de soporte y por ello se declarará infundado.

XI. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de ser violatoria, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468 y 469 del C.S.T, en relación con los artículos 127, 128, 249, 306 y 308 de la misma normativa, 1, 2, 25, 51,60, 61,78 y 145 del C.P.T, 174, 175, 187, 251 a 254, 258, 268, 269, 276 a 279 y 332 del C.P.C.

Considera que el Tribunal cometió los siguientes errores ostensibles:

1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que Ecopetrol S.A. suministro (sic) carne al demandante Álvaro Gómez Lizarazo a título gratuito.

2.- No dar por establecido, estando, que el suministro de carne se efectuó a título oneroso, dado que Ecopetrol continuará vendido en sus comisariatos los artículos que ha venido vendiendo, y en el caso de la carne se conservó el precio vigente a la fecha de firma de la Convención Colectiva.

3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el suministro de carne que entregó Ecopetrol S.A. al trabajador de conformidad con lo estipulado en el Artículo 57 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente 2001 – 2002 constituye salario en especie.

4.- No dar por establecido, estando, a pesar de ser evidente, que en el contrato de trabajo suscrito entre el trabajador demandante y Ecopetrol acordaron no darle carácter salarial a los beneficios en especie otorgados por el empleador para el desempeño de sus labores, en determinadas zonas, tales como alimentos y otros rubros.

5.- No dar por demostrado, sin estarlo (sic), que el suministro de carne de Ecopetrol S.A al trabajador demandante efectuado de conformidad al Artículo 57 de la Convención Colectiva de trabajo vigente para 2001 – 2002 constituye salario en especie y reliquidar por ello el auxilio de cesantía y la pensión de jubilación.

6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que para liquidar el salario base del auxilio de cesantía, se toman los factores integrantes por doceavas partes, cuando en realidad debe ser el promedio de los últimos 3 meses.

7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario base de liquidación para la pensión de jubilación es el mismo considerado para liquidar el auxilio de cesantía.

Indica que los anteriores desaciertos se originaron en la equivocada valoración de la demanda (folios 2 a 33), su respuesta (folios 166 a 177), el contrato de trabajo (folios 178 y 179), la Convención Colectiva de trabajo (folios 46 y 50), las liquidaciones de cesantías (folios 76 a 84), de la pensión de jubilación (folios 74 a 77) y del acta de conciliación (folios 62

a 65); así mismo porque se dejaron de apreciar el derecho de petición (folio 79) y el nombramiento del trabajador como supervisor encargado (folio 85).

Transcribe el texto que contiene el artículo 57 de la convención colectiva arrimada al plenario y, sostiene que el sentenciador se equivocó al dar por probado que el suministro de carne se hizo de manera gratuita, por cuanto del párrafo de dicha normativa, se extrae justamente lo contrario y, por ende, debió concluir que tal elemento se proveía a título de compraventa.

Precisa que, si se hubiera apreciado total y detalladamente el capítulo VII del acuerdo extra legal relativo al tema de «Comisariato y Casino», habría entendido que su objetivo era facilitar alimentos, para contribuir al desempeño de las labores encomendadas al trabajador, que corresponde a actividades desgastantes y riesgosas, pero en manera alguna enriquecer el patrimonio de aquel. Insiste en que, si el Tribunal hubiera analizado correctamente la convención, habría advertido que el artículo 59 expresamente consagraba que los subsidios otorgados al personal de turno, no tienen incidencia salarial, en la medida que se requería de la compra de tiquetera, como lo solicitó el actor en el derecho de petición que cursó.

Agrega que igualmente se valoró de manera errada el contrato de trabajo suscrito con el demandante, pues se enfocó en la cláusula novena, que no es norma general e indeterminada, como lo consideró el juzgador. Añade que por

tanto no era viable la inclusión del suministro de carne en la base para calcular la cesantía y pensión; considera que tal y como la empresa lo hizo, es correcto.

Destaca que el colectivo erró al hacer suyas las liquidaciones efectuadas por su inferior, quien para ello tomó el promedio de los salarios devengados en el último año, que no es lo procedente, por desconocer la convención colectiva y desatender los efectos de cosa juzgada que tiene la conciliación suscrita entre las partes, en la que el actor lo declaró a paz y salvo, acuerdo que debió acoger, como lo hizo el juez, respecto del salario básico reportado y el monto de la pensión proporcional concedida.

XIII. CONSIDERACIONES

En lo que específicamente interesa al beneficio consistente en el suministro de carne, el sentenciador consideró que éste constituía salario en especie por cuanto ayudaba al trabajador a su manutención y a la de su familia, además por su periodicidad, y porque como lo había dicho en otras oportunidades, en el acuerdo convencional no se pactó expresamente que aquel dejaría de serlo.

La censura por su parte asegura que la provisión de carne, calificada por el juzgador como retribución salarial, no corresponde a tal concepto, pues lo que medió entre las partes fue la compra y venta de dicho producto, como propiamente se pactó en el acuerdo extra legal suscrito con la USO, documento que, alega, el funcionario judicial no

apreció en forma total y detallada, concretamente en su capítulo VII en el que se consignan los objetivos, bondades y facilidades para la abastecimiento de víveres.

A efecto de definir el asunto es conveniente recordar que el principal compromiso del empleador lo constituye la retribución de los servicios prestados por el trabajador, obligación que se debe cumplir con la entrega de moneda legal, tal y como lo dispuso el artículo 24 de la Ley 83 de 1931, norma que luego se reprodujo en el artículo 134 del C.S.T.

Valga la pena anotar que, con independencia de la denominación que se le dé al desembolso bien por corresponder a moneda legal o a otros elementos en especie, si con ellos el empleador recompensa la labor, los mismos siempre serán salario; incluso si bajo las preceptivas del artículo 128 del C.S.T modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, las partes consignan expresamente lo contrario, pues la naturaleza salarial no puede ser desconocida aún so pretexto de ejercer la facultad consagrada en dicha normativa, como se precisó en la sentencia CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, en la que se explicó que aunque el texto legal no era muy claro, de él se desprendía la posibilidad de que las partes acordaran que ciertos conceptos salariales no fueran incluidos para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, mas no que aquellos dejaran de ser salario, posición que se ha acogido entre otras en la providencia CSJ SL, 12 jul. 2011, rad. 38832, en la que se avizoró la ineficacia de una cláusula en la que se pactó el

despojo de la naturaleza de salario sobre algunos conceptos que tenían esa esencia, línea que también se consignó en la sentencia CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, igualmente, en providencia SL9544 – 2014, 9 jul.2014, rad.43696, se precisó que la facultad legal que prevé el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no es absoluta.

De otra parte, y correlativamente con la obligación de retribuir en dinero el servicio prestado, la Ley 6ª de 1945 y su Decreto reglamentario 2127 del mismo año, enarbolaron la prohibición de compensar los servicios del trabajador con la entrega de mercancías u otros elementos, pues ello sería un trueque que llevaría inmersa la actitud fraudulenta del empresario, en otras palabras, constituiría un abuso, como lo destacó el Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia del 3 de noviembre de 1954, al decir:

Dentro de la política social de protección al salario, la tendencia universal moderna ha impuesto el pago en metálico como forma principal de remunerar el trabajo humano. Por eso el “Truek system” o sistema de trueque, que consiste en pagar el salario en mercancías o en bonos o papeles que no tienen curso legal y únicamente son canjeables por artículos de consumo inmediato suministrados por el patrono en sus propios establecimientos o comisariatos, ha sido prohibido en casi todos los países por ser un sistema inmoral y lesivo de los intereses de los trabajadores, que facilita el fraude del patrono para disminuir la remuneración del asalariado mediante el encarecimiento arbitrario del valor de los suministros.

No obstante lo anterior, la posibilidad de ofrecerle al asalariado, en venta, diferentes elementos, siempre y cuando se le deje en plena libertad de acudir a otros establecimientos ajenos a los del empleador, y se haga la debida publicidad de las condiciones de la transacción, se concibió como algo

viable; así lo evidencia el texto del artículo 5º de la ley 6ª de 1945, que es del siguiente tenor:

Parágrafo 1. Queda prohibido el pago de salarios en mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento o alimentación al asalariado que viva dentro del radio de la empresa.

*Queda igualmente prohibido al patrono vender a sus asalariados mercancías o víveres, **a menos que se cumplan las siguientes condiciones:***

1a. Libertad absoluta del asalariado para hacer sus compras donde quiera; y

2a. Publicidad de las condiciones en que se hacen las ventas.

De tal suerte que la factibilidad de que el empresario le venda a sus colaboradores, distintos productos, en tiendas o comisariatos, no puede ser considerada a primera vista, como una prohibición a éste; tampoco de la disposición en referencia, se erige como una imposibilidad, el que las partes en ejercicio de la libertad empresarial que prevé la Carta Política, puedan pactar la creación y funcionamiento de establecimientos de comercio, en los que se facilite al asalariado la adquisición de los elementos, que **en venta** ofrezca el empleador, pues el numeral 2º del artículo 59 del C.S.T prohíbe esa actividad pero solo si se obliga al trabajador a adquirirlos en los expendios propiedad de este último.

Ahora bien, en lo que respecta a la disposición convencional denunciada, estima la Corte que bajo una nueva lectura, en aplicación del método sistemático, como lo propone el censor, y con fundamento en que la interpretación

de los convenios extra legales debe hacerse de manera integral, útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes, como se indicó en la sentencia SL 17030 – 2016, 16 nov.2016, rad. 46583, se advierte la necesidad de analizar no solamente el texto del segundo inciso del parágrafo 1 del artículo 57 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 - 2002, como restringidamente lo hizo el Tribunal al acoger la sentencia de primer grado, sino la integridad del mismo e incluso el de los que lo acompañan en el capítulo en el que aquel se ubica, y que aluden a los comisariatos y casinos, para extraer el verdadero querer de las partes; documento que valga la pena reiterar fue denunciado por la censura como erróneamente apreciado.

La norma aludida es del siguiente tenor:

CAPITULO VII.
Comisariatos y Casino.

Artículo 57.- La Empresa continuará sosteniendo los comisariatos de El Centro y Barrancabermeja y los seguirá dotando de todos los servicios necesarios para su buen funcionamiento y de las medidas de seguridad que se requieran en la ejecución de todas las labores para preservar la salud de los trabajadores.

*La USO designará una comisión integrada por un (1) representante de la Subdirectiva de El Centro y un (1) representante de la Subdirectiva del Complejo Industrial que estará encargada de coordinar con los dos (2) miembros designados por la Empresa para vigilar las fuentes de suministro de los artículos que se **expenden** en el comisariato y establecer los controles que sean necesarios para evitar la ocurrencia de actos indebidos en la utilización de este servicio. La Empresa facilitará a la comisión la información necesaria para tales fines.*

Esta comisión, así integrada, se reunirá todos los jueves a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) Los representantes no necesitarán ser citados y tendrán permiso remunerado por ese día y para esas labores.

Parágrafo 1. Ecopetrol **continuará vendiendo** en sus comisariatos, a los trabajadores que tengan familiares inscritos y a estos últimos, los artículos que ha venido **vendiendo al precio de costo más un diez por ciento (10%)** por concepto de gastos de administración, excepto la leche, el azúcar y el aceite, que serán vendidos a precio de costo. **En cuanto al precio de la carne, continuará rigiendo el vigente hasta la fecha.**

“El suministro de carne será de doscientos cincuenta (250) gramos diarios por persona mayor de un (1) año de edad, que forme parte de la familia inscrita del trabajador, durante seis (6) días en la semana.

A los trabajadores que por razones de su trabajo (sobretiempo, cambio de turno) no puedan retirar su carne en el día previsto, se les garantiza la misma calidad, aunque venga de las cavas.

Se excluirán de las tarjetas de comisariato para efectos de este racionamiento, a los hijos de los trabajadores que estudien fuera de Barrancabermeja, quienes únicamente tendrán derecho a tres (3) meses por año, a ser incluido dentro de cupo de carne del trabajador”

Parágrafo 2. Cuando un trabajador sea trasladado y su familia continúe residiendo en Barrancabermeja, si tiene derecho, la Empresa le dará servicio de comisariato hasta por seis (6) meses.

ARTICULO 58.- En los comisariatos de Tibú y Orito la Empresa **expendirá** artículos de primera necesidad, **incluida la carne**, cuyos **precios en ningún caso serán superiores a los que se registren en la localidad respectiva.** Para un efectivo **control de precios** se constituye un comité integrado por un (1) delegado de la Gerencia y un (1) representante del Sindicato en cada uno de esos Distritos. La Empresa facilitará al comité la información necesaria para tal fin.

*En Tibú y Orito la Empresa verificará que sean sacrificados **novillos de primera**, para el **expendio** de la carne en el comisariato.”*

Artículo 59.

La Empresa **suministrará alimentación** en sus casinos, cafeterías o restaurantes que para este efecto tenga contratados, o llegare a contratar, **o subsidios**, al personal que tenga derecho, según las siguientes modalidades:

DISTRO DE OLEODUCTOS (...)

OFICINAS CENTRALES DE BOGOTÁ (...)
(...)

Parágrafo 1. Los subsidios a que se refiere el presente Artículo, para el personal de turno y pito a pito no tendrán incidencia salarial” (Las negrillas no corresponden al texto).

De los pasajes resaltados en negrilla, correspondientes al artículo 57 de la norma convencional, se evidencia que con la existencia de los comisariatos pactados por las partes, se buscó exclusivamente que la empresa le facilitara a sus trabajadores la adquisición, a título de **venta**, de varios víveres, entre ellos, la carne, el azúcar, el aceite, la leche, todo para garantizar la calidad de dichos elementos, y así preservar la salud de aquellos y sus familias.

De las normas convencionales bajo estudio también se desprende que el empleador y sindicato acordaron varias obligaciones, casi todas en cabeza de ECOPETROL, así:

1. Respecto a los comisariatos, el empleador se obligó a:
 - a. continuar con el sostenimiento de los ya ubicados en El Centro y Barrancabermeja.
 - b. dotarlos de todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y
 - c. ejecutar las medidas de seguridad para que operaran correctamente.
2. En conjunto las partes acordaron formar una comisión para que:
 - a. vigilara las fuentes de suministros de todos los artículos que se **vendieran** en los comisariatos y

- b. estableciera controles para evitar actos indebidos en la utilización del servicio.

Para tal efecto la empresa debía facilitarle a dicha comisión, la información necesaria con el propósito de alcanzar sus fines.

- 3. Respecto a los **precios** de los elementos por expender, la empresa se ligó a:

- a. **continuar vendiendo** los artículos **a un precio igual al de su costo, más un 10% por ciento.**
- b. Respecto de la leche, el azúcar y el aceite, no se impondría el 10% adicional al valor del costo.

- 4. En relación concretamente con la carne, se acordó que ECOPETROL se forzaba a:

- a. **mantener el precio que regía a la vigencia de la convención.**
- b. vender hasta 250 gramos diarios por persona mayor de 1 año de edad, que integre la familia inscrita del trabajador, y ello, solo durante 6 días a la semana.
- c. para quienes no pudieran retirar dicho alimento, por razón del cambio de turno, la entidad les garantizaría la misma calidad de la carne expendida, aunque aquella *«venga de las cavas»*.
- d. **en el cupo que tenía cada trabajador** se podía incluir a los hijos de aquel que estudien fuera de Barrancabermeja, pero solo durante 3 meses al año.

Y, por último, en caso de que el trabajador fuera trasladado pero su familia continuara radicada en Barrancabermeja, la empresa les garantizaría el servicio de comisariato hasta por 6 meses.

Resulta entonces evidente que lo que hicieron las partes fue regular una actividad netamente comercial, perfectamente válida, según se explicó, en la que la entidad se comprometió a ofrecerle a los asalariados la posibilidad de que adquirieran en el comisariato de su propiedad, a un determinado precio, esto es, el de costo o mercado, más un 10%, las mercancías que allí se expendieran, entre ellas, se insiste, la carne, elemento para el que se fijó una regulación y tratamiento específico, **comenzando por el precio, pues este sería el que ya regía a la fecha en que entró en vigencia la convención**; recuérdese que textualmente las partes acordaron *«En cuanto al precio de la carne, continuará rigiendo el vigente hasta la fecha»*, todo con el único propósito de asegurar que los víveres que los trabajadores quisieran adquirir, fueran de la mejor calidad.

En la cláusula referida **no se estableció la obligatoriedad** de ECOPETROL **de suministrarles** a los empleados y a sus familiares inscritos, una ración de carne, como de manera equivocada se planteó en la demanda y lo admitió el sentenciador, y mucho menos, se consignó en dicha normativa **la gratuidad** ya de ese alimento, de la leche o del aceite, ni tampoco puede predicarse que en la mencionada disposición se pactó tal prerrogativa como una contraprestación al servicio personal de cada trabajador,

porque como ya se anotó, el objetivo y beneficio de la venta fue otro.

Dicho en breve, el trabajador podía optar por comprar o no los productos ofrecidos en el comisariato, entre ellos, la carne. De otra parte debe resaltarse que lo probado en el plenario fue el precio comercial que aquella tenía para la fecha de su venta, según certificación que expidió el Inspector de Precios y Protección al consumidor de Barrancabermeja, lo que evidencia que, a la luz de lo estipulado en el acuerdo extralegal, esto correspondía a una transacción mercantil, jamás con carácter retributivo o por la contraprestación directa de una tarea; de allí que no fuera necesario advertir en el texto convencional, que el valor cancelado como pago, no sería salario, por la sencilla razón que por su esencia y naturaleza no lo era; aclaración que equivocadamente el sentenciador echó de menos.

Aquí y ahora, por considerarse pertinente al asunto bajo escrutinio, se trae a colación pasajes de la sentencia SL14423-2014, rad. 39520, 8 de oct. 2014, reiterada en varias oportunidades, en la que se resolvió un tema relacionado con la legalidad de la venta de acciones por parte de la empresa a sus trabajadores por un menor valor que el real, así:

En concordancia con lo anterior, a folios 67 a 61 también del anexo 3 tomo II, obra que el actor compró entre el 4 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 1997 a «ORACLE CORPORATION» un total de 1.422 acciones por valor de \$51.734108.00, valor que fue descontado de su nómina conforme lo reconoce la demandada a folio 105 del cuaderno principal.

Todo lo anterior, muestra que efectivamente el actor tuvo un 15% de descuento en el valor de la acción, pero bajo ninguna perspectiva, o por lo menos para el presente asunto, puede concluirse que ese porcentaje de descuento se convierte en salario, y no lo es, por cuanto el mismo no retribuía el servicio, pues simple y llanamente era un «beneficio» más para quienes libre y voluntariamente decidían hacerse a las acciones, pues la otra prerrogativa consistía en que podían pagarlas por descuento de nómina, ello sí, limitando al 10% del salario.

Dicho de otra manera, si un empleado libre y voluntariamente decide comprar acciones a «ORACLE CORPORATION», tiene el beneficio de que dicho valor sea descontado de la nómina y la prerrogativa de obtener un descuento del 15% del valor de la acción; contrario sensu, si un trabajador toma la determinación de no comprarle acciones a «ORACLE CORPORATION», simple y llanamente no tiene los beneficios anteriormente señalados. El salario en el primer y segundo evento sigue siendo igual, pues el mismo no varía si el trabajador compra o no compra acciones; pues lo único que variará será el patrimonio del trabajador en tanto si las acciones de la compañía por comportamientos propios del mercado suben, el patrimonio evidentemente crecerá, al paso que si las mismas bajan, el patrimonio correrá igual suerte, esto es disminuirá.

Y en fallo SL1405-2015, del 11 de feb. 2015, rad. 37348, que reiteró la providencia anterior, se dijo:

De todas maneras, si la Corte admitiera la confesión aludida, según la cual la empresa le otorgaba al trabajador un número igual de acciones a las compradas por éste, ello per se no comporta la naturaleza salarial reclamada por la censura, pues como ya ha tenido esta Sala la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, ese beneficio no constituye una contraprestación directa del servicio, ni tampoco en tratándose de un descuento sobre el valor de dichas acciones.

En conclusión, reexaminada íntegramente la estructura gramatical de la estipulación convencional en comento, así como la intención lógica y razonablemente deducible de sus componentes, para la Sala dicha cláusula que alude a la venta de carne y su incidencia salarial, lleva a colegir que el único entendimiento posible es que, en rigor, el pago hecho en ejercicio de la factibilidad de comprar la carne expendida

en los comisariatos de la empresa, **no constituye salario, puesto que, se itera, ese beneficio no correspondía a una contraprestación directa del servicio;** bajo esta nueva exegesis habrá de casarse la providencia recurrida.

Con lo anterior debe destacar la Sala que cualquier decisión que se haya proferido en sentido contrario, se entiende recogida con la nueva postura que ahora se adopta.

De acá que los errores 1º, 2º, 3º, y 5º que endilga la censura al Tribunal, estén demostrados.

Respecto al 4º error, según el cual el juzgador de la alzada no apreció que en el contrato de trabajo se acordó no darle carácter salarial a los beneficios en especie otorgados por el empleador, es preciso señalar que si bien es cierto el documento que contiene el acuerdo de las partes para dar inicio a la relación laboral reza a folio 178 vuelto lo que dice la censura, también lo es que específicamente en dicho escrito no se apoyó el Tribunal para arribar a la conclusión equivocada de que la carne vendida en los comisariatos era salario en especie, por lo que no pudo protagonizar el equívoco referido por el recurrente.

Así mismo, el censor aduce que el juez colectivo erró al liquidar el auxilio de cesantía porque de un lado incluyó el factor carne como salario en especie, y de otro, porque para ello tuvo en cuenta el salario promedio del último año de servicios cuando debió ser solamente el promedio de los últimos 3 meses de labores, como lo prevé el artículo 104 de

la Convención Colectiva. Es cierto que el Tribunal se equivocó cuando al avalar la decisión del inferior que para liquidar la cesantía incluyó el factor carne, pues como ya se dejó visto, éste no es salario en especie.

Ahora, en lo que hace a qué salario debe tomarse para liquidar esta prestación, el artículo 104 de la Convención colectiva prevé que será el último mensual, si no ha variado en los últimos 3 meses, pero si aquel varia *«por aumento del salario ordinario básico, reemplazos de vacantes, sobrerremuneraciones (dominicales y festivos, ganancias extras, sobretiempo, recargos de salario) se tomará como base el promedio devengado en los últimos tres (3) meses o en todo el tiempo servido si fuere menor de tres (3) meses.*

Pues bien, no obstante la afirmación del recurrente en el sentido de que el funcionario judicial tuvo en cuenta el promedio anual, encuentra la Sala que al hacer suyos los fundamentos del juez para liquidar la cesantía, el Tribunal partió del promedio de los 3 últimos meses como se aprecia a folio 498, de tal suerte que respecto de este puntual aspecto, no se evidencia la equivocación que se predica en el sexto de los errores exhibidos por el recurrente.

Afirma igualmente el censor que el juez de apelaciones tomó para liquidar la pensión, el mismo salario base que debe adoptarse para liquidar la cesantía, lo cual va en contra de lo previsto en la convención colectiva, además de incluir el factor carne como salario en especie.

Sobre el particular debe recordarse que el Tribunal directamente no realizó ninguna operación aritmética, pero al acoger las que hizo el juez quien advirtió *“Para la obtención del salario promedio base de la liquidación, se tendrán en cuenta los factores con incidencia salarial por mando legal, convencional y los que se definieron en esta providencia como tales y se trabajará con las doceavas partes de los devengado por cada concepto y la sumatoria dará el valor total del salario base para la liquidación de la pensión”* (folios 500 y 501), en principio no erró, pues al actor se le concedió pensión de jubilación con fundamento en el acta de acuerdo suscrita entre la USO y ECOPETROL con intervención de la Conferencia Episcopal de Colombia, como se consignó en la conciliación, en los siguientes términos: *«Consecuente con lo señalado, se reconocerá y pagará mensualmente una pensión especial de jubilación de carácter vitalicio, cuyo monto corresponderá a un porcentaje sobre el salario promedio mensual devengado en los últimos doce (12) meses de labores registrados en ECOPETROL S.A. y teniendo en cuenta que la base para liquidar esta proporción será el 75% establecido para el personal que cumple con los requisitos exigidos para el Plan 70 (...)»* (Folio 63), aunque no había cumplido 20 años de servicio ni tenía la edad de que trata el artículo 109 de la Convención Colectiva, que preveía: *«La Empresa continuará reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, a los trabajadores que habiendo llegado a la edad de cincuenta (50) años, le hayan prestado servicios por veinte (20) años o más continuos o discontinuos, en cualquier tiempo, de conformidad*

con el Decreto 807 de 1994. Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de veinte (20) años, reúnan setenta (70) puntos en un sistema en el cual cada año de servicio a Ecopetrol equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto. Esta pensión de jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por decisión de la Empresa.” (folio 94 cuaderno 2).

No obstante lo anterior, el sentenciador de primer grado incurrió en el error de tomar el salario de los últimos tres meses, para liquidar esta prestación, como se aprecia a folio 501, cuando debió ser el promedio anual.

De tal suerte que se tipifica el séptimo de los errores reprochados por el recurrente.

Las anteriores argumentaciones generan el quiebre de la sentencia del Tribunal respecto a la confirmación de la decisión del juzgado que le dio la connotación de salario en especie a la venta de carne, e incluyó en la liquidación de cesantía y pensión la correspondiente fracción, y además, porque al liquidar ésta última no tuvo en cuenta el promedio de lo recibido en el último año de labores.

Respecto al efecto de cosa juzgada que el recurrente asegura debe aplicarse al valor del último salario devengado que se fijó en la conciliación suscrita entre las partes en la suma de \$41.144 diarios (folio 63) y que al ser declarada legal por el juez y posteriormente confirmada por el Tribunal, debe tenerse en cuenta, es preciso decir que el funcionario de

primer grado sobre el particular indicó *«En conclusión para la liquidación de las cesantías y demás pretensiones de la demanda, se tendrá como salario diario la suma de \$41.144 diarios (sic), que estaba devengado al momento del retiro»* (folio 487), de tal suerte que carece de soporte el reproche de la censura, pues tal y como lo pretende, el sentenciador partió de ese valor para la liquidación de prestaciones sociales.

Finalmente no puede achacarse error alguno al juez de la alzada por haber ordenado la indexación de las condenas, en tanto la argumentación del recurrente para alegar que ésta no procede, se ampara en la supuesta inexistencia de obligación a su cargo, que como se vio, sí procede.

Así las cosas el cargo resulta victorioso y se quebrará la sentencia en lo pertinente.

Sin costas en el recurso extraordinario.

XII. FALLO DE INSTANCIA

Suficientes resultan las argumentaciones esgrimidas en sede casacional para puntualizar que le asiste razón a la entidad apelante en cuanto afirma que *«el factor carne»*, que el juez de primer grado incluyó para reliquidar prestaciones legales y extralegales, no es salario en especie, y por tanto se impone la revocatoria parcial del ordinal 2 de la sentencia en cuanto así lo declaró, y la revisión de las condenas que se ampararon en la argumentación ya referida.

Se observa que para obtener la prima de servicio del último semestre de 2003 y primero de 2004, el funcionario judicial con fundamento en el artículo 118 de la Convención colectiva que prevé que *«las primas, viáticos, viáticos sindicales y subvenciones que reciba el trabajador, constituyen factor de salario en la proporción que señala la ley»*, incluyó como salario las sumas de \$1.276.800 y \$1.279.141, respectivamente, que dijo había recibido el trabajador por concepto de carne, rubros que deben excluirse de los restantes factores que tomó en cuenta el juez y frente a los cuales no hubo reparo.

Hechas las operaciones aritméticas, excluido el valor de la carne, tenemos que durante el último semestre de 2003, el actor recibió entre salario básico, sobre remuneraciones, prima de antigüedad, prima convencional, prima de vacaciones, subsidio de transporte, subsidio de arriendo y subsidio de alimentación, un total de \$12.657.486, que dividido por los 180 días del semestre, arroja un diario de \$70.319,36 que multiplicado por 15 días, da \$1.054.790,40 y resulta que la empresa según folio 102, le canceló al actor por ese concepto, \$1.153.814, es decir no adeuda cifra alguna, por el contrario a su favor queda un saldo de \$99.023,60.

Respecto de la prima del primer semestre de 2004 el servidor judicial, excluyendo el valor de la carne, recibió un total de \$6.361.214, que divididos entre los 124 días que laboró el actor en ese período, arroja un diario de \$51.300,11 que multiplicados por los 10,33 días que en proporción le

correspondería, provocaría la obligación de pagar \$529.930 y ECOPETROL, según se aprecia a folio 87 canceló \$465.955, vale decir, que debería por ese ítem \$63.975; sin embargo como existe saldo a su favor por concepto de primas en cuantía de \$99.023,60, al compensar la obligación, se establece que no hay condena por fulminar, pues a favor de Ecopetrol persiste un saldo \$35.048,60

Así las cosas la condena que el operador jurídico fulminó en cuantía de \$159.542 en el literal c) del ordinal cuarto de su providencia, se debe revocar.

No se evidencia que para reliquidar las primas de antigüedad, vacaciones y quinquenal, el juez hubiera adicionado alguna suma por concepto de carne, por lo que no serán objeto de revisión.

En cuanto a la liquidación del auxilio de cesantía, el juez incluyó \$638.400 por concepto de carne, que debe restarse a los \$6.762.833 que suman todos los factores que tuvo en cuenta la entidad, correspondiente a los 3 últimos meses de servicio, es decir ha de partirse de \$6.124.433 que dividido entre 94 días y multiplicado por 30 arroja como salario, del que se debió partir para hacer las operaciones, la suma de \$1.954.606,28, que multiplicado por los 19 años, 8 meses y 11 días (7091 días) que duró la relación laboral, y dividido por 360, da un total de \$38.500.314 a los que se les descuenta los \$38.250.221 de pagos parciales de los que da cuenta la documental de folio 76, de tal suerte que la

diferencia a favor del actor debió ser de \$250.093 y no de \$11.341.540 como equivocadamente lo dijo el juez.

En relación a la pensión, como se dijo en sede casacional, el juez tomó para liquidarla el promedio del último trimestre cuando debió ser el del último año; ahora, al sumar todos los factores salariales que el sentenciador tuvo en cuenta para liquidar las primas de servicio se evidencia que el demandante debió recibir \$24.128.241 en los últimos 360 días de servicio, y la empresa según la documental de folio 74, partió de \$24.619.994, es decir una cifra superior, de la que obtuvo un promedio mensual de \$2.051.666 al que aplicó el 67.5% para lograr como mesada inicial la suma de \$1.384.875, que luego reajustó según da cuenta el folio 192, a la suma inicial de \$1.430.509.

De esta forma se evidencia la equivocación del juez de primer grado al imponer una mesada superior a la que realmente correspondía al demandante y consecuentemente imponer reajustes que no tienen asidero fáctico; por ello se revocará la condena impuesta en el ordinal tercero de la sentencia recurrida y en la parte final del ordinal cuarto respecto del reajuste pensional que se impuso en cuantía de \$14.616.986.

En lo demás la sentencia será confirmada.

Las costas correrán a cargo del demandante.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CASA** la sentencia del 30 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso adelantado por **ÁLVARO GÓMEZ LIZARAZO** contra la **EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S. A.**, en cuanto consideró que el suministro de carne es salario en especie e incluyó su incidencia en la liquidación de prestaciones sociales.

En sede de instancia se **REVOCA** el ordinal SEGUNDO de la sentencia emitida el 24 de junio de 2010 por el juez laboral de Puerto Berrio en cuanto declaró que la compraventa de carne, es salario en especie; en su lugar se **DECLARA** que no lo es; se **REVOCA** el ordinal TERCERO en cuanto declaró que la mesada inicial de pensión de jubilación es de \$1.525.077, en su lugar se **DECLARA** que lo es de \$1.430.509; se **REVOCA** el literal c) del ordinal CUARTO en cuanto fijó como valor de la diferencia por prima de servicios del primer semestre de 2004, la suma de \$159.542, en su lugar se **ABSUELVE** de este concepto; se **MODIFICA** el literal e) del ordinal CUARTO en cuanto condenó al pago de \$11.341.540 por concepto de reliquidación del auxilio de cesantías, en su lugar se fija en cuantía de \$250.093; se **REVOCA** la parte final del ordinal CUARTO en el que se ordenó «*reajuste de la pensión de jubilación \$14.616.986*» y

en su lugar se **ABSUELVE** de dicho concepto. Se **CONFIRMA** en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de Sala

Impedido

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

FERNANDO CASTILLO CADENA

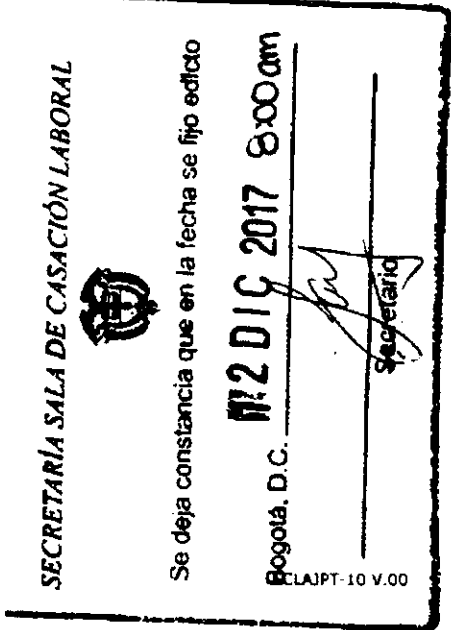
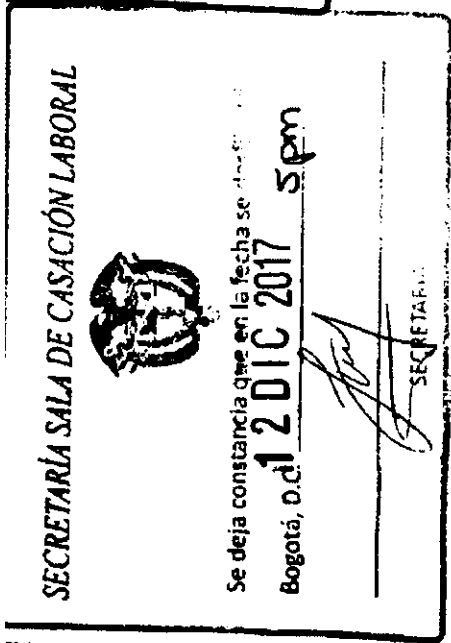
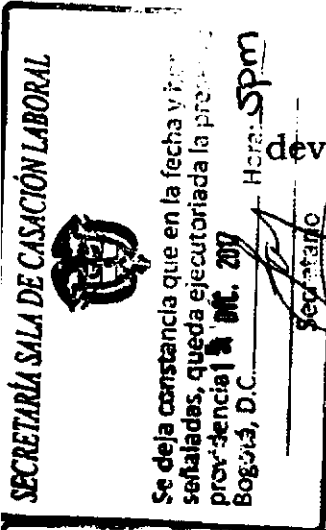
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Aclaro voto

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN





República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Álvaro Gómez Lizarazo

Demandado: Ecopetrol S.A.

Radicación: 48833

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Como tuve la oportunidad de manifestarlo en la sesión correspondiente, si bien estoy de acuerdo con la interpretación que la Sala le atribuyó al texto convencional, disiento de la consideración conforme a la cual este es *«el único entendimiento posible»* que se le puede asignar a la cláusula.

En diversas ocasiones, he insistido en que las normas jurídicas no tienen un *único* o *verdadero* sentido, descubrible empíricamente. Este tipo de concepción, cimentada en una teoría cognoscitiva positivista del siglo XIX, ha sido abandonada por la teoría de la interpretación jurídica desarrollada en el contexto de los Estados constitucionales y democráticos.

Ello obedece, en primer lugar, a que en las prácticas interpretativas entran en permanente tensión valoraciones de los intérpretes, los métodos hermenéuticos, las reglas semánticas y sintácticas de la lengua, y las construcciones dogmáticas de los juristas. Así, y teniendo en cuenta que de acuerdo con el enfoque en que se aborde la comprensión de una norma puede variar su sentido o adoptar múltiples lecturas, es difícil sostener que existe una única, verdadera o genuina interpretación. De hecho, al interior de la Corte

permanentemente se producen tensiones interpretativas, divergencias de criterio y salvamentos de votos frente al alcance de cláusulas convencionales, de tal suerte que sostener que una disposición posee un «*único entendimiento*» es contra-intuitivo.

En segundo lugar, bastante ha decantado la teoría del lenguaje acerca de que las palabras no poseen un significado propio, intrínseco o verdadero respecto a los fenómenos descritos por ella. Contrario a lo anterior, el lenguaje es primordialmente convencional, es decir, producto de acuerdos entre individuos. Es normal, por lo tanto, que las palabras o frases suelen ser vagas, ambiguas o equivocadas; a veces no se sabe si un caso se encuentra regulado por una norma X o a veces no se sabe si la norma X se refiere a ese caso o a otro, por mencionar algunos ejemplos de indeterminación.

En estas condiciones, es natural a los textos normativos, en tanto representaciones lingüísticas que, sean pasibles de una pluralidad de interpretaciones; unas mejores que otras, pero al fin y al cabo posibles lecturas. Luego, sostener que un enunciado tiene *solo* una *verdadera* comprensión es contrario a lo que identifica el lenguaje en la comunidad: su indeterminación y equivocidad.

Pero adicionalmente, considero que la interpretación con autoridad que por mandato constitucional realiza la Corte Suprema de Justicia no puede ser empleada con fines ideológicos, esto es para descartar cualquier alternativa o reflexión interpretativa distinta para imponer una visión única del mundo. Entre otras cosas, porque nada obsta que al interior de la Corporación o en el desarrollo de los recursos que llegan a su conocimiento, se plantee una postura mejor argumentada o

más sólida. En este escenario la Corte tendría un enorme obstáculo para variar su criterio, ya que lo esencial o verdadero no puede variarse, y si se hace, sería contrario a la realidad o falso.

Por esto, he manifestado la necesidad de abandonar estos criterios esencialistas que imposibilitan y petrifican la renovación jurisprudencial. Así como la argumentación jurídica, la hermenéutica jurídica es un fenómeno complejo, deliberativo y en permanente construcción, que no puede esterilizarse so pretexto de respuestas únicas o verdaderas a las que no es posible oponer otra visión.

En los anteriores términos, aclaro el voto.

Fecha *ut supra*.



CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral
Sala de Descongestión N.º 4

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

AL1640-2021

Radicación n.º 68285

Acta 011

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Corte el incidente de nulidad presentado por la demandada **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**.

I. ANTECEDENTES

Manifiesta la pasiva que la causal de nulidad invocada, es la de falta de competencia, enmarcada en los artículos 29 de la Constitución Política y 133, numerales 1 y 2 del CGP, en armonía con el precepto 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 2 de la ley 1781 de 2016, la cual, destacó, es absoluta e insaneable.

Expone, que esta Corporación basó su decisión, en que, pese a citar la sentencia CSJ SL20037-2017, desconoció que allí, en esa providencia, se consignó *«la imperiosa necesidad que se acredite el requisito de solemnidad del depósito en*

término de la Convención Colectiva de Trabajo, aun cuando no se haya discutido la validez de la misma en el proceso, contrario a lo concluido en la sentencia que se analiza».

Sostiene, además, que la jurisprudencia de esta Corte, ha exigido que, *«cuando un derecho debatido en un juicio penda de la convención colectiva de trabajo la misma debe aportarse (auténtica o en copia), **y, en todo caso, debe acreditarse que se cumplió con la exigencia del depósito de la convención, realizado en tiempo**».*

Que, por lo anterior, dice, *«se desconoció el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la exigencia del depósito de la convención colectiva de trabajo, como carga de la prueba del demandante cuando pretende la aplicación de derechos derivados de una convención colectiva de trabajo».*

También funda la nulidad impetrada, en el salvamento de voto presentado en el *sub lite* y, en que esta Sala *«carece de competencia para dictar un fallo a través del cual se modifica la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió en este proceso, por eso debe ser anulado con base en las causales enunciadas en el Capítulo II de este escrito».*

Por su parte, el accionante, al descorrer el traslado del presente incidente, expone, en síntesis, que la nulidad impetrada es extemporánea por cuanto habían transcurrido 38 días hábiles desde la ejecutoria de la sentencia de casación y 8 con posterioridad a la publicación del

salvamento de voto, por lo que, *«se han excedido los términos de ley y, por, sobre todo, la vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica»*. Estima, basado en el artículo 134 del CGP y en la Ley 153 de 1987, que, a pesar de la amplia posibilidad de *«abrir un incidente de nulidad en cualquier tiempo [...]»*, ello no es sostenible en el presente caso.

Se refiere, además, a la sentencia CC C-083-1995, y reitera que la solicitud de nulidad sobre la sentencia de casación del 9 de junio de 2020, es extemporánea.

Refiere, en lo atinente a los fundamentos fácticos y jurídicos del incidente, que la parte demandada *«se escude en que no se aportó la constancia de depósito de la Convención Colectiva de Trabajo, cuando el debate probatorio no giró sobre ese asunto, sino sobre si el despido fue justo o injusto y aceptó la demandada que el procedimiento disciplinario se encontraba establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época de los hechos al igual que en el Reglamento Interno de Trabajo»*.

Seguidamente sostiene que en las voces del artículo 136 del CGP, la nulidad se considera saneada, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla, o, que pudiendo argüirla, la convalidó expresamente antes de renovarse la actuación anulada, y, cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa. Que, si lo pretendido por la pasiva era probar que, *«cumplió con el procedimiento disciplinario contenido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, le correspondía con la*

contestación de la demanda aportarla, conforme lo dispone el artículo 167 del CGP sobre la carga de la prueba».

Significa, que no es este el momento –cuando ya se profirió sentencia de casación–, de reclamar la nulidad de ésta por la ausencia de la constancia de depósito, cuando no lo dijo en la contestación de la demanda, *y ni siquiera la aportó*, para defender su posición de que el despido fue con justa causa.

Y en lo concerniente al alejamiento de esta Colegiatura del precedente, destaca, que, *«el tema relativo a la validez de la CCT en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes».*

II. CONSIDERACIONES

Empezará la Sala por recordar, para solucionar el incidente de nulidad planteado por la demandada en el caso bajo estudio –bajo la tesis de que en la sentencia de casación CSJ SL2161–2020, desbordó la Corte la órbita de su competencia–, que el juez de primera instancia, resolvió, en lo que le interesa a este asunto, lo siguiente:

[...] SEGUNDO: DECLARAR que LA EMPRESA DRUMMOND LTD, despidió al señor RENÉ ALFONSO MONSALVE LOPERA, **sin cumplir el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo 2008-2010**, en consecuencia, reintégrese al demandante al puesto de trabajo que venía ocupando o uno de igual categoría. (Se resalta).

Esa decisión, que la empresa demandada despidió al actor *sin cumplir el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo*, jamás fue controvertida en las instancias por la demandada, es así, que, ni al contestar la demanda, ni al fijarse el litigio, ni al apelar, se refirió a ello (f.º 79 al 84; 163 a 165 y 210 a 213), de donde refulge el error del Tribunal, al incursionar en un tema ajeno a la discusión propuesta en el recurso de apelación, precisamente, por no estar acorde o en consonancia, con las materias objeto de la alzada (artículo 66A del CPTSS).

Recuérdese, como se dijo en la sentencia que genera el incidente de nulidad, que la empresa alega la justeza de la terminación del contrato, en que:

[...]

2. Se llamó al Sr. René Alfonso Monsalve a rendir sus descargos y se le comunicó al sindicato Sintramienergética, para que dos de sus miembros asistieran a esa diligencia, **tal como lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo**. Aclaro Sr. Juez que el Sindicato no tiene obligación de enviarlos y la empresa no tiene obligación de esperarlos a que lleguen a la diligencia. A la hora programada se inicia la diligencia estén o no estén lo importante es que este el disciplinado y se le haya informado al sindicato para que los envíe, tal como lo hizo Drummond Ltd.
3. En la diligencia de descargos el Sr. Rene Alfonso Monsalve aceptó y reconoció su falta.

Hasta acá es claro que la pasiva, se aviene a la convención colectiva de trabajo allegada al plenario. Todavía más, al referirse a los hechos 10, 11 y 13 de la demanda, expuso:

Al décimo hecho: Es cierto parcialmente, dejar solas las locomotoras, lo cual se considera una falta grave, **la obligación de la empresa es llamarlo a descargos tal como lo ordena la**

Convención Colectiva de Trabajo vigente en el momento en que se produjo su retiro de la empresa en su artículo 6º Y NO son ciertas las otras afirmaciones que hace el demandante, ya lo hemos dicho: **en la CCT está establecido el procedimiento y los términos que tiene la administración para tomar decisiones sobre las sanciones que ha de imponer a un trabajador por violación al Reglamento Interno de Trabajo.** La terminación de un contrato no es una sanción.

Al décimo primer hecho.- No es cierto, es una interpretación errónea: la empresa en el momento de llamar a descargos envía una copia del llamamiento al sindicato, y el sindicato escoge dos miembros para que acompañen al disciplinado a la diligencia de descargo, es el sindicato quien no envió el otro miembro, el hecho de que el sindicato envíe o no envíe a sus representante no invalida el proceso pues la responsabilidad recae sobre la directivas de Sintramienergética, mas nunca sobre la empresa, ella cumple con enviarle la copia al Sindicato. **El proceso disciplinario fue estrictamente ceñido a las normas convencionales.**

[...]

Al décimo tercer hecho; Es cierto parcialmente, tanto el Reglamento Interno de Trabajo **como la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época de los hechos establecieron escalas de sanciones y el procedimiento para aplicarlas.** A pesar de que la terminación del contrato por justa causa no es una sanción y así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia en muchas jurisprudencias, **la empresa Drummond Ltd. fue celosa en el cumplimiento del procedimiento establecido convencionalmente.** (Destaca la Sala).

De donde, se aprecia que ninguna inconformidad se presentó desde el nacimiento del proceso hasta el recurso de apelación, sobre la existencia y validez de la CCT vigente para la época de los hechos, al punto, que lo argüido en alzada, fue:

El a-quo al expresar sus consideraciones para tomar la decisión de condenar a mi cliente, se fundamenta en tres aspectos, todos ellos relacionados con el artículo 6º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 2008-2010.

Son tres aspectos que analiza el a-quo:

- a) Asistencia de los representantes del sindicato a la audiencia de descargos.
- b) En lo que toca a las sanciones disciplinarias impuestas al trabajador demandante y

c) Con respecto a los términos de envío de la comunicación al demandante, asunto que no es parte de la controversia.

De los tres aspectos anteriores, los dos primeros, no son motivos de condena [...].

[...]

Fundamenta, el a-quo única y exclusivamente la condena multimillonaria a mi cliente argumentando que la comunicación que se le envió, al demandante para que concurriera a rendir descargos, no se realizó dentro de los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. [...].

Y fue justamente por lo anterior que la Corte, fundada en su jurisprudencia (para el caso la sentencia CSJ SL20037-2017), arribó a la conclusión de que debía casar el proveído recurrido. Así lo adoctrinó la Sala en la providencia citada:

Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del C.S.T impone el cumplimiento de tal actuación incluso exigiendo que se haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 – 2014, SL4427 – 2014 y SL 930 – 2014, supuesto que además y contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo, es de advertir que **el tema relativo a la validez de la Convención Colectiva en que se amparó el Tribunal para resolver la controversia, no fue planteado al contestar la demanda como argumento de ataque, ni se vislumbró en el desarrollo del proceso, ni en la apelación se adujo tal motivación, por lo que puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes.**

Así las cosas, rememorando la sentencia 35685 de 3 de mayo de 2011 radicación 35685 **«al no existir debate alguno en torno a la naturaleza de las prestaciones, mal puede la recurrente exigir prueba solemne de la convención colectiva de trabajo, cuando, se insiste, no fue materia de controversia», la fuente normativa de la prestación.** (Resalta la Sala).

Y, si al recurrente le llama poderosamente la atención que, **«esta Sala de Descongestión, mayoritariamente, haya omitido transcribir los párrafos siguientes de la sentencia que citó como base de su decisión (SL 20037-**

2017), ya que, de haberlo hecho, hubiera quedado en evidencia lo que en realidad constituye la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia [...]], es decir, que, «**en todo caso, debe estar acreditado el requisito legal de la constancia de depósito en tiempo de una convención colectiva de trabajo, cuando es la fuente del derecho debatido en un proceso** [...]]», forzoso es recordar, el texto de los acápites de la sentencia que echa de menos la demandada, esto, para constatar, si en efecto de allí se extrae, que siempre debe estar probada la constancia de depósito. Así lo dijo:

De otra parte, con independencia de lo *tenue* que le pueda resultar a la censura el sello que se reporta a folio 343 del plenario en armonía con el que obra a folio 351, se infiere que la convención colectiva con vigencia 2001 – 2002 adosada, se suscribió el 11 de junio de 2001 y se depositó el 12 del mismo mes y año, y al día siguiente se allegaron sus anexos como se describe en la respectiva nota de la Dirección Regional Bogotá - Cundinamarca, es decir, dentro del término legal.

De tal suerte que no solamente porque en el acontecer litigioso ECOPETROL no puso en duda que al demandante se le aplicara la normativa en que aquel fundaba sus súplicas, **al punto que al esgrimir la defensa adujo que la liquidación de las prestaciones se ajustaba a las directrices convencionales**, sino también porque en el plenario obra la prueba que demuestra la satisfacción del requisito de solemnidad echado de menos, se concluye que el cargo carece de soporte y por ello se declarará infundado. (subraya y resalta la Sala).

Allí, contrario a la interpretación que la pasiva le da a lo transcrito, lo que dijo la Corte fue, **que no solo por no haber puesto en duda el empleador la aplicación de la convención colectiva** (normativa), sino también (léase con mayor razón), **porque en aquel proceso estaba la prueba de la constancia de depósito**, es que el cargo, por carecer de soporte probatorio, se declaró infundado.

Aquí, en este juicio, basada la Corporación en la ausencia de controversia sobre la validez del acuerdo colectivo, tal como se dijo en la providencia CSJ SL20037-2017, se avizó el error del Tribunal, por lo tanto, no se alejó esta Sala del precedente de la Corte Suprema de Justicia, y por remate, se negará la nulidad solicitada.

En lo atinente al salvamento de voto pronunciado en el *sub lite*, que le sirve de apoyo a la solicitud de nulidad que ocupa a la Sala, necesario es indicar que las sentencias allí relacionadas (CSJ SL378-2018, reiteradas en las SL5025-2019 y SL3587-2019), se enfocan en el punto concerniente a la constancia de depósito de la convención colectiva de trabajo y la necesidad de auscultar sobre este tópico como generador de derecho, pero, no en lo relativo a la ausencia de discusión sobre la legalidad y vigencia de dicho acuerdo colectivo (que es lo que refiere la sentencia en la cual se apoyó la Sala – SL20047-2017), cuando las partes así lo aceptan expresamente, es decir, saben que la convención está allí y surte plenos efectos legales, que fue lo sucedido en este caso.

Recuérdese, que los litigantes confesaron a través de sus apoderados en la demanda y su contestación (art. 193 del CGP), que el asunto sometido a discusión, estaba regulado por la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2008 – 2010, y lógicamente, ninguna controversia generaron entorno a este tema, como tampoco lo hizo el juez de primera instancia al momento de decretar las pruebas pertinentes para esclarecer lo debatido, es decir las conducentes y necesarias (artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social).

No en vano el juez laboral está dotado de expresas facultades para dirigir el proceso, por el sendero que le permita salvaguardar el equilibrio entre las partes, pero, especialmente, ***la agilidad y rapidez en su trámite*** (art. 48 *ibidem*), de donde viene, que si existe una confesión sobre la vigencia y validez de la convención que regula el derecho reclamado, era innecesario salir a buscar la que contiene la constancia de depósito.

Por lo expuesto, se denegará la nulidad solicitada.

Finalmente, con fundamento en el artículo 365 del CGP, inciso segundo del numeral 1, se condenará en costas a la parte promotora del incidente de nulidad, por no salir adelante su solicitud.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad impetrada por la demandada **DRUMMOND LTD DE COLOMBIA**.

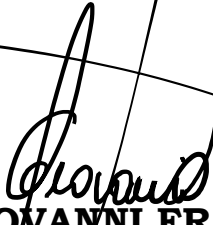
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la pasiva por no prosperar su incidente de nulidad.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen para los fines legales pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.


ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA


OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Salvo voto


GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ